

DOCUMENTO

LA HISTORIA RECIENTE DE CHILE A TRAVÉS DE "LA SEMANA POLÍTICA" (TERCERA PARTE)

Miguel González Pino*

El presente documento corresponde a la tercera parte (de una serie de cuatro) de una antología de artículos publicados en la sección "La Semana Política" del diario *El Mercurio*. La primera de ellas abarcó el período que va desde 1965 a 1970, y la segunda, de enero de 1971 a septiembre de 1973.¹

Este tercer capítulo comprende desde el 11 de septiembre de 1973 a junio de 1978. De acuerdo con el desarrollo de los mismos artículos, a partir de esta última fecha se considera iniciado el proceso de transición a la democracia.

Llama la atención en esta tercera serie de artículos la coexistencia de dos tipos de comentarios: aquellos que se refieren a los sucesos de la semana, y que por lo tanto se basan en las noticias relevantes que han ocurrido en materia política, y otros, nuevos, que tienen el carácter de proposiciones doctrinales.

En cuanto a los primeros, el "estilo mercurial", del que se habló en la primera parte de esta serie² adquiere características muy especiales. Ya no se escribe para el "público político" que sigue los acontecimientos,

* Abogado y periodista. Investigador del Centro de Estudios Públicos. Fiscal del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación.

¹ Véanse *Estudios Públicos* 46 y 47 (otoño e invierno 1992).

² *Estudios Públicos* 46, p. 365.

sino que más bien el comentarista tiene como lector a la propia autoridad. Así, el hecho que motiva el comentario a veces no se menciona, o bien se trata de sucesos que están en conocimiento de la autoridad, pero que no han sido publicados. Se comienza reconociendo lo positivo de la acción del gobierno respecto de ese hecho, y luego, en un tono de sugerencia, se desliza la crítica, cuidando siempre de no herir susceptibilidades. Quien quiera entender y descubrir la crítica, lo logra, pero quien lee superficialmente, o no está al tanto de los acontecimientos, recoge sólo la aprobación a la gestión gubernamental.³

El segundo grupo de artículos, también dirigido a quienes forman parte del gobierno, expone el pensamiento del articulista (que como ya lo hemos dicho es, en este período, el director del diario, Arturo Fontaine Aldunate) respecto de cómo debe construirse el futuro régimen chileno,⁴ partiendo siempre de documentos o declaraciones del gobierno, en torno a los cuales desarrolla sus propias ideas.

El tema más recurrente en este período es el de la importancia de una comunicación expedita entre la autoridad y la ciudadanía, que permita a ésta sentirse incorporada al proceso que se está gestando. También preocupa al articulista que, superada la emergencia institucional, se construya en forma participativa la nueva institucionalidad chilena.⁵

Tal como en las publicaciones anteriores, para mejor comprensión de los artículos se señalan al comienzo detalles acerca de los hechos a que se refiere el comentarista, con indicación de la fuente donde puede encontrarse la información respectiva, teniendo presente, especialmente en esta serie, que los artículos no siempre se refieren a hechos específicos o de conocimiento público.

³ Véase a continuación, por ejemplo, el artículo "Comunicación social", del 21 de octubre de 1973.

⁴ Véase en esta serie, por ejemplo, el artículo "Desarrollo social", del 4 de agosto de 1974.

⁵ Véase a continuación, por ejemplo, el artículo "Solución propia a problemas universales", del 6 de noviembre de 1977.

LA SEMANA POLÍTICA* (1973 - 1978)

Carácter fundacional de la intervención

(16 de septiembre de 1973)

El artículo analiza el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, en especial los conceptos contenidos en el Bando N° 5 de la Junta Militar [cuyo texto se encuentra reproducido en Ordenamiento Constitucional, Edit. Jurídica de Chile, 1980] que se refieren a sus fundamentos. La frase de Salvador Allende que se cita está tomada de un discurso radial pronunciado el 29 de junio de 1973.

La Semana Política

JUNTA DE GOBIERNO MILITAR

El martes 11 la ciudadanía se impuso por radio de la constitución de una Junta de Gobierno, formada por el Comandante en Jefe del Ejército, general de división don Augusto Pinochet Ugarte; el Comandante en Jefe de la Armada Nacional, vicealmirante don José Toribio Merino; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general del aire don Gustavo Leigh, y el Director General de Carabineros, general don César Mendoza Duran.

Luego de solicitar públicamente al señor Allende la entrega de su cargo de Presidente a las Fuerzas

Armadas y Carabineros, el Bando N° 1 de la Junta afirmaba que dichos institutos "están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria y evitar que nuestro país caiga bajo el yugo marxista, y por la restauración del orden y la institucionalidad". Luego se daban las primeras instrucciones a la población acerca de sus derechos y de su seguridad.

Desde el primer instante se advirtió que lo que ocurría era fruto de una meditada y responsable decisión de las instituciones armadas y de orden, decisión que se adoptó en aras del superior interés de la patria y cuyo cumplimiento ha ido demostrando no sólo su justificación moral sino el valor que ha sido necesario para adoptarla y llevarla inflexiblemente a cabo.

La propia Junta, en el Bando N° 5, demostró las razones que mo-

* Se incluye índice de artículos al final del documento, al igual que en las secciones anteriores publicadas en *Estudios Públicos* 46 y 47.

vían a actuar a las Fuerzas Armadas y Carabineros. La conferencia de prensa ofrecida el viernes por el Ministro del Interior, general don Oscar Bonilla, vino a reforzar con antecedentes de hecho el gravísimo peligro que ha corrido el país en manos de quienes capitaneaban la llamada "Unidad Popular" y que incluso trajeron a Chile "asesinos importados" —al decir del Ministro del Interior— para que dispararan contra soldados y simples ciudadanos chilenos.

El señor Allende se negó a entregar el mando, no obstante que la exigencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros unidos coincidía en sus fundamentos con lo afirmado el 22 de agosto por el Congreso Nacional y estaba respaldada por los gremios y por la inmensa mayoría ciudadana. En efecto, ante el absoluto rechazo del gobernante depuesto a la idea de hacer la "rectificación profunda" que las circunstancias exigían, la única salida posible de la crisis moral, política, social y económica era el abandono del poder supremo por parte de su detentador.

No aceptó el señor Allende dar voluntariamente ese paso; se constituyó en el Palacio de la Moneda y resistió a la Junta de Gobierno Militar apoyado esencialmente por extremistas armados con elementos modernos de origen soviético y checo que formaban su milicia institucional e ilegal; incluso los carabineros que componen la Guardia del Palacio obedecieron la orden de la Junta de Gobierno Militar y se retiraron del Palacio de la Moneda.

La empecinada resistencia de los extremistas que empleaban armas clandestinas de guerra desde el

palacio y desde los edificios cercanos a éste convirtió la ocupación de la sede de los Presidentes de Chile en una operación bélica, en que soldados chilenos lucharon valientemente contra milicianos chilenos y extranjeros, fuertemente armados.

Este solo hecho y los abundantes arsenales descubiertos en diversos puntos del territorio, además del poderoso armamento encontrado en La Moneda y en otras dos mansiones del gobernante desaparecido, demuestran que el cargo formulado públicamente por la Unidad Popular a las FF.AA. en el sentido de que habrían hecho uso erróneo de la ley de control de armas era por completo falso. Asimismo eran falsas las acusaciones del Partido Comunista acerca de que los sectores democráticos estaban impulsando una guerra civil. Era falsa e hipócrita —como oportunamente lo hicimos ver— la campaña "contra la guerra civil", que se inició por los comunistas, siguió toda la UP y logró comprometer a algunas mentalidades ingenuas que clamaban por un aflojamiento de las fuerzas democráticas sin más resultado que dar tiempo al comunismo para producir su Yakarta.

"Armas tendrá el pueblo" dijo el señor Allende cuando lo sorprendió el golpe del 29 de junio. A la frase luego quiso dársele un simple sentido alegórico. Ahora se sabe quiénes se dirigían hacia la guerra civil, quiénes contaban con el auxilio de recursos, armas y mercenarios extranjeros y quiénes estaban en la más alta esfera del régimen depuesto, en sus seguidores, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en el Partido Radical cenista, en el Mapu, en la Izquierda

Cristiana, en el Mir y en los otros grupos marxistas. Todos ellos estaban dispuestos a encender la guerra civil y empleaban la vía democrática como táctica.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN MILITAR

El Bando N° 5 de la Junta de Gobierno Militar, emitido en la mañana del martes, antes de que cayera el régimen marxista, da las razones que justifican la intervención militar: grave ilegitimidad del gobierno marxista, demostrada "al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, y derecho en general, a una digna y segura subsistencia"; quebrantamiento de la unidad nacional, fomentando la lucha de clases, perdiendo el aporte de todos los chilenos al bien de la Patria y llevándola a un enfrentamiento fratricida "tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas", incapacidad de mantener la convivencia entre los chilenos "al no acatar ni hacer cumplir el Derecho"; haberse el Gobierno colocado al margen de la Constitución, en variadas formas disimuladas o flagrantes, "las que, por distintos motivos, han quedado sin sanción", uso de "resquicios legales" para atropellar o no cumplir las leyes, falta al respeto mutuo que se deben los Poderes del Estado, "dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República"; y extralimitación de funciones por parte del Poder Ejecutivo, "procu-

rando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y económico, en desmedro de actividades nacionales vitales y poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país".

A estos graves e irrefutables cargos, la Junta añade "que el Presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su autoridad personal está condicionada a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de máxima autoridad que la Constitución le asigna, y por tanto el carácter presidencial del Gobierno".

La Junta observa además el estancamiento o retroceso económico y la hiperinflación; "sin que se vean indicios siquiera de preocupación por esos problemas, los que están entregados a su sola suerte por el Gobierno, que aparece como un mero espectador de ellos".

Con estos antecedentes la Junta de Gobierno afirma que "está en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado Independiente y que la mantención del Gobierno es inconveniente para los altos intereses de la República y de su Pueblo Soberano".

"A la luz de la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico", los antecedentes mencionados por la Junta son suficientes —expresa ésta— "para justificar nuestra intervención para deponer al Gobierno ilegítimo, inmorral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío del poder puede producir, pues para

lograr esto no hay otros medios razonablemente exitosos".

Los propósitos militares son los de "restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas".

Las FF.AA. y Carabineros han asumido con dichos fundamentos "el deber moral que la Patria les impone de destituir al Gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante". El Bando agrega que los uniformados asumirán el Poder "por el solo lapso que las circunstancias lo exijan".

El nuevo Gobierno sostiene su legitimidad en los hechos y circunstancias mencionados, además de apoyarse "en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional". De ahí desprende su propia autoridad, la justicia de sus normas orientadas al bien común y el carácter obligatorio de las mismas.

Siguiendo este esquema general, analizándolo, profundizándolo y apoyándolo en la conducta de la UP frente a las Fuerzas Armadas y Carabineros antes y después de caído el señor Allende, el Ministro del Interior, general don Osear Bonilla, explicó a los periodistas las razones del pronunciamiento militar.

CARÁCTER FUNDACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En el acuerdo de 22 de agosto, el Congreso Nacional declaró el grave quebrantamiento institucional estableciendo circunstanciadamente las formas en que el Gobierno del señor Allende se había salido de la Constitución y de la Ley. El mismo acuerdo recordaba a los Ministros militares de entonces que "las

Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la nación o para una combinación política". Añadía que la presencia en el Gobierno de esos jefes militares "no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y de las leyes, y de convivencia indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo".

El señor Allende contestó en forma inadecuada esta advertencia, y diversos gremios solicitaron al Presidente que renunciara voluntariamente al cargo, mientras que los paros iban deteniendo la actividad del país.

Las Fuerzas Armadas se encontraron con una institucionalidad derribada, con una ciudadanía desesperada, con una economía destruida y con la puesta en marcha subrepticia de un poderoso dispositivo paramilitar, dotado de armas soviéticas y checas, así como de instrucción y mercenarios extranjeros, hechos estos últimos que los elementos civiles desconocían, al menos en las magnitudes que se han evidenciado con la resistencia que los guerrilleros oponen a las Fuerzas Armadas.

Los propios sectores políticos, con sus errores, divisiones y vacilaciones, no lograron superar una situación que ellos mismos habían contribuido a producir.

Circunstancias ajenas a las Fuerzas Armadas y Carabineros han determinado pues que estas institu-

ciones profesionales y apolíticas tengan ahora que fundar un régimen constitucional, que dé garantías a todos los chilenos —como lo quería el acuerdo del 22 de agosto—. Este régimen se ha iniciado en una dura lucha contra el "cáncer marxista" —para emplear la expresión del miembro de la Junta general Leigh— y se ha propuesto no incurrir en los errores que hicieron posible la dramática situación que el país vive a partir de 1970.

Los hombres de armas están luchando por la Patria y no han llegado al poder ni para defender antiguos privilegios ni para revivir pasadas corruptelas, sino para asegurar la estabilidad institucional, la paz civil, la seguridad y el desarrollo, conforme lo expresaba el acuerdo de la Cámara de Diputados de fecha 22 de agosto.

La lucha contra el extremismo extranjero armado ha impuesto el estado de sitio, y las condiciones apremiantes de la misma lucha impiden que la correspondiente declaración sea discutida en un Congreso, dando tiempo así a los adversarios de Chile para que se reagrupen y dilaten los indispensables operativos militares. Así se explican el decreto ley que declara el estado de sitio y la decisión de la Junta de

Gobierno, adoptada el jueves, que clausura el Congreso Nacional declarando vacantes los cargos parlamentarios. La vacancia de dichos cargos impide que los extremistas rebeldes se amparen en el fuero parlamentario, lo que habrían conseguido al seguir en funciones el Poder Legislativo. No está de más recordar que las serias comprobaciones de fraude electoral colocaban en tela de juicio la investidura de muchos parlamentarios, a lo menos en el aspecto moral. La severidad con que proceden las Fuerzas Armadas y Carabineros demuestra que ellas han asumido conscientemente su papel de conductores de una nación que no los tenía y que estaba reemplazándolos por los abanderados de ideologías y potencias extranjeras. Gracias a este proceder, el país ha evitado una guerra civil profunda y dilatada, en tanto que ha salvado su libertad ante el peligro inminente de caer sin retorno en la tiranía comunista.

De la acción de la Junta de Gobierno Militar debe surgir nuestra democracia renovada y purificada, a través de instituciones que alienen el trabajo creador, destierren la demagogia y hagan inútil para siempre la retórica política o la estéril burocracia.

Comunicación social

(21 de octubre de 1973)

Se analiza la situación del momento: brusca alza de los precios del pan, fideos, azúcar, carne, aceite y otros; una gran mayoría de los artículos pasan a tener precio libre (antes era fijado por la autoridad) (EM, 16 octubre, pág. 27).

Las donaciones voluntarias para la reconstrucción nacional alcanzan ya a la suma de 330 millones de escudos (EM, 26 octubre, pág. 25).

La Semana Política

COMUNICACIÓN SOCIAL

El estado legal de guerra interna en que el país se encuentra tiende a restringir la libertad de la comunicación entre las autoridades y el público. La garantía de éxito de ciertos operativos impone la reserva, en tanto que la búsqueda de la paz social exige eludir temas conflictivos, pero ninguna de esas dos limitaciones nos puede hacer olvidar que la autoridad suprema debe saber lo que piensa la ciudadanía y que esta última ha de estar impuesta de las verdaderas intenciones y propósitos de sus gobernantes. Para obtener dicha finalidad, es indispensable una comunicación social libre y ágil, aunque las circunstancias no permitan una plena libertad de expresión.

En los últimos días se ha planteado un grave caso de faltas en la comunicación social. Se trata del programa económico en marcha, cuyos primeros y naturales efectos consisten en una brusca alza de los precios para los consumidores junto con explicables dificultades que se suscitan a los sectores productivos o comerciales para que adopten decisiones económicas.

La población ha recibido a la Junta de Gobierno con grandes esperanzas. La generosidad de las erogaciones venidas de los sectores modestos en favor de la reconstrucción nacional así lo demuestra, como lo hizo presente el señor Ministro del Interior, general Bonilla, al interrumpir su trabajo para atender a un grupo de escolares que le traía en una caja de cartón el valor de lo reunido por sus compañeros. Sin embargo, esa esperanza necesita ser mantenida en la etapa dolorosa de adaptación entre la cantidad de cosas disponibles para los chilenos y la capacidad de éstos para adquirirlas. Como dijo el Ministro de Economía, señor Léniz, el precio de las mercaderías no puede ser inferior a lo que cuesta producirlas. Si esta regla no se aplica, lo que ocurre es que el artículo no se produce o empieza a transarse en la clandestinidad, en el mercado negro, es decir, en el comercio que paga el costo de producción más las utilidades de los intermediarios que compensan con subidas ganancias el riesgo de incurrir en sanciones, lo que significa que el precio pagado por el consumidor es enormemente superior al que

desembolsaría en un mercado normal.

El plan económico está siendo defendido por los señores Ministros, por los técnicos y por los medios de publicidad, pero el Gobierno no ha podido poner en juego todo el enorme apoyo moral con que cuenta para persuadir a la población de que las alzas de precios no son obra del capricho de los funcionarios o de la codicia de los ricos, sino la consecuencia de tres años de indescriptible derroche.

Los gobiernos disponen de hábiles consejeros y de informantes diestros, pero es fácil que entre ellos se deslicen tentativas equivocadas de cerrar el acceso auténtico del pueblo a los gobernantes. Son estos elementos los que cortan la verdadera comunicación social, el contacto espontáneo entre la ciudadanía y el mando supremo.

El asunto es grave porque, en estado de guerra y de sitio, en presencia de enemigos internos y externos, no es concebible prescindir de medidas de seguridad, entre ellas las referentes a comunicaciones. Sin embargo, los buenos contactos entre Gobierno y pueblo son indispensables para la reconstrucción del país. La conciliación de ambas realidades no es fácil. La seguridad interna y externa obliga al sigilo, en tanto que las penurias impuestas por el paso de la anarquía demagógica al orden productivo necesitan de una amplia comprensión popular. Resolver esta contraposición no es tarea sencilla.

La ex "Unidad Popular" se quejó a menudo de que su aparato publicitario era incapaz y que cedía posiciones frente a la ágil ofensiva del periodismo libre. Dicho aparato

publicitario tenía a su favor una política demagógica en que el obrero, el empleado, el estudiante, el consumidor, eran halagados con la exaltación ficticia de su consumo y con la exhibición de un imaginario poder de los trabajadores. Esa política demagógica fracasó por obra de los hechos, pero gracias al dominio de la publicidad logró dejar una imagen mundial atrayente y arriesgar a los chilenos a que vuelvan a la nostalgia, como ha sucedido en su tiempo con los dos Presidentes Alessandri y con el Presidente Ibáñez.

¿Se está preparando al país para comprender por sí mismo lo que ocurre? La madurez política chilena, la organización social y los hábitos de los chilenos exigen que ellos reflexionen por sí mismos y comprendan el momento en que se vive. Para estos efectos, no cabe confundir la información veraz y atractiva con la propaganda. Así como es perjudicial el halago al oficialismo en vez de la crítica respetuosa y positiva.

ÉPOCA NUEVA

Los cortocircuitos de la comunicación entre gobernantes y gobernados han impedido hasta ahora que el grueso de la población comprenda que entramos a una nueva época histórica, que se pone fin a cincuenta años de hábitos que culminaron con el desastre de la UP. Se ha exaltado con razón el espíritu portaliano, pero evidentemente eso no significa que pueda retrocederse a la época en que vivió don Diego Portales. Todo lo contrario: hay que imitar al gran Ministro en lo que él hizo, que fue precisamente la creación de una

verdadera república en forma, la construcción de algo nuevo con los materiales que tenía a su disposición. El espíritu portaliano de la Junta es también un espíritu creador y renovador. Sólo ese espíritu y las expectativas de engrandecimiento del país justifican los grandes sacrificios que están imponiéndose a la ciudadanía.

Por décadas se ha hablado tanto entre nosotros de revolución, que esa palabra es hoy un gastado lugar común. Pero la verdadera revolución es la que se está operando en estos días y que las fallas de la comunicación social no permiten que se aprecie por el público.

Es revolucionario, en efecto, que nuestro país esté ensayando la proeza inédita de convertirse realmente en una república de trabajadores, vale decir, en una sociedad en que trabajemos todos y nos ganemos la vida entregando productos o servicios útiles para los demás. Esa auténtica república de trabajadores destierra al burócrata, al agitador, al especulador y al monopolista. En esa sociedad no hay regímenes de privilegio para el empleado respecto del obrero ni del empresario con relación de quienes participan en la empresa. La libertad de precios y la desaparición de proteccionismos indebidos a las empresas obligan a ser trabajadores y eficientes a todos los chilenos. Sólo prosperarán en ese clima los hombres de empresa, los técnicos y los demás trabajadores que sepan ganarse la vida.

Es revolucionario también que los chilenos pasemos de los derechos en el papel y de las proclamaciones demagógicas al disfrute concreto de las cosas. El derecho a

la salud debe traducirse en buenos y numerosos hospitales, en abundancia de medicamentos y en disponibilidad de profesionales de la medicina y paramedicina. El derecho a la vida significa en la práctica la batida contra los asaltantes y bandidos que aún pululan en Chile, así como también en la acción policial honesta y en la justicia rápida, oportuna y barata. El derecho a la libertad consiste en moverse sin temor dentro del territorio y salir y entrar de él sin trabas; en trabajar, comprar y vender en cualquier punto del país y sin persecuciones u hostigamientos; y en expresarse públicamente y optar sin controles en el plano de la conciencia, y también de la política, apenas el estado de guerra y de sitio lo permitan.

Durante los últimos años la libertad irrestricta de que nos enorgullecemos no ha sido obstáculo para que la capital santiaguina oprima a las provincias; para que el burócrata veje o postergue al particular; para que los injuriadores y calumniadores proliferen; para que los demagogos hagan promesas y propongan "40 medidas" que no están dispuestos a cumplir; para que la baratura de los precios esté en los índices oficiales, pero no en la canasta de la dueña de casa; para que los derechos sociales estén en los textos de las leyes, pero no en la dura vida del campesino, del poblador, del obrero industrial, del empleado modesto.

Las urgencias de estos días han puesto el acento en la reconstrucción, pero esa palabra podría dar la idea de que vamos a retroceder, de que vamos a volver a lo de antes. La verdad es que estamos en los comienzos de un verdadero resur-

gimiento o, mejor dicho, de un "renacimiento", pues la hermosa tarea actual es hacer un país, crear una república que ha quedado desvencijada; construir una economía nueva desde las cenizas de la antigua e iniciar una sociedad de los trabajadores y para los trabajadores.

El concepto de trabajador toma su exacto significado y escapa a las distorsiones a que lo sometió el resentimiento. Trabajadores son los que trabajan, es decir, los altos jefes militares, las autoridades todas, los hombres de armas, los funcionarios, civiles, las dueñas de casa, los empresarios, los profesionales, los técnicos, los empleados de oficina y los operarios. La dignificación del trabajador no está en la demagogia o en la sensiblería, sino en conferir la dignidad propia al trabajo y mostrar que en el esfuerzo del blindado, del alto horno, de la computación, de las prensas, de la pala o del tractor está la realización de la dignidad del chileno. De ese esfuerzo común y armónico vendrán el techo decente, la alimentación abundante, producida en nuestra tierra, la igualdad de oportunidades educacionales y de salud, así

como el deporte, las diversiones y todos los demás sanos agrados de la vida.

El programa económico supone pues una ética nueva y un desentumecimiento de nuestro pueblo, sometido por largos años a la toxina de la inflación y de la mentira.

El renacimiento del país supone una vasta obra de educación de las masas y dicha obra sólo está al alcance de medios informativos independientes y libres, capaces de aplicar su especialización profesional a la debida inteligencia de los propósitos de los gobernantes, a traducir verazmente al público tales propósitos y a realizar la crítica constructiva que toda gran obra requiere. El oficialismo en la comunicación —el uso preferente de medios informativos oficiales— es un peligro para el propio Gobierno, salvo en lo que respecta a los operativos militares que pudieran frustrarse por falta de reserva. La preocupación de algunos por "la imagen" se calmaría bastante si los medios informativos independientes tuvieran toda la libertad necesaria para decir la verdad del Gobierno, que es la honesta verdad de Chile.

Supremo Gobierno

(28 de octubre de 1973)

Se analiza la campaña en el exterior contra la Junta de Gobierno. Muchos líderes de la Unidad Popular se encuentran asilados en embajadas (Gastón Pascal Allende, Mireya Baltra, Gladys Marín y otros). El Gobierno pide a las embajadas una lista de asilados y anuncia que podrán salir del país (EM, 8 octubre, pág. 16). Se destaca el papel de la Secretaría de Gobierno.

La Semana Política

GOBIERNO INTERIOR

Múltiples y difíciles son los problemas que debe afrontar el Gobierno. En primer término, el país se encuentra en un estado de guerra interno, debido a la resistencia a veces sorda y a veces violentamente sorpresiva del comunismo dentro del territorio, en connivencia con el exterior. El comunismo ha perdido una batalla demasiado grande en el caso de Chile para que se resigne a abandonar el campo sin más. Los principales líderes comunistas han salido de la clandestinidad y se encuentran asilados en Embajadas de países de Europa Occidental, de países del Mercado Común y no del Comecón, de países de la OTAN y no del Pacto de Varsovia. Pero la acción clandestina contra el Gobierno militar continúa y es probable que cuente con apoyos significativos por parte de Cuba, capataz de imperialismo soviético en América, y de otros países.

El comunismo a su vez moviliza la campaña publicitaria, entre inocente y malintencionada, que desarrollan contra Chile muchos órganos de prensa con el auxilio de malos chilenos que han vivido en la opu-

lencia en países extraños, merced a los dólares que recibían como producto del trabajo de sus compatriotas. Este asunto publicitario no tiene más inconveniente que el de hacer más difícil la labor diplomática de un Gobierno que sólo aspira a la paz y a la amistad en el campo internacional.

El ataque interno y externo se suma la quiebra de la economía chilena, saqueada hasta extremos casi inconcebibles por la ex Unidad Popular. La reconstitución de la estructura económica desarticulada, la normalización de las actividades, los violentos reajustes de precios que son necesarios para que los bienes se produzcan, todo eso implica un enorme sacrificio para la población, así como también una heroica renuncia a las tentaciones demagógicas y populistas.

El actual Gobierno es respetado y respetable. Sus actitudes pueden arrancar aplausos de admiración y de gratitud, pero sus medidas no podrán ser "populares", en el sentido que dan los políticos a esa palabra. La guerra trae sacrificios e impopularidad. El estado de sitio envuelve sacrificios e impopularidad. La reconstrucción implica sacrifi-

cio e impopularidad. Sobre esto no caben ilusiones. La creación de una nueva institucionalidad redimida de los vicios que hicieron caer a la anterior no es un asunto de oratoria y de halago popular.

En este cuadro de realidades, lo esencial es que el Gobierno consiga el máximo de eficacia con el mínimo de sacrificio para la población.

En el orden económico se está aplicando un plan que debe dar seguros resultados con tal que el Gobierno tenga la valentía de soportar las presiones de los intereses heridos y la queja de todo un país que ha perdido el hábito del trabajo y que carece de espíritu de previsión. Los sufrimientos de hoy serán el bienestar del mañana, porque así conquistan los pueblos fuertes su destino. Para lograr esto, la Junta y sus Ministros se verán obligados a dominar muchas veces sus sentimientos para seguir la marcha hacia el futuro, oyendo y comprendiendo el malestar que provoca la reconstrucción económica, pero sin ceder en las medidas de saneamiento.

Herramienta principal de una política eficaz es por cierto el uso que se haga de los mecanismos de Gobierno Interior. Están ellos destinados en primer término a asegurar el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos, dentro de las circunstancias en que el país se encuentra.

La acción que se realice para desterrar la escalada de delincuencia a que el país estaba entregado y para mover a las autoridades administrativas territoriales a que se dediquen a la limpieza moral y material de la nación, no es por cierto la única tarea política, pero sin lugar a dudas es posible mostrar allí una

rápida eficacia e imprimir un nuevo sello a la vida pública chilena.

Aunque ciertos equivocados expertos de la política no lo crean, el pueblo sencillo de Chile tiene deseos de orden y de paz. Experimentan muchas necesidades materiales. Ha sufrido y se le ha explotado durante gobiernos de derecha, de centro, de izquierda y de extrema izquierda. Todavía tiene paciencia para soportar, siempre que un Gobierno interior eficaz muestre con hechos que está gobernando, que ya no promete, que las realizaciones vendrán de a poco, pero que ya es posible que muchachas humildes no sean violadas a pocos metros de sus casas, o que los asaltos a mansalva no constituyan la rutina de ciertas calles, como ocurría en tiempos de la Unidad Popular.

Hay que apreciar en lo que vale el orden. Quienes no son o no han sido pobres ignoran la incertidumbre y el temor que genera el estado de indefensión y falta de autoridad.

Bien se sabe que el orden y la moralidad pública no forman todo el bien común posible, pero hay otros servicios y otras funciones estatales destinados a satisfacer las numerosas necesidades sociales de Chile. Lo importante es que los encargados del orden comprendan que la verdadera política del Gobierno interior, la del combate al bandidaje y la de la limpieza, tiene un valor auténticamente popular.

SUPREMO GOBIERNO

A cargo del Poder Ejecutivo y del Legislativo se encuentra la Junta Militar. De ella depende la conducción de las relaciones internacionales, a través del Ministerio de

Relaciones Exteriores; la política de seguridad nacional, a través de las Fuerzas Armadas y Carabineros; la política financiera y económica, a través del comité económico de Ministros; la política educacional, por el Ministerio de Educación; la política social, a través de los Ministerios del Trabajo, Salud, Vivienda y, en fin, la atención de todos los asuntos que reclama el Gobierno de la nación y la administración del Estado. Además, disuelto el Parlamento, corresponde a la Junta la dictación de Resoluciones sobre materias propias de Ley.

El Supremo Gobierno, que radica en la Junta, necesita de un instrumento de relación con la ciudadanía, y allí está el papel de la Secretaría General de Gobierno, repartición que no es un Ministerio como los otros, sino la voz directa de la Junta frente al país, el secretariado que comunica al Supremo Gobierno con el pueblo.

Hay consenso nacional en que la comunicación a que nos referimos no puede ser una propaganda, es decir, un mensaje unilateral, siempre dirigido desde arriba, sino un intercambio que permita al Gobierno auscultar sin intermediarios e interesados el efectivo sentir del pueblo.

Es conveniente y hasta necesario que los Ministros vayan al terreno y tomen contacto directo con el público, pero su impresión ocular no podrá ser nunca completa, porque es difícil la sinceridad directa para con el gobernante y porque jamás podrá éste conceder todas las entrevistas y recorrer todos los lugares hasta palpar lo que en verdad ocurre.

Es indispensable también que haya medios informativos libres que

reflejen honestamente el juicio de la opinión pública sobre la marcha del Gobierno y sobre las dificultades de la convivencia nacional. Sin embargo, tampoco los periodistas son capaces por sí solos de dar el cuadro completo. No toda la ciudadanía llega a los medios informativos ni éstos pueden reunir la información exhaustiva y atribuirle la justa importancia que cada contenido de ella merece.

Además de la propia información reservada del Gobierno, del contacto personal de los altos personeros con el público, de la auscultación del país que pueden hacer los medios informativos independientes y de los demás elementos de juicio con que cuenta el Estado, la Secretaría General —operando en el nivel de la Junta— puede captar el sentir de lo que podría llamarse el poder social.

Entendemos por poder social el que se exprese en los organismos juveniles, en las instituciones femeninas y en los gremios propiamente tales.

Este poder social ha actuado en Chile, y la ex Unidad Popular experimentó dolorosamente la fuerza moral de las mujeres, de los jóvenes y de los gremios. Esa fuerza moral es el apoyo más sincero de todo buen gobierno y el agente más fiel para captar el sentimiento público.

La relación entre la Junta y el poder social debería ser directa, es decir, efectuarse a través de la Secretaría General de Gobierno y sólo mediante ella. La administración de los asuntos laborales corresponde al Ministerio del Trabajo; los problemas habitacionales y de Urbanización al Ministerio de la Vivienda; la política educacional corres-

ponde al Ministerio del ramo, los temas de higiene ambiental, sanitarios y de atención médica, al Ministerio de Salud, etc. Pero estos problemas sociales son específicos y no miran a la organización del pueblo en sí mismo. Los asuntos juveniles no se agotan con la materia educacional. Los problemas de las madres no están sólo en el tema de la atención materno-infantil ni los gremios tienen sólo conflictos laborales. En todo un inmenso campo comunitario, en que el joven es joven, el trabajador es trabajador —cualquiera que sea el lugar que ocupe en la faena productiva— y en que la mujer es mujer, papel en que representa a la familia, a los niños y al futuro de la nación.

El poder social a que nos referimos existe en Chile. No ha surgido desde arriba. No tiene la Junta que imponerlos. En las provincias y en las regiones, los hombres de trabajo se han unido. En las comunas, las organizaciones femeninas actúan por encima de las divisiones partidistas. Los jóvenes también en mu-

chos casos han logrado superar las barreras partidarias.

Un grave error de muchos regímenes autoritarios ha sido desconocer el poder social. Otro no menos grave ha sido el de crear un aparato oficialista que simula al poder social y con el cual dichos regímenes pretendían reemplazar la expresión política del pueblo.

Fácil es no cometer esos errores en Chile. El poder político está en la Junta de Gobierno y sólo en ella. El poder social nació mucho antes del 11 de septiembre. Ha sido utilizado, maniobrado y engañado por los políticos, pero ahora debe quedarse como poder social. Y los servicios u oficinas de la Secretaría General de Gobierno deberían ser los órganos de contacto entre el poder político y el poder social. Si este último es auténtico y expresa sin disfraces el sentir de la juventud, de la mujer y de los hombres de trabajo, el Gobierno podrá contar en las difíciles horas futuras con la colaboración consciente —y tal vez en algunos casos crítica— de la ciudadanía independiente.

Movilización social

(10 de febrero de 1974)

El 31 de enero, el Presidente de la Junta de Gobierno, general Augusto Pinochet, dio comienzo en Arica a una gira por el norte del país (EM, 1 febrero, pág. 1). El 3 de febrero se dirigió a Iquique para luego continuar a Antofagasta (EM, 4 febrero pág. 17) y terminar con visitas a Calama, Chuquicamata y algunas salitreras (EM, 6 febrero pág. 1).

La Semana Política

MOVILIZACIÓN SOCIAL

La visita del Presidente de la Junta de Gobierno al norte del territorio es un índice de que el pueblo comprende y apoya la política del régimen militar.

Un Gobierno que reemplaza a un sistema de halago metódico a las masas; que está expuesto a los clásicos reparos del poder no generado en las urnas, y que pone en práctica una política antidemagógica, de sana rectificación económica, de disciplina, de grandes sacrificios y de esfuerzo colectivo, no puede esperar aplausos fáciles.

Cualquier observador imparcial bien informado sobre la historia chilena de los últimos años llega a la conclusión de que el costoso y fracasado experimento marxista no podía erradicarse sino por medio de las armas. En consecuencia, el derrocamiento del señor Allende y el desmantelamiento de la capacidad ofensiva comunista eran hechos inevitables, así como esencialmente ligados a la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el poder.

Ese observador bien informado llegaría también a la conclusión de que el estancamiento económico de Chile era insuperable, a menos que

se eliminaran los factores paralizantes de la actividad productiva y que los recursos del país se asignaran del modo más eficiente. Tal liberación supone la economía de mercado y, por tanto, el fin de los privilegios emanados de errores legales o de la tolerancia ante el abuso monopolista de grupos de empresarios o de trabajadores. La disyuntiva en que el país se encontraba era continuar de tumbos en tumbos, prolongando y agravando el estancamiento económico, o instaurar la dura política de realismo que está desplegando el Gobierno militar. Ahora bien, la demagogia y los intereses creados por la politiquería habían llegado a tal punto que una política económica sana era virtualmente imposible, a menos que se realizara por gobernantes que no estuvieran ligados al vaivén de los favores electorales. El régimen militar y la reconstrucción económica son, pues, términos inseparables.

El Presidente de la Junta de Gobierno, general don Augusto Pinochet, no fue evidentemente al norte en busca de aplausos. Ninguno de los integrantes de la Junta los necesita, aunque todos ellos los reciben en forma continua en sus apariciones públicas.

El general Pinochet iba a explicarle al pueblo los fundamentos de la acción militar, y lo que merece subrayarse es que los trabajadores comprenden la seriedad de los propósitos de las instituciones armadas, saben que ellas no son instrumentos de intereses subalternos y tienen esperanzas de que los pesados sacrificios de las alzas de precios y de los impuestos se traduzcan en una recuperación efectiva del país para la libertad, la dignidad y el bienestar de todos.

Es probable que el Presidente de la Junta Militar se haya persuadido de la conveniencia y aun de la necesidad de que personeros del Gobierno visiten las regiones del territorio, palpen las necesidades de las provincias y acudan a resolverlas sin dilaciones. En el orden de materias de su ramo, el Ministro de Economía, don Fernando Léniz, ha desarrollado una vasta labor de difusión y de explicación de ideas. Esa labor ha trascendido las fronteras y se han abierto las puertas de importantes centros financieros convencidos por las razones poderosas que afianzan la causa de Chile. La explicación y la presencia de los hombres de Gobierno resultan necesarias para el cumplimiento de los planes de la reconstrucción nacional.

Cabe preguntarse sin embargo acerca de si permanecerán los términos actuales de relación entre gobernantes y gobernados. En otras palabras, se trata de saber si el gobernante proseguirá actuando y explicando sus actuaciones mientras la ciudadanía asiste a un proceso del que no se sentiría participante, o si se abren posibilidades para la actuación responsable del elemento civil en la vida pública.

Parece innecesario insistir en estos momentos en que cualquiera forma de movilización social o de participación ciudadana en la vida pública habrá de adecuarse a la realidad política actual, adecuación que excluye el regreso al esquema de partidos tal cual se han dado estos en los últimos años. El asambleísmo, la concentración de los afanes en los mecanismos electorales, la preferencia por el legalismo aun en contra de la libertad o de la justicia, la confusión entre el espíritu público y el espíritu de bandería partidista, y varios otros rasgos de la decadencia del partidismo no podrán repetirse mientras el régimen actual actúe de acuerdo a los fundamentos que le dieron origen.

Parece evidente que la participación institucional de las Fuerzas Armadas en el mando supremo no desnaturaliza el papel esencial de dichas fuerzas. Siempre habrá que distinguir entre el poder político del Estado y la fuerza jerárquica organizada que está al servicio de éste. Si bien en los titulares del mando supremo se identifican el poder político y el poder militar, en los demás escalones la diferencia va estableciéndose. Dicha diferencia obliga a reconocer que el poder político (aun ejercido por militares) necesita un tipo de apoyo y de participación ciudadana que no encontrará en las Fuerzas Armadas. Estas últimas participan jerárquicamente y en último término obedecen al poder del Estado. Lo que se requiere es que la ciudadanía no ligada por el deber militar respalde y tome responsabilidades voluntarias en la lucha que la Junta de Gobierno da para la reconstrucción de Chile.

Reconociendo entonces la necesidad no sólo del pronunciamiento militar sino de la permanencia del régimen como supuesto esencial de la reconstrucción, debemos admitir que el propio régimen necesita apoyo y participación de la ciudadanía, sin que ello implique volver al esquema partidista superado y sin que tampoco satisfaga como fórmula estable el solo respaldo militar.

¿Cómo encontrar una movilización de la ciudadanía que signifique el concurso responsable y voluntario de los particulares a la tarea de sacrificio en que están empeñadas las Fuerzas Armadas? ¿Cómo hacer una movilización generosa y positiva de esfuerzo ciudadano, que vaya más allá del acatamiento respetuoso de las normas oficiales o del aplauso ocasional a los méritos de los hombres de Gobierno? ¿Cómo comprometer a largo plazo al ciudadano común en la batalla de la reconstrucción? He aquí el tema que suscita el alentador viaje del general Pinochet al norte del país.

DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL

Uno de los factores que tal vez podría facilitar la movilización ciudadana se encuentra en el desarrollo descentralizado del país.

Descentralizar significa establecer varios centros de influencia en el territorio y no tan sólo crear provincias o supraprovincias más grandes.

Descentralizar equivale en la práctica a "desantiagouizar" a Chile y no simplemente facilitar el manejo metropolitano central estableciendo unidades provinciales más extensas.

La "regionalización" debe servir para descentralizar el país, ofreciendo a las personas y a los valores del territorio chileno posibilidades de desenvolvimiento libre que jamás han tenido. Esas posibilidades —en el plano económico— se dan con la política liberadora de las iniciativas que impulsa el Gobierno, pero es fundamental que la estructura administrativa del país no conspira contra la flexibilidad de las decisiones económicas, a través del centralismo burocrático.

Por lo demás, el aspecto económico, con ser decisivo y ocupar en el presente estado de necesidad, el primer plano de las preocupaciones públicas y particulares, no es el único de la nación. Hay toda una riqueza variada de costumbres, tradiciones, peculiaridades idiomáticas, valores literarios y artísticos, que debiera expresarse y expandirse en una vida regional auténtica. Existen además expectativas educacionales concordantes con los atributos y recursos de las regiones. Pero más importante que lo anterior es que en el nivel regional se despiertan vocaciones de liderato, surgen auténticos gobernantes zonales, es posible que los gremios adquieran su servicial significación y que, en definitiva, la formación política sana venga del aprendizaje local y de la prueba de las aptitudes en la lucha práctica con los problemas de cada rincón de Chile.

Las capacidades políticas ideologizantes y extranjerizantes deberían reemplazarse por la aptitud de manejar los asuntos reales que preocupan a los chilenos a lo largo del territorio, aptitud que se adquiere en el trato y confrontación con las dificultades de alguna de las unida-

des geo-económico-culturales en que se divide el país. Y la nacionalización profunda del quehacer político sólo se adquiere —paradójicamente— por la vía de aceptar, respetar y desenvolver las regiones.

Por cierto que la actividad regional intensa no excluye sino que postula con más premiosa exigencia la formación universal. El regionalismo parroquiano y localista es todo lo contrario de la auténtica descentralización. Hay que abrir las regiones a la actividad moderna y exaltar sus valores para elevarlos realmente antes que para convertirlos en objeto de culto localista.

Si resulta necesario el apoyo ciudadano consciente y responsable a las tareas de la reconstrucción nacional, la más adecuada forma de participación civil en la vida pública parece ser el aporte de los vecinos, de las familias, de los organismos locales. De ahí entonces que la regionalización ofrezca virtualida-

des insospechadas, tanto para aumentar la eficiencia administrativa del Estado como para mejorar la distribución del elemento humano en el territorio y, sobre todo, para darle contenido concreto a la acción gremial, a las tareas vecinales y a las iniciativas sociales de centros de madres, clubes sociales, centros deportivos y juveniles.

La descentralización puede no ser el único de los medios de provocar la movilización social activa, pero lo cierto es que en el plano regional aparecen las tendencias más vivas, más realizadoras y de más leal apoyo a una política de resurgimiento nacional.

Los movimientos regionales no cubren todo el aspecto de la participación y movilización sociales. Son, sin embargo, un aporte concreto y disponible para una nueva institucionalidad porque suponen la experiencia y el conocimiento efectivos de Chile.

Un nacionalismo pragmático

(17 de marzo de 1974)

El 11 de marzo, al cumplir 6 meses de Gobierno, el Presidente de la Junta hace una exposición al país (EM, 12 de marzo, pág 1), para luego emprender viaje a Brasil con el fin de asistir a la toma del mando del Presidente Ernesto Geisel. En el viaje se reúne, además, con el Presidente de Uruguay (EM, 13 marzo, pág. 1). Asume el mando de la Junta el almirante José Toribio Merino. Se da a conocer la "Declaración de Principios" del Gobierno (EM, 13 marzo, pág. 21), la cual es analizada en el artículo.

La Semana Política

ENUNCIACIÓN DE PRINCIPIOS

Cumplidos seis meses de Gobierno de la Junta Militar tuvo lugar la exposición del Presidente de ella, general don Augusto Pinochet Ugarte, y la opinión pública conoció diversos documentos que definen la línea política del régimen.

El general Pinochet, en la sesión solemne celebrada el 11 de marzo en el edificio Diego Portales, manifestó satisfacción por la tarea realizada y confianza en el futuro. Reiteró en su exposición oficial el carácter autoritario, nacionalista y anticomunista del Gobierno.

Al dirigirse en visita oficial al Brasil, con motivo de la Transmisión del Mando en esa República, oportunidad de encuentro y diálogo con gobernantes sudamericanos afines, el Presidente de la Junta destacó la característica de los últimos años de la historia política del continente en que las Fuerzas Armadas habían asumido institucional y orgánicamente el poder en diversos países, en vista de las insuficiencias del sistema político domi-

nante en ellos. Tanto el viaje al Brasil como el discurso del lunes 11 y el mensaje antes de salir del país constituyen una progresiva definición de propósitos.

A esto se añade la "Declaración de Principios del Gobierno de Chile", documento oficial que ve la luz pública el miércoles 13 con la firma de los cuatros señores miembros de la Junta.

La Declaración es un documento que carece de precedentes en Chile.

Aparte de que llama la atención por la solidez, concisión y riqueza de sus ideas, su singularidad reside en conseguir afirmaciones concretas y pragmáticas después de haberse remontado a las alturas de los principios esenciales.

Hemos tenido documentos políticos de gran elevación que no descienden a planteamientos concretos o estudios acuciosos de materias específicas que dan por supuestos o que simplemente ignoran los altos principios.

La Declaración se apoya en una concepción explícita del hombre y

de la sociedad, conforme al pensamiento político del humanismo cristiano tradicional. Dicho pensamiento es, en realidad, el único que puede sortear con éxito la dictadura totalitaria. Las proposiciones de la Declaración son terminantemente personalistas: el hombre tiene derechos naturales anteriores y superiores al Estado; el Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés; el fin del Estado es el bien común general.

Estos principios sirven a la Junta de Gobierno para rechazar tanto el individualismo liberal como el colectivismo totalitario. El rechazo se extiende a las terceras posiciones en cuanto ellas impliquen "diálogos" o entendimientos con el comunismo.

El documento sostiene también que el bien común exige respetar el principio de subsidiariedad, norma según la cual el campo de acción de una sociedad está limitado por las competencias de los entes inferiores a ella. En virtud de este principio, corresponde al Estado asumir sólo aquellas actividades que las sociedades intermedias o los particulares no están en condiciones de desarrollar por sí mismos, ya sea por la naturaleza de dichas actividades, ya sea porque los llamados a desempeñarlas no lo hacen por negligencia, incapacidad u otra causa. El Estado actúa en subsidio y en razón del bien común.

Aplicando el mencionado principio, la Declaración afirma que "cuanto mayor sea el estatismo que afecte a una sociedad, menor será su efectiva libertad, por extendido que sea el ejercicio ciudadano de los derechos políticos".

"El principio de subsidiariedad presupone el derecho a la libre iniciativa en el campo económico", dice la Junta. "La centralización excluyeme de toda la actividad económica por el Estado no sólo conduce a una sociedad estatista, que termina por negar prácticamente la libertad personal, sino que además prescinde de la capacidad creadora de los particulares en el terreno empresarial, cuyo reemplazo por el burócrata perjudica el surgimiento de nuevas fuentes de producción y de trabajo".

Luego de reconocer la misión del Estado en el campo económico, como contralor y garante de la libre competencia contra cualquier abuso o monopolio y como planificador de la actividad general, la Declaración establece que "sería inútil admitir la iniciativa de los particulares en el campo económico si no se reconoce conjuntamente el derecho de propiedad privada tanto sobre bienes de consumo como sobre medios de producción".

Veamos, pues, cómo la Declaración de Principios del Gobierno de Chile avanza mucho en la concepción básica de la nueva institucionalidad: el hombre está antes que el Estado; el Estado se encuentra al servicio de la persona, el fin del Estado es el bien común general; el bien común impone el principio de subsidiariedad; éste a su vez implica el derecho a la libre iniciativa en el campo económico; tal iniciativa sería inútil si no se reconoce el derecho de propiedad privada.

Las ideas expresadas deben recalcar, analizarse y comentarse, pues las prácticas administrativas, económicas y financieras se encuentran todavía lejos de ceñirse

plenamente al contenido de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile.

UN NACIONALISMO PRAGMÁTICO

Fundado en los principios universales del humanismo clásico, el pensamiento político del Gobierno busca en la realidad chilena los elementos que completen y lleven a su plena aplicación aquellos principios.

La opinión pública ha recibido sucesivas expresiones del general don Augusto Pinochet, del almirante don José Toribio Merino, del general don Gustavo Leigh y del general don César Mendoza, que, en oportunidades distintas, han ido modelando este pensamiento nacionalista amplio y pragmático, que se funda, en primer lugar, en la búsqueda de la unidad espiritual de los chilenos, cuyo arquetipo es la unidad real y profunda de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El patriótico desprendimiento y el alto sentido de responsabilidad han creado visibles lazos solidarios entre los miembros de la Junta, los que se extienden hacia las instituciones bajo su mando. Allí está la base del régimen y la esperanza de la unidad creciente de Chile.

Durante la ausencia del general Pinochet, la Presidencia de la Junta de Gobierno ha pasado al almirante don José Toribio Merino, de acuerdo con el orden de precedencia establecido. La ceremonia correspondiente a la actitud de la Junta, de las instituciones armadas y del país entero demuestran que el criterio unitario ni siquiera se pone en duda.

Partiendo de la unidad nacional, la Declaración se refiere a un Pro-

yecto Nacional que integre los imperativos de la Seguridad y del Desarrollo, sin perjuicio de lo aseverado por la Junta en orden al rol subsidiario del Estado.

El Gobierno autoritario, impersonal y justo, conforme a la tradición portaliana, aparece como el centro de la nueva institucionalidad. Luego vienen las proposiciones de igualdad ante la ley y ante la vida; dignidad del trabajo; estímulo al mérito y al esfuerzo personal; sobriedad y austeridad de quienes mandan; despolitización de la función pública.

El orden jurídico deberá seguir dentro del respeto a los derechos humanos, a la libertad de conciencia y al derecho a discrepar. Sin duda, una de las tareas más interesantes será encontrar la confluencia entre la disciplina y la libertad, entre la unidad y la pluralidad, entre la más amplia tolerancia y la severidad con los que propugnan la destrucción del orden moral y espiritual del país.

Este sentido jurídico rectamente entendido hace que Chile no sea neutral frente al marxismo y que el "actual Gobierno no tema ni vacile en declararse antimarxista".

La Junta concibe un Gobierno autoritario dentro de la órbita de sus atribuciones, lo que no es incompatible con la descentralización del poder, tanto en lo funcional como en lo territorial.

El documento que glosamos distingue entre poder político o facultad de gobernar el Estado y el poder social o facultad de autogobierno de los cuerpos intermedios. Las Fuerzas Armadas y Carabineros han asumido la plenitud del poder político.

La Junta no fija plazo para el cumplimiento de su misión, "porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requiere una acción profunda y prolongada". Sin embargo, aunque no fija plazo, "entregará oportunamente el poder político a quienes el pueblo elija", pero ello no significa que las FF.AA y de Orden se desentiendan de su sucesión gubernativa, pues consideran parte de su misión "el inspirar un nuevo y gran movimiento cívico-militar". "Al integrar ese gran movimiento de unidad nacional que nace, superando antiguas divisiones y banderías partidistas, la Junta de Gobierno llama a todos los chilenos...". He aquí, pues, toda una definición política y un llamamiento a la organización cívica.

En lo que se refiere al poder social de los organismos intermedios, la Junta proclama su independencia y aspira a su despolitización; señala un nuevo sentido de responsabilidad y solidaridad al gremio, e im-

pulsa la descentralización y regionalización territoriales.

La declaración proclama la necesidad del desarrollo económico vinculado al desarrollo social y entiende que este proceso está sometido a "una escala de valores morales y espirituales propios de nuestra tradición chilena y cristiana".

El nacionalismo de la Declaración de Principios es no sólo pragmático y clásico a la vez sino que también posee dirección universal, lo que corresponde a la tradición chilena de comprender y absorber los aportes de la civilización occidental y europea conjugándolos a los imperativos de una situación histórica y geopolítica concreta. Un nacionalismo amplio, abierto, humanista y universalista es el que inspira a las Fuerzas Armadas y Carabineros. El recoge lo mejor del pasado, vigoriza y unifica el presente, para proyectar en el porvenir una nación segura de sí misma y ejecutora responsable de su propio destino.

Régimen de partidos

(7 de abril de 1974)

El artículo se basa en una entrevista de El Mercurio al asesor económico del Gobierno, Raúl Sáez (EM, 6 abril, pág. 25), quien critica el sistema de partidos existente en Chile hasta 1973, y, desde allí, se refiere luego a la regionalización como posibilidad de crear una efectiva forma de participación democrática.

La Semana Política

RÉGIMEN DE PARTIDOS

En una entrevista concedida a "El Mercurio" al pasar por Alemania Federal, el asesor económico de la Junta de Gobierno, Raúl Sáez, abrió paso a una distinción entre "régimen de partidos" (el que regía antes del 11 de septiembre) y los regímenes jurídicos presidencial o parlamentario.

Advierte Raúl Sáez que los gobiernos elegidos popularmente en nuestro país se apartaron del pueblo mismo, quedando supeditados a directivas partidistas. En efecto, era frecuente que los candidatos se presentaran con sus propias ideas y su sello personal, para sentir después la fuerza de la presión de su propio partido que les imponía nombramientos o líneas de acción. La lucha, a veces desesperada, por imponer las prerrogativas presidenciales en contra de la prepotencia partidista, y el casi inevitable doblegamiento en algunos casos ante dichas presiones, formaron la historia de los presidentes chilenos a partir de don Pedro Aguirre Cerda.

Según Raúl Sáez, ese "régimen de partidos" no era ni presidencial ni parlamentario.

En el hecho no era otra cosa que la progresiva dominación de las directivas partidistas sobre los destinos del país. Esos grupos a su vez estaban controlados por asambleas, pequeñas en número, pero influyentes, dueñas del éxito parlamentario y de cierta influencia en el presupuesto, capaces en definitiva de sustituir el poder legítimo de los representantes del pueblo por un poder anónimo, invisible e irresponsable que se traducía en un acuerdo de madrugada o en una gestión de pasillo.

Las pugnas entre el Ejecutivo y el Congreso, iniciadas vigorosamente en la Administración Ibáñez, tuvieron en parte su origen en el gradual avance del "régimen de partidos" que encontraba en el Parlamento muchos medios de satisfacer ambiciones.

Los comunistas llevaron al extremo el "régimen de partidos", tratando de destruir las facultades presidenciales y haciendo del Jefe del Estado un ejecutor del programa de la ex Unidad Popular, un mero intérprete de los acuerdos de las comisiones políticas de la combinación marxista. El señor Allende asumió esta calidad de Mandatario de los partidos que lo apoyaban y

sostuvo por eso que no era el Presidente de todos los chilenos. Efectivamente, lo era sólo de la Unidad Popular, y más como gerente que como verdadero Presidente. Con todo, en algunos casos debió apartarse de las pretensiones de sus partidarios y tuvo que afrontar entonces las insolencias y los desbordamientos de quienes hoy se pasean por el mundo fingiéndose camaradas leales del gobernante desaparecido.

El régimen presidencial, que tan positiva influencia tuvo en la formación de la República, fue desvirtuado por la hipertrofia partidista. El gran poder tradicional de los Presidentes de Chile, en el orden político, fue creciendo desmesurada y anárquicamente en el orden administrativo, hasta dejar al Primer Mandatario como cabeza de una enorme máquina de control económico cuyos movimientos ni él mismo podía dirigir. En esa máquina se alojaban los intereses partidistas aliados o enemistados entre sí, pero casi siempre opuestos al verdadero desarrollo nacional.

Los Presidentes soportaron en algunas oportunidades con firmeza o desempeñaron con habilidad el papel contradictorio que las condiciones políticas les imponían; su voluntad era prácticamente omnímoda en teoría, pero los frenos y desviaciones colocados por los comandos partidistas frustraban muchas de sus órdenes o hacían surgir iniciativas que rebasaban el deseo presidencial.

La lucha de los titulares del Poder Ejecutivo tuvo que darse simultáneamente con los opositores y partidarios, lo que ocasionó un gran desgaste de tiempo y de energía y

una notoria merma en la eficiencia del Gobierno.

El régimen de partidos, en la acepción de gobiernos de las directivas partidistas, vino en el hecho a suplantar a los elegidos por el pueblo y a violentar por eso la voluntad de electorado. La ciudadanía elegía a un político, confiada en las condiciones de éste, pero el "régimen de partidos" daba oportunidad de gran influencia a otros políticos, los cuales no siempre habían sido o eran partidarios del gobernante, pues en no pocos casos éste debió aceptar la colaboración de quienes ostentaban concepciones adversas a la Administración que servían.

DESCENTRALIZACIÓN Y DEMOCRACIA

El "régimen de partidos" iba conduciendo a pasos agigantados a la dictadura marxista. El país vio con asombro cómo se llevaba a puestos de responsabilidad a individuos que no tenían otro antecedente que su oficio de agitadores. Ministerios, instituciones y empresas cayeron en manos de verdaderas bandas de delincuentes que utilizaban el poder sin contrapeso de la maquinaria gubernativa para armar con ella una guerra de exterminio a quien se opusiera al castrocomunismo.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros frustraron por completo la intentona e iniciaron el camino hacia una nueva institucionalidad.

Uno de los pasos importantes del nuevo orden jurídico lo constituye el proyecto de regionalización del país, asunto que se estudia con el aporte ilustrado de los mejores juristas de la nación, entre ellos, del

Presidente de la Corte Suprema, don Enrique Urrutia Manzano.

Hay en la regionalización un valioso germen de democracia real, sobre el que corresponde tomar conciencia. En efecto, el establecimiento de centros regionales de decisión administrativa y económica evita los intermediarios entre las provincias y Santiago para una gran variedad de materias. La decisión inmediata de las autoridades locales no sólo es más rápida sino que está sujeta a vigilancia más directa de la ciudadanía. En una zona jurisdiccional de extensión apropiada, la acción de la autoridad se ve y se juzga con mayor exactitud, sin optimismos ni pesimismo. En las relaciones entre la autoridad regional y la población de esa zona es posible una verdadera democracia, en el sentido de que la ausencia de intermediarios y la proximidad facilitan la colaboración y el diálogo entre gobernantes y gobernados; están más cerca unos y otros; es posible rectificar errores y adoptar iniciativas sin demora; puede escucharse al público con frecuencia y sin obstáculos.

En las regiones puede desarrollarse lo que la Declaración de Principios del Gobierno denomina Poder Social. Dicho poder existe; lo constituyen los gremios y demás agrupaciones formadas en la actividad y defensa de la comunidad. Este poder tiene sentido en el plano regional, pues allí las actividades laborales, vecinales y sociales en general, pueden confluir sin connotación partidista, asociándose o discrepando entre sí, movidas por los intereses de la región.

Ahora bien, una autoridad administrativa flexible y descentralizada

es más eficaz desde el punto de vista del Gobierno Supremo, pues este último sólo se detiene en las decisiones de importancia para el bien común nacional y sus órdenes no se extravían en la selva de los organismos burocráticos.

Si la regionalización permite instaurar naturalmente la democracia sin necesaria hipertrofia partidista, sobre la base de que las organizaciones comunitarias participen o sean escuchadas por las autoridades en los planes de interés local, también debe esperarse que un país descentralizado haga fracasar anticipadamente al profesionalismo político. No tiene sentido volver al régimen que expiró el 11 de septiembre de 1973, si la labor legislativa se ocupa sólo de las leyes de alcance general; si la labor administrativa central resuelve los asuntos más importantes, y si la gran masa de los intereses particulares se satisface en el juego de la libertad o está comprendida en las jurisdicciones regionales. En el caso supuesto, no habría necesidad de abundantes intermediarios oficiosos entre Santiago y provincias; la autoridad del Estado sería eficaz en su esfera propia, y las libertades públicas se desarrollarían no en el disturbio politiquero sino en la participación eficiente en los gobiernos regionales, provinciales y municipales.

Un régimen fuertemente autoritario en la cúspide, pero libre y descentralizado en todos los demás niveles, sería capaz de impedir que el país volviera al "régimen de partidos" o que una minoría audaz se apoderara del timón para llevar a Chile a la dictadura del proletariado. La armonía entre autori-

dad y libertad; entre mando único y delegaciones escalonadas del poder; entre disciplina y organización social, es una meta política sin duda difícil. El plan de regio-

nalización en estudio puede encaminarse en ese sentido, superando las viejas pugnas y los obstáculos para la marcha ágil de la República.

Asume el Poder Ejecutivo presidente de la Junta

(30 de junio de 1974)

En ceremonia efectuada el 27 de junio asume como Jefe de Estado el Presidente de la Junta de Gobierno, general Augusto Pinochet (EM, 28 junio, pág.1). Previamente se había promulgado el Estatuto de la Junta, donde se especifican las distintas funciones de sus integrantes (EM, 26 junio, pág.1).

El general Pinochet concede entrevista a El Mercurio en la que explica el significado de este Estatuto (EM, 21 junio, pág.1).

La Semana Política

ESTATUTO CONSTITUCIONAL

Con un nuevo gesto de patriotismo, la Junta de Gobierno ha dado un paso que el país esperaba. Cuando las Fuerzas Armadas asumieron el Gobierno y la administración del país, el poder político se concentró en la Junta Militar, organismo que ha adoptado simultáneamente decisiones legislativas y medidas administrativas. Era, sin embargo, previsible que la administración del Estado se radicara en una sola persona y naturalmente esa misión le correspondía al Presidente de la Junta.

El Estatuto Jurídico de la Junta de Gobierno, documento que tiene por su naturaleza carácter constitucional, satisface la necesidad de que la Junta de Gobierno defina la amplitud de sus poderes y que al mismo tiempo designe a un Jefe del Estado. Estos dos objetivos son los principales del Estatuto.

La trascendencia de este acto constitucional es innegable. El ha demostrado desprendimiento, el tino político y la visión de los señores miembros de la Junta de Gobierno,

pues la nueva construcción jurídica se ha logrado a través de un debate sereno y razonado. En otros tiempos o lugares la magnitud de las resoluciones adoptadas pudo significar inquietudes o distanciamientos de mucha gravedad. No ha sido el caso del régimen chileno, en que el cambio se ha alcanzado dentro de una completa armonía y solidaridad de las cuatro fuerzas armadas.

El Estatuto determina que la Junta de Gobierno ejerce, mediante decretos leyes, el Poder Constituyente y el Poder Legislativo.

Innecesario parece recalcar la trascendencia de esta declaración. A través de decretos leyes acordados por la unanimidad de sus miembros y firmados por todos ellos, la Junta de Gobierno tiene la facultad de dictar leyes y en consecuencia de modificar o derogar cualquier precepto legal en vigor o crear otros nuevos. Más importante todavía es la facultad de la Junta para ejercer el Poder Constituyente, obrando en la forma ya dicha. Puede la Junta por tanto enmendar la Constitución, derogando o modificando alguno de

sus preceptos o agregando nuevos, así como puede dictar una nueva Carta Fundamental.

Los cuatro miembros de la Junta de Gobierno, actuando unidos, tienen, pues, en sus manos todo el poder necesario para edificar una nueva institucionalidad.

Es muy conveniente que la Junta como tal se haya liberado de algunas tareas gubernativas y administrativas, a fin de consagrarse al enorme trabajo de establecer las líneas simples y armónicas de un Estado y de un orden jurídico verdaderamente justos.

Desde el momento en que la Junta ejercita el Poder Constituyente, sus facultades no se limitan por el decreto ley que consigna el texto del reciente Estatuto. Dichas normas pueden modificarse, si para ello concurre la unanimidad de la Junta. Además, el mencionado órgano constituyente puede seguir dictando decretos leyes complementarios o modificatorios de la legislación vigente.

Aunque no lo dice el estatuto en forma expresa, sus normas modifican sustancialmente la Carta Política de 1925. No sólo está disuelto el Congreso elegido en virtud de dicha Constitución y han cesado en sus cargos los senadores y diputados que formaban esa Corporación, sino que además se ha creado —o mejor dicho, confirmado— un nuevo órgano legislativo, que reemplaza por ahora en sus funciones a las dos Cámaras y al Congreso Pleno. El ejercicio por la Junta de los Poderes Constituyente y Legislativo es un hecho que se produjo el 11 de septiembre de 1973, pero la declaración formal y explícita de ello se ha realizado el miércoles 26 de junio

del año en curso. En virtud de tal declaración, el régimen político chileno cambia no sólo en el hecho, sino en el derecho, y cambia en su sustancia misma, es decir, en la generación y en el ejercicio del poder.

El Estatuto no señala plazo para el desempeño de los titulares de los Poderes Constituyentes, Ejecutivo y Legislativo.

El mecanismo de subrogaciones y reemplazos indica, por su parte, que el régimen establecido se concibe para prolongarse por el tiempo que las Fuerzas Armadas estimen necesario a fin de cumplir los fines del movimiento del 11 de septiembre.

En este texto y en este espíritu queda señalado el Presidente de la Junta de Gobierno como titular del Poder Ejecutivo y como Jefe Supremo de la Nación.

ASUME EL PODER EJECUTIVO PRESIDENTE DE LA JUNTA

En solemne ceremonia celebrada el jueves último, el Presidente de la Junta de Gobierno, general don Augusto Pinochet Ugarte, recibió, en forma excepcional, del Presidente de la Corte Suprema, que simboliza la marcha jurídica de la Nación, las insignias del mando supremo.

Se cumplió así el otro objetivo principal del Estatuto Jurídico de la Junta de Gobierno, cual era entregar a un miembro de dicho organismo, concretamente a su Presidente, las atribuciones que la Constitución y las leyes de la República reservan al Presidente de la República, empezando desde luego por aquella disposición según la cual a dicho alto funcionario le está confiada la

administración y gobierno del Estado, en términos que su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público interno y la seguridad exterior de la República, dentro de las normas constitucionales y legales.

Era necesario que el país siguiera teniendo un solo Jefe Supremo de la Nación no tan sólo porque la autoridad unipersonal se efectúa con mayor expedición que ejercitada por los cuerpos colegiados, sino porque la tradición jurídica del país y los hábitos políticos de la Nación se identifican históricamente con la figura de un Mandatario que, según la creación portaliana, recibe sobre sus hombros la mayor autoridad al tiempo que el peso de la máxima responsabilidad.

Al Jefe del Estado le corresponde el gobierno, es decir la orientación concreta y diaria de la marcha de la Nación. Es además el administrador supremo. De él dependen los Ministros, los Jefes de Servicios y los Agentes Diplomáticos. A él corresponde el mando de las fuerzas; en fin, es la cabeza del Estado.

En otros países, los cargos del Jefe del Estado y de Jefe de Gobierno no se confunden. Así ocurre en los regímenes parlamentarios y en algunas organizaciones políticas especiales, como la francesa y la española. En la concepción presidencial chilena, el titular del Poder Ejecutivo es uno solo, y a él le corresponden tanto la representación del Estado como el gobierno y la administración del mismo.

Desde el mismo día 11 de septiembre de 1973 el general Pinochet asumió el papel de cabeza del régimen y de Presidente de la Junta. Su autoridad ha sido en el he-

cho reconocida y acatada desde entonces.

Con la reciente formulación constitucional, esa autoridad se transforma en una responsabilidad exclusiva para todo lo que se refiere a la administración del Estado. Ciertamente que los Ministros serán nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo de la Junta, disposición que mantiene una cierta coparticipación de órdenes y responsabilidades, pero no es menos cierto que el Estatuto dispone que los Ministros permanecerán en sus cargos mientras cuenten con la confianza del Presidente de la Junta. Este último principio significa en el hecho que la responsabilidad política por la conducción del Estado reposa en el Presidente, con lo que el Gobierno militar se entronca de este modo con la tradición jurídica chilena.

La presencia de un Jefe de Estado, con autoridad suficiente para conducir con eficacia la maquinaria del Gobierno y para desarrollar una política interior y exterior de justicia y de progreso, es lo que permite abrigar esperanzas en el futuro nacional. El país no olvida que los grandes períodos de realizaciones chilenas han coincidido con Ejecutivos fuertes, imparciales y enteramente dedicados al servicio del país.

Atraviesa Chile un período muy difícil, en que la población está pagando con sacrificios enormes las consecuencias de un prolongado derroche de recursos y de distorsión de la realidad económica. Pero los chilenos no pueden contentarse con aceptar el sacrificio y con esperar pasivamente tiempos mejores. Es preciso actuar sin demora y tomar el conjunto de medidas indispensa-

bles para activar la economía, para emplear oportunamente los fondos disponibles para estimular las inversiones y para darle a la ciudadanía un marco de expectativas afirmado en decisiones concretas y actuales.

En el orden político internacional y nacional se espera que el país lleve a la práctica la voluntad de reconquistar y de sobrepasar las metas a que Chile llegó en el pasado. La Junta de Gobierno ha cumplido una extraordinaria labor de reconstrucción moral y de puesta en marcha de la reconstrucción material. Queda todavía un vasto campo de perfeccionamiento legislativo e institucional en que le cabe la intervención conjunta a la Junta de Gobierno, y falta aún mucha acción específica para que los distintos servicios públicos se inspiren en un espíritu nuevo, para que se quiebren las rutinas y para que se abra paso al trabajo creador en todos los planos de la vida nacional.

Las posibilidades de éxito de esta labor gigantesca dependen de que las autoridades dispongan de todo el tiempo necesario para desarrollarla. La continuidad y estabilidad son elementos probados como indispensables para levantar a los países de la postración y la pobreza. Lo conveniente es que el tiempo se aproveche día por día y hora por hora.

La evidencia de que el régimen se constituye por un período largo

aparece del mecanismo de subrogaciones y reemplazo dentro de la Junta. En síntesis, la Presidencia de la Junta y, en consecuencia, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponden por subrogación a los demás miembros de la Junta en el orden de precedencia establecido. Si uno de dichos miembros se imposibilita será reemplazado por el Oficial General de Armas en servicio activo más antiguo de la institución respectiva. Pero el subrogante pasará al cuarto lugar de precedencia, cualquiera que sea la institución a que pertenezca, en caso de muerte o imposibilidad absoluta de un miembro de la Junta, los demás integrantes designarán al Comandante en Jefe o General Director que deba reemplazar al titular desaparecido o impedido. Esta última norma es muy lógica por cuanto el cargo más alto de la jerarquía de cada institución castrense no debe ser materia de ascenso automático sino de nombramiento de la suprema autoridad. Esto es todavía más lógico cuando se trata de un jefe que pasa a integrar el Poder Legislativo y Constitucional con expectativas de asumir el Poder Ejecutivo.

El acto en que el Presidente Pinochet asumió el poder como Jefe Supremo de la Nación es, en resumen, el hecho más importante ocurrido en el país desde la propia constitución de la Junta Militar de Gobierno el 11 de septiembre de 1973.

Desarrollo social (4 de agosto de 1974)

El artículo comienza comentando el fallo del Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea, que pide la pena de muerte para cuatro personas (EM, 4 agosto, pág. 17). Luego se refiere en detalle a la reunión del general Gustavo Leigh, integrante de la Junta de Gobierno, con 2.500 dirigentes de organizaciones comunitarias en el edificio Diego Portales, en la cual les informó sobre la política de desarrollo social del gobierno (EM, 1 agosto, págs. 1 y 19).

La Semana Política

DESARROLLO SOCIAL

Como era previsible, en el exterior se desató una tempestad de protestas, con motivo del fallo del Consejo de Guerra de la FACH que propone cuatro penas de muerte y otras graves condenas para los militares y civiles procesados ante dicho Consejo.

El fallo será examinado cuidadosamente por juristas y expertos de todo el mundo con el ánimo de establecer si los hechos punibles están probados con arreglo a la ley si la calificación de los delitos es la procedente y, en fin, si las penas propuestas para los procesados se ajustan a derecho, tomadas en consideración todas las circunstancias.

Tal vez el Consejo de guerra no haya encontrado otro camino que el extraordinariamente severo que propuso. Quedará entregado a la prudencia del Juez de Aviación presentar una resolución final que conjugue el vigor de la justicia militar con los atemperamientos que aconsejan la equidad y los principios generales de derecho.

Lo ocurrido en este proceso sirve para apreciar hasta qué punto los

actos de las autoridades chilenas están sometidos a observación por los numerosos núcleos de influencia y organizaciones políticas que siguen directa o indirectamente la línea estratégica comunista.

Los chilenos desearían que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas por las autoridades dentro del territorio nacional y en la órbita de su jurisdicción fueran respetadas íntegramente desde que se dictan con entera prescindencia de todo poder extraño. Sin embargo, en el hecho esta clase de decisiones se toman a la luz de la opinión pública mundial y sería ingenuo hacer caso omiso de su repercusión externa.

Por fortuna, la sentencia del Consejo de Guerra no es definitiva y el "cúmplase" puede introducir modificaciones sustanciales a lo resuelto. Se espera que un nuevo análisis jurídico de los hechos salve los posibles errores de interpretación que se hacen notar en el fallo propuesto al Juez de Aviación.

Mientras la mencionada sentencia sirve de pretexto para nuevas acciones contra Chile, provocadas desde el exterior, el país sigue

avanzando hacia la solución de sus problemas económicos y sociales.

El miércoles 31 el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno, general don Gustavo Leigh, celebró una importante reunión con dirigentes de organizaciones comunitarias, a los cuales expuso la política de desarrollo social del Gobierno.

El general Leigh criticó las soluciones dadas en el pasado a los problemas del desarrollo social e hizo presente que se importaban doctrinas extranjeras para el quehacer político nacional.

De las intervenciones escuchadas en la reunión de dirigentes comunitarios con el general Leigh y de otros antecedentes se desprende que el Gobierno va a atacar a fondo y en toda su extensión los problemas del desarrollo social, pues no es el propósito que la reconstrucción se mantenga en el solo campo económico, sino que abarcará necesariamente las órbitas social, cultural y todo el conjunto de las preocupaciones o necesidades de los chilenos.

El desarrollo social, mirado desde el punto de vista de sus metas objetivas, tiende a mejorar la calidad de la vida y a elevar las posibilidades físicas y morales de la población.

Concretamente, hay en el país un gran déficit de nutrición, existen enfermedades crónicas o insuficiencias orgánicas o síquicas que necesitan ser atendidas en forma sistemática, faltan hábitos de higiene y moralidad en los individuos y en las familias y, por último, es indispensable desenvolver las técnicas de capacitación que produzcan ap-

titudes económicas en la gran masa de la población.

El otro gran tema del desarrollo social es todo lo tocante al "habitat" de la población, es decir, la vivienda digna, el equipamiento comunitario mínimo, la urbanización adecuada y todo el conjunto de bienes físicos, sean de propiedad individual, cooperativa o comunal, que las personas y las familias necesitan para llevar una existencia sana y armónica.

Si de las metas objetivas del desarrollo social pasamos al elemento subjetivo, habrá que decir que la sola acción del Gobierno es incapaz de conseguir dichas metas y que resulta indispensable la labor de la comunidad organizada.

LA COMUNIDAD

"Terminó la hora en que estábamos sin hacer nada, esperándolo todo del Gobierno", dijo el general Leigh. "Esperamos que todos aporten su talento creador, esfuerzo y voluntad".

Por su parte, el Ministro del Interior, general César Benavides, manifestó que "el desarrollo no será posible sin la participación activa de los dirigentes de las organizaciones comunitarias".

Es claro que el desarrollo social exige la generosa labor de las autoridades y de los funcionarios públicos en la órbita de sus respectivas competencias. La acción de los Intendentes Regionales, de los Gobernadores Provinciales y sobre todo de los Alcaldes resultará decisiva para poner en movimiento las fuerzas y organizaciones comunitarias, pero habrá que contar además con la labor que despliegue el Go-

bierno en todos los niveles, así como la que desarrollen los servicios públicos y empresas del Estado en igual sentido.

El general Leigh pidió hace algún tiempo la colaboración del sector económico privado para el desarrollo social. La Confederación de la Producción y del Comercio está avanzando en el estudio de planes que implican una respuesta decidida a la proposición del Gobierno. Las empresas y los empresarios, a través de sus gremios o individualmente, colaborarán al desarrollo social tanto en el interior de las propias empresas como en el contorno de las mismas.

La búsqueda del progreso físico y moral de la población y el alza de la calidad de la vida ambiental, familiar y personal serán entonces preocupación de las autoridades y personeros del sector público, en sus respectivas competencias, y también de los organismos del sector privado. Es comprensible que la aplicación de la capacidad empresarial al diagnóstico y tratamiento de los problemas sociales se traduzca en soluciones prácticas para numerosos problemas candentes.

Pero el gran factor o agente del desarrollo social mismo será la comunidad misma en sus diversas magnitudes, a través de instrumentos tales como las juntas de vecinos, centros de madres, clubes juveniles y otros.

Hace un año la ciudadanía se movilizaba en contra del gobierno despótico de la Unidad Popular a través de los partidos, pero sobre todo a través de las organizaciones comunitarias. Chile probó estar constituido por una democracia orgánica o de base, que surgía en los

gremios, en los sindicatos, en los barrios, en las comunidades pequeñas o grandes. Fueron los vecinos, los pobladores, los trabajadores libres, las dueñas de casa, los estudiantes, el factor de movilización de masas con que el marxismo no contó y que pudo trascender los marcos partidistas para transformarse en un gran estado de ánimo, en una corriente de comunicación ciudadana estrecha y en un común anhelo de liberar al país del comunismo.

Esa capacidad de movilización es aprovechable para construir una sociedad libre y justa, imbuida en una doctrina nacional tan simple como realista. El desarrollo social requiere líderes en las organizaciones comunitarias, personas de visión y de carácter que comprendan la importancia de las tareas en beneficio de la comunidad, entregando a ellas su entusiasmo y su esfuerzo organizado. El desarrollo social comunitario es un crecimiento de abajo hacia arriba. Empieza pues en los grupos de dimensiones modestas y se propone metas reducidas, pero el movimiento se extiende en ondas cada vez más amplias y permite establecer organismos y agrupaciones que van desde lo local hasta lo nacional.

La comunidad tipo parece limitarse en general al espacio de la comuna o a funciones dentro de ella. De allí el papel vital que habrán de desempeñar los alcaldes en la nueva estructura administrativa. Del dinamismo y capacidad de los jefes comunales dependerá en gran parte el éxito de las iniciativas comunitarias y el desarrollo social efectivo.

Debe destacarse en la política social expuesta por el general Leigh

el enfoque directo hacia el mejoramiento de la comunidad en el campo de la cultura, de la educación, de la justicia, de la defensa nacional, de la salud, de la vivienda, de las obras públicas, del trabajo, del transporte, de la empresa y del deporte. Se trata de un enfoque en que no hay un ápice de demagogia y sí en cambio el propósito firme de realizar una transformación profunda en los hábitos y condiciones de vida de nuestro pueblo, una transformación que exigirá inventiva, capacidades y recursos económicos de importancia. Pero todo ello vendrá porque el país mismo, a través de sus comunidades, encontrará la manera de allegar medios a la solución de sus problemas sociales.

El énfasis en la política social no se pone en desmedro del desarrollo económico, pero es importante que el país aprecie que las miras del

Gobierno están lejos de resignarse a llegar a determinados logros económicos, a determinados niveles de ingreso o de consumo. Aunque tales logros son indispensables para el sólido desarrollo social, el país tendrá que superar las limitaciones de la sociedad de consumo para lo cual tiende a centrar en la persona y en sus altos valores el eje de su progreso. Una moral no materialista e inspirada en un bien entendido humanismo está más en consonancia con el espíritu popular chileno que la moral basada en el lucro. Si se emplea el lucro como acicate de la actividad económica pero se encuentran estímulos vitales, morales, humanos, patrióticos para movilizar el resto de la existencia, nuestro país habrá sembrado los gérmenes de la verdadera libertad, la que se funda precisamente en la dignidad de la persona.

Participación indispensable

(26 de enero de 1975)

En los primeros días del mes se da a conocer el proyecto de "Estatuto Social de la Empresa", el que establece formas de participación de los trabajadores en las empresas en que laboran. (Este, promulgado luego en mayo de 1975 [Decreto Ley 1.006], fue dejado en suspenso para entrar en vigencia con posterioridad, lo que en definitiva nunca ocurrió.) El comentario se refiere, además, a la necesaria transparencia en el proceso de elaboración de decretos leyes.

La Semana Política

PARTICIPACIÓN INDISPENSABLE

El Estatuto Social de la Empresa vuelve a colocar en el primer plano el concepto de participación social.

Dicho concepto tiene un campo más vasto que el de la empresa y de las relaciones laborales, ya que puede extenderse a toda la esfera de la comunidad organizada. A este sentido amplio vamos a referirnos, pues la participación del trabajo en la empresa parece un paso hacia otros tipos de colaboración entre sectores sociales.

Desde luego, la participación en una empresa o en una sociedad cualquiera no implica de suyo ni el derecho a elegir a los que conducen el organismo ni la intervención en la administración con carácter decisorio. La participación es sobre todo información razonada de las medidas de gobierno que se adoptan en la empresa u organismo de que se trate. La información, la consulta y el diálogo no significan que la autoridad disminuye sino que es obedecida con responsabilidad y conciencia por los subordinados. Estos últimos necesitan ser tomados en cuenta y conocer los motivos de

las decisiones que les afectan, salvo que la reserva acerca de aquéllos sea estrictamente indispensable.

En el nivel político la participación aparece como indispensable para Chile, en el sentido de que la ciudadanía esté debidamente informada de las resoluciones que le afectan y de sus fundamentos. La participación implica también cierta organización civil, así como la posibilidad de consultas locales o regionales o en los niveles que sean compatibles con el estado de emergencia.

La participación social es una necesidad en Chile, pues este país está habituado a responder en forma consciente a las exigencias de la vida cívica. Una larga tradición democrática ha impuesto su sello en términos de que no pueda prescindirse de la ciudadanía.

Por otra parte, el estado de emergencia durante un período prolongado se justifica porque venimos saliendo del caos que generó la hipertrofia y el abuso de las prácticas democráticas. ¿Cómo encontrar entonces los cauces de la participación, sin que el país retroceda a los prejuicios y métodos que lo lle-

varón al marxismo y casi a la desintegración nacional?

La solución del problema será, sin duda, larga y difícil, pero no habría que olvidar que Chile ha sido en varios aspectos una avanzada política en América latina. Es posible confiar, pues, en que se encuentre el camino para que nuestra democracia evolucione hacia esquemas igualitarios que superen los divisionismos clasistas y los apetitos demagógicos, hacia fórmulas tan alejadas del paternalismo como de los impulsos anárquicos, cuyo devastador efecto apreció el país en los últimos años.

Entretanto, y sin perjuicio del receso de la actividad partidista oficial, la polémica política ha revivido. Aunque no se presentan verdaderas alternativas al régimen militar y a su programa, las posiciones del Gobierno están siendo controvertidas y las objeciones a los planes económicos toman fácilmente la apariencia de críticas políticas.

Por escrito, por radio, por televisión y en privado, la crítica se abre camino. Ella puede tomar el filo negativo y frívolo que simplemente erosiona famas, políticas e iniciativas, sin llevar aparejado un propósito ambicioso. Otros, sintiéndose víctimas oprimidas por el receso y sin estar en condiciones de ofrecer alternativas razonables, embisten mentalmente contra el régimen y sirven de aliados fáciles a quien se proponga alguna aventura subversiva. Finalmente se dan los opositores desde dentro, los que manifiestan marcadamente su adhesión al régimen, pero que sostienen puntos de discordancia profunda con la política en marcha.

¿Qué hacer con esta crítica, cuya sola presencia contradice la versión extranjera de que aquí existe una dictadura mutiladora que enmudece toda réplica? Un método sería convertir en verdadera esa imagen extranjera de nuestro país y reprimir drásticamente las críticas. La otra actitud es precisamente buscar los mecanismos de participación a fin de que las objeciones se canalicen y las críticas se efectúen dentro del régimen en vez de llevarse a cabo fuera de él, fuera del país o subrepticia o clandestinamente.

Lo que parece incompatible con la situación imperante es la indiferencia frente a este problema —el de las objeciones y las críticas políticas—, problema que se hará más agudo con el progreso de la participación laboral en las empresas. Hemos visto objeciones económicas transformadas de hecho en oposiciones políticas. Lo probable es que surjan oposiciones y descontentos laborales transformados también, y con más capacidad de presión, en fuerzas opositoras.

La participación es inevitable, indispensable y saludable para un régimen político que conoce sus metas y que registra anticipadamente las ventajas y riesgos del trato igualitario con la ciudadanía. En un comentario anterior nos referíamos a la necesidad de que los militares apolíticos hicieran política en el poder. Ahora afirmamos que la implantación de la participación exige un manejo cuidadoso e imaginativo a fin de que se desempeñe como canal entre el Gobierno y la ciudadanía, como medio de entendimiento y de cooperación, como apoyo en último término a la unidad nacional.

NORMAS OBJETIVAS Y ESTABLES

El paulatino incremento de la colaboración de la ciudadanía en las responsabilidades públicas, aunque más no sea por el hecho de estar mejor informada, exigirá poco a poco que la labor de los Poderes Públicos se normalice en el sentido de que las esferas de competencia de las distintas autoridades y jerarquías queden definidas de manera estable y objetiva.

Los difíciles momentos vividos explican de sobra la adopción de resoluciones legales y aun constitucionales con gran rapidez. La misma situación explica la gran cantidad y variedad de disposiciones que se han dictado. Por último, las urgencias de toda índole fuerzan a veces a las autoridades de alta jerarquía a tomar resoluciones que incumben por su naturaleza a autoridades inferiores, lo que hace perder tiempo a las primeras e inhibe a estas últimas.

Las normas constitucionales vigentes establecen con precisión que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Presidente de la República, quien lo es también de la Junta. Añaden esas disposiciones que el Poder Legislativo y Constituyente corresponde a la Junta. Esos principios deben haber sido objeto de alguna reglamentación interna en virtud de la cual se eliminen en lo posible las confusiones entre las reglas constitucionales, las legales y las reglamentarias o decretos. De igual manera sería conveniente que la tramitación que genera las distintas clases de normas fuera muy precisa, a fin de simplificar la formación de los decretos leyes y de las normas constitucionales.

En los períodos más graves de una emergencia nacional es posible que la prudencia y el patriotismo sean los únicos inspiradores de la acción de muchos ciudadanos. Como este clima moral dista de ser permanente, resulta imperiosa la existencia de leyes escritas y de penas pre-establecidas. Las leyes y las sanciones objetivas suprimen, a veces, la espontaneidad de los grandes momentos, pero en el largo tiempo inculcan la justicia y conforman al derecho la conducta de gobernantes y gobernados.

El régimen militar se ha preocupado desde el primer momento de dar base legal a todas sus decisiones. La mayoría ciudadana tiene conciencia de la legitimidad del pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973 y sabe que las Fuerzas Armadas no pudieron obrar de otro modo que como lo han hecho antes, durante y después del pronunciamiento. En esta legitimidad se funda el edificio institucional que construyen las Fuerzas Armadas en el ejercicio del poder.

Ahora bien, una cosa es que las resoluciones sean legítimas por serlo la autoridad que las dicta y por obrar ella en la esfera de su competencia, y otra cosa distinta es que las decisiones se elaboren y adopten en forma expedita y eficaz. Para este segundo aspecto parece necesario que se diseñen con claridad los canales que cada resolución debe recorrer, las instancias a que está sometida, los términos o plazos de cada una de ellas y en fin la magnitud de las deliberaciones necesarias para que las normas queden definitivamente perfeccionadas. La gestación de las reglas constitucionales, legales y administrativas necesita de proce-

dimientos que racionalicen la tramitación, de debates formales de los organismos que intervienen en la formación de dichas reglas y de la información pública necesaria para que la ciudadanía pueda sugerir observaciones a las iniciativas en curso.

Las normas que fijan la competencia y los procedimientos para la generación de las reglas legales tienen la ventaja de señalar concretamente a los responsables de la respectiva decisión y facilitan el conocimiento público de los motivos por los cuales se legisla en tal o cual sentido.

Se evitarían críticas a las disposiciones ya dictadas y se suprimirían las presiones para modificarlas si en el proceso de elaboración participaran los afectados a través de sus sugerencias. Ciertamente es que ello multiplicaría las peticiones de audiencias y los memorándums que solicitan rectificaciones o enmiendas a los proyectos, pero los interesados intervendrían antes de que las iniciativas se conviertan en ley y no después, evitando así cambios en las decisiones una vez tomadas. Debe añadirse que, si se fijan las

competencias de las autoridades que deben intervenir en estas materias, serán ellas las que reciban a los interesados, dejando a las autoridades superiores en libertad para planificar la labor general del Estado y para resolver los asuntos de alta trascendencia.

Nos hemos extendido en este aspecto aparentemente formal del trabajo del Gobierno, porque la claridad y publicidad en la formación de las reglas legales es un paso importante en el trato franco del régimen con la ciudadanía. Es mejor que haya discusión entre los que hacen las leyes y los afectados con ellas. Resulta más conveniente que las observaciones y las críticas se hagan en el seno de los organismos del propio régimen antes que fuera y contra él, o en el extranjero. En fin, hay una participación sana, constructiva y no demagógica. Es la que se hace con sinceridad y que importa cooperar a la mejor marcha del Estado. Se espera que esas mismas características tenga la participación laboral en la empresa, y que en las áreas municipal, provincial y regional se den formas semejantes de actividad solidaria.

Baja moral de la prensa en la era marxista

(9 de febrero de 1975)

A propósito del Día de la Prensa se comenta la reciente información publicada por El Mercurio, acerca de la venta del periódico Clarín a Salvador Allende, por medio de un tercero (EM, 4 febrero, pág. 1).

La Semana Política

EJEMPLO DE LA PRENSA CHILENA EN AMERICA

En las proximidades de la celebración de un nuevo aniversario de la histórica fundación de la prensa chilena se hacen presentes circunstancias que impulsan a reflexionar sobre el espíritu que ella tuvo en el pasado, las graves vicisitudes por que atravesó en años recientes y el papel que se espera para el futuro en la orientación del espíritu público y búsqueda de nuevas formas institucionales.

Es un hecho histórico que el periodismo chileno estuvo desde el comienzo de la pasada centuria en la vanguardia del progreso cultural y técnico. Fue tal vez el primero que lanzó a la luz pública periódicos desvinculados de la servidumbre gubernativa. En América latina, después de la emancipación, se mantuvo largos años el oficialismo de la prensa, en razón de que ella había surgido impulsada y sostenida económicamente por los gobiernos y era muy onerosa y poco remunerativa la industria impresora. Los periódicos de aquel entonces tenían que pasar por las horcas caudinas de la ayuda económica de los poderes públicos, los cuales, a su vez, les imponían ciertos requisitos bastante reñidos con su inde-

pendencia. Fue frecuente en la época que las suscripciones de las oficinas públicas constituyeran el ingreso principal para la subsistencia de los diarios y se recuerda que el día en que el Ministro don Manuel Camilo Vial las canceló como sanción a la publicidad de su nombramiento de Fiscal de la Corte Suprema, que él deseaba mantener en reserva, se reafirmó la independencia en la labor informativa.

Otra característica que enaltecía a nuestra primera prensa fue que ella desde el comienzo formó un neto contraste con la falta de autonomía de la mayoría de los diarios del continente americano, y que a ello agregó su amplia acogida a los periodistas divorciados de los gobiernos despóticos e inestables que imperaban en otras naciones. El diarismo chileno del primer tercio del siglo pasado constituyó asilo para muchos escritores exiliados de sus países, que encontraron tribuna en las páginas de hojas pequeñas en su formato pero grandes por el espíritu de quienes les conducían. Aquí llegaron a colaborar en las páginas de "El Mercurio" de Valparaíso con sus brillantes plumas el argentino Sarmiento y el uruguayo Juan Carlos Gómez, y sentó plaza de redactor en "El Progreso" de Santiago el brillante jurista Juan

Bautista Mitre. Y lo que honró más esa comunidad internacional de trabajo fue que los extranjeros abordaban temas y polemizaban con los periodistas nacionales sin restricción alguna. Este internacionalismo hacía aparecer las brillantes plumas de Benjamín Vicuña Mackenna y de Manuel Amunátegui, en la entonces prensa libre de Cuba y el Perú, donde el último de los nombrados fundó el centenario "El Comercio" de Lima.

A pesar de que América latina vivía en un ámbito modesto y apartado y en los albores republicanos llegaba a las páginas de los diarios el bullente movimiento ideológico y técnico de Europa y Norteamérica. Camilo Henríquez inició la publicación de la "Aurora de Chile", parafraseando escritos y conceptos proclamados por la Revolución Francesa, y abrió un surco que pudo mantenerse con dificultades y contrastes, pero que forjó el alma misma del periodismo chileno. El padre de los editores nacionales, Camilo Henríquez González, nacido en Valdivia el 20 de julio de 1769, profesó como fraile de la Orden de la Buena Muerte, en 1790. Camilo Henríquez imprimió la "Aurora de Chile" el 13 de febrero de 1812, siendo aquellas débiles hojas el baluarte de los principios que se forjaban en la mente de los patriotas. Su hermana, doña Melchora Henríquez, fundó una familia que ha ilustrado por largos años el periodismo nacional al contraer matrimonio en Argentina con don Diego Pérez de Arce, de quienes descienden, por lo menos, cuatro generaciones de redactores de las columnas de "El Mercurio".

Camilo Henríquez está en el centro de una constelación histórica de la actividad de la prensa nacional y es acreedor a todos los honores que se rinden desde hace 163 años a la fecha.

BAJA MORAL DE LA PRENSA EN LA ERA MARXISTA

Una gran descomposición política con disgregación de fuerzas y partidos, culminó el año 1952, correspondiendo a ella un paralelo descenso moral en diversos sectores periodísticos; se dijera que la República volvía a los tiempos de la anarquía liberando fuerzas que se precipitaban sin cauce y hacían temblar los sólidos cimientos de la nacionalidad. En esos turbios momentos de nuestra historia emergieron de los fondos más corrompidos condottieros de la pluma que con audacia y protección del poder se apoderaron de ciertos medios de comunicación y comenzaron a utilizarlos para los fines más deleznable y el escarnio de la honra de personas o instituciones. Significativamente volvieron a repetirse actuaciones de escándalo que sólo tenían parangón con las que se registraron en América cuando no existían gobiernos en forma y las únicas expresiones que circulaban entre el público eran las de los panfleteros más irresponsables. La historia recuerda a uno de ellos, Manuel Aniceto Padilla, que ofreció sus servicios de periodista mercenario a todas las Repúblicas de América del Sur, poseído de un satánico propósito de impedir la constitución de gobiernos libres, de desatar la procacidad en la prensa escrita y de ejecutar los actos más nefandos a la

sombra de protectores poderosos. Corrían por las venas de Manuel Aniceto Padilla caudales de sangre mestiza que, según los que lo observaron en su tiempo, explicaban la duplicidad de su conducta, los actos desleales contra quienes lo habían beneficiado y su desaprensión para servir y atacar alternativamente a los políticos de su tiempo.

"Los juicios que los gobernantes nos han dejado sobre Padilla son muy duros —expresa Encina—. Lo mismo los de Buenos Aires que los de Bolivia, Perú y Chile lo presentaron como el arquetipo del intrigante y del agitador verboso, del profesional de la calumnia y de la injuria sin riesgos y del sinvergüenza perfecto."

Personaje de tal filiación moral apareció en Chile cien años después, con iguales perfiles, en la persona de Darío Sainte-Marie, alias "Volpone". Este engendro surgió a fines de la década del 40. Había adquirido escuela antes en actividades tortuosas, a través de muchos países americanos ofreciendo su pluma y su capacidad de intriga a los dictadores que arrendaron sus servicios en Venezuela, Lima y Santo Domingo, escribiendo panegíricos de ellos con estipendios en dólares. Regresó aprovechando la reñida campaña de 1952, en la que, después de denigrar al candidato que resultó triunfante, logró, por la intriga y la humillación, ponerse a su servicio con la obligación contractual de destruir la honra de todos aquellos que se opusieran al régimen. Reapareció entonces bajo el escudo del pseudónimo de "Volpone" que habría de darle nauseabunda celebridad. Con acopios

ilícitos de recursos acumulados en la explotación del diario oficial "La Nación", cuya dirección alcanzó por medios sorprendentes y vedados, fundó sucesivamente varios diarios, siendo el principal "Clarín", calificado acertadamente como "cloaca periodística".

El que sufrió las mayores devaluaciones fue el líder del socialismo, Salvador Allende, a quien exhibió en las más denigrantes de las condiciones como aprovechador de caudales públicos y organizador de negocios al amparo de su investidura parlamentaria. Bajo el epígrafe "Vida sin Paralelo" acumuló los cargos más odiosos para un político, presentándolo como aprovechador de la buena fe popular. Nada de esto obstó para que después se fuera aproximando e incorporándose al círculo de sus íntimos y le prodigara páginas enteras de elogio y adulo, alentando sus ambiciones presidenciales dentro de la combinación de izquierda que finalmente se transformó en la Unidad Popular.

En la semana recién transcurrida la opinión pública se ha impuesta con asombro de que ese mismo diario "Clarín" con que Volpone zarandeó y halagó a Salvador Allende, según convenía a sus bastardos intereses, había sido comprado en centenares de miles de dólares por el ex Mandatario, que profesó de demócrata, moralista y protector del pueblo chileno. Los documentos auténticos aparecieron reproducidos el martes 4, después de ser ubicados en cajas de seguridad del desaparecido líder del marxismo "a la chilena".

Los valores por un total de US\$ 1.530.000 alimentaron la cuenta cifrada de Darío Sainte-Marie.

Esta inaudita operación permito al siniestro personaje retirar del país caudales mal habidos para ir a residir tranquila y opulentamente a España, donde hoy se encuentra.

Volpone, al huir en 1972, dejó una parte importante de su fortuna en mansiones situadas en balnearios de lujo, donde Salvador Allende concurría a celebrar ocultas reuniones y fiestas ambiguas, acompañado de su guardia de corps fuertemente armada, que él bautizó como Grupo de Amigos Personales (GAP).

De la putrefacción que dejó tras de sí el régimen marxista de la Unidad Popular el capítulo de las asociaciones ilícitas entre Salvador Allende y Sainte-Marie es quizá el más increíble, y parece haber hecho

escuela porque en estos mismos días se ha denunciado al mundo que los organizadores de colectas para reunir dólares y contratar mercenarios que ataquen a Chile en el exterior han defraudado gran parte de las contribuciones reunidas en los países marxistas y en otros que no lo son, pero que desean aparecer como tales para obtener provecho público de sectores de izquierda.

En la fecha que se acerca para celebrar la fundación de la "Aurora de Chile" ha sido afortunado que aparecieran en toda su evidencia la falsía de Allende y de sus más íntimos colaboradores y las páginas negras que el régimen de la Unidad Popular escribió para la historia de la prensa nacional.

Comunicación necesaria

(9 de marzo de 1975)

El artículo analiza los estilos de la comunicación civil y militar, destacando luego la necesidad de mecanismos regulares de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía.

La Semana Política

COMUNICACIÓN NECESARIA

Las Fuerzas Armadas han mostrado una notable capacidad para tomar el control del país para poner en marcha la actividad nacional en la dirección que el país reclamaba. La operación realizada puede calificarse de ocupación militar rápida, completa y eficiente.

Nadie puede extrañarse, entonces, que el nuevo poder —el de las Fuerzas Armadas— tienda a imprimir su estilo y sus características a sectores normalmente ajenos a la influencia militar directa.

En el plano político y administrativo, la influencia de las Fuerzas Armadas ofrece aspectos muy favorables desde que está traducida en el imperio del orden, de la disciplina y de la moralidad, en tanto que han cesado las graves tensiones políticas que se enseñorearon en el país durante gran parte de los últimos diez años.

Con el predominio castrense se han establecido, además, modalidades de relación humana muy propias del régimen militar. Una característica de éste es, por ejemplo, el respeto del "conducto regular" en las comunicaciones entre los distintos niveles jerárquicos. Según este principio, un individuo no puede dirigirse a un jefe sin haberse comuni-

cado primero con su superior inmediato y con las demás jerarquías que median entre aquel individuo y el jefe al cual desea dirigirse.

La comunicación por conducto regular en la profesión de las armas es, no sólo conveniente, sino indispensable. Surge como una exigencia esencial de la disciplina, la cual forma, a su vez, el ingrediente básico de la eficiencia operativa de los cuerpos armados. Hay que añadir a eso que la materia de las comunicaciones militares, con ser muchas veces complejísima y obligar a serios análisis científicos y técnicos, se refiere siempre al campo de la guerra, a la defensa de objetivos, a la conquista y control de posiciones y a la puesta en marcha de las actividades en posiciones tomadas. Organizaciones largamente pensadas y concebidas para cumplir esos fines; un elemento humano entrenado en la disciplina y demás virtudes militares, y las características y motivaciones de la actividad de la guerra, imponen —como decíamos— el conducto regular, y a través de él se consiguen gran fluidez y precisión en las comunicaciones entre los mandados y el personal de los diversos grados.

También en la actividad civil es conveniente y necesario observar el conducto regular en las comunica-

ciones, pero no siempre habrá que ser muy rígido al respecto. *Los* gobernantes suelen buscar diversos canales para su propia información. Así, es visible el interés del Presidente Pinochet y también de los demás miembros de la Junta de Gobierno, por tomar contacto directo con la ciudadanía, por observar la actividad de los chilenos en los sitios de trabajo y de reunión, y por interrogar a los jefes de familia sobre sus problemas. Si el gobernante no tomara esta iniciativa, debería conformarse con los fríos oficios con que los diversos niveles administrativos registran el estado de la nación, lo que arrojaría una imagen incompleta y a veces distorsionada de la realidad.

Pero la actividad política y administrativa requiere aún más. Comporta, en muchos casos, el imperativo de que las jerarquías más modestas puedan dirigirse a los jefes de servicios, a los Ministros y, en ocasiones importantes, a S. E. el Presidente de la República, con el fin de exponer ideas, así como nada debe impedir que las más altas autoridades se informen a través de funcionarios situados en distintos grados jerárquicos.

Esta intercomunicación dentro de la actividad administrativa no es obstáculo para que impere el más estricto orden y para que las decisiones emanen tan sólo de las autoridades competentes.

La marcha política y administrativa del país es por naturaleza flexible y requiere de los que la encabezan la posesión del mayor número de antecedentes sobre las materias que van resolviendo. El conducto regular será siempre el medio oficial de información, pero las delicadas cuestio-

nes nacionales e internacionales envueltas en la actividad del Gobierno, así como los intereses y pasiones que se forman en torno al poder, hacen aconsejable que la rigidez jerárquica no se transforme en petrificación y en anquilosamiento.

Aunque hay muchos civiles colaborando en la Administración, motivos explicables llevaron a entregar cargos destacados a miembros de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, personal en retiro de estas instituciones se ha reincorporado al servicio y se encuentra sometido a las normas y a la disciplina de aquéllas.

En este amplio sector uniformado prima severamente la comunicación por conducto regular. Además, los propios civiles tienden a asimilar el estilo castrense y son entonces escasas las oportunidades en que los jefes obtienen la comunicación espontánea y rápida desde los niveles subalternos.

Algunos titulares de altos cargos suelen esperar órdenes para obrar, o cumplen escrupulosamente sólo las recibidas y se limitan a transmitir hacia arriba las consultas o dudas que tales órdenes merecen, evitando en lo posible una decisión personal. Esto habla muy bien de la disciplina y del espíritu de renunciamiento del soldado; se justifica además plenamente en las circunstancias y motivaciones de la vida militar, pero en la rutina política y administrativa pone obstáculos a la expedición de las comunicaciones.

LA INFORMACIÓN REQUERIDA

El país viene convaleciendo de una larga hipertrofia de la crítica, de la polémica y de la publicación excesiva de lo público y lo privado.

Las Fuerzas Armadas han intervenido para rectificar dicho exceso que era síntoma de anarquía moral. Importa mucho, sin embargo, que lleguemos a la normalidad en vez de pasarnos al extremo contrario, al de la ausencia de análisis, al predominio del automatismo.

La existencia contemporánea está tejida de información. Mientras más rica, variada y rápida sea ésta, mientras más asimilable y utilizable, mejores serán las decisiones adoptadas en todos los niveles.

Una amplia y flexible intercomunicación de las distintas jerarquías del sector público es uno de los elementos adecuados para enriquecer la información de los gobernantes y asegurar así la posibilidad de decisiones óptimas en los planos político y administrativo.

Hoy otros elementos que concurren al mismo fin. A este respecto es claro el papel de los medios de comunicación social en cuanto proporcionan a las autoridades y al público un conocimiento de los hechos relevantes internos y externos. El Gobierno que encabeza el Presidente Pinochet ha mostrado comprender en todo su alcance el valor de esos medios y S.E. ha sido enfático a este respecto.

Los medios de comunicación social son verdaderos colaboradores del Gobierno, en la medida que transmiten información fidedigna, aunque esto no significa que deban ahorrar críticas o contentarse con actuar de meros transmisores de ideas o propósitos oficiales.

Mientras más libre sea el sistema de comunicación social, mejor puede reflejar éste el sentir de la ciudadanía y prestar de este modo el más valioso auxilio al Gobierno. Por otra

parte, la prensa ilustra muchas veces a la opinión pública y a la autoridad suprema sobre hechos que los propios funcionarios desearían quizás mantener ocultos o atenuados, pero que el bien común aconseja divulgar para que los vicios se corrijan y los criterios equivocados se rectifiquen.

Hay otro tipo de información que resulta indispensable para la buena marcha del Estado.

En un régimen político partidista y con actividad parlamentaria las decisiones legislativas se conocen y comentan con mucha amplitud. Las engorrosas y a veces dramáticas tramitaciones de las leyes por el Congreso en Chile presentaban el inconveniente de que la presión de los intereses incluía a menudo normas de privilegio dentro de una ley orientada al bien común, pero a la vez permitían que el legislador recogiera todas las opiniones posibles acerca del proyecto en estudio.

En el régimen actual, el legislador es la propia Junta de Gobierno y los intereses de círculo quedan al margen. No se ha establecido un mecanismo regular a través del cual el estudio y redacción de los proyectos más importantes lleguen a conocimiento de los servicios o áreas del sector público que serán afectados por la legislación o reglamentación en trámite.

Mientras dure el receso político no habrá representación popular en el nivel legislativo, pero nada impediría que un Consejo de Estado o algún otro órgano consultivo llevara a la Junta de Gobierno el sentir y la experiencia de los especialistas en cada materia sobre la que se está legislando. Este Consejo podría a su vez escuchar informes y auscultar la

opinión más autorizada en los asuntos sometidos a su estudio.

Un mecanismo de esta índole, constituido oficialmente y tal vez a través de norma constitucional, permitiría que los proyectos legislativos trasuntaran decisiones adoptadas después del análisis de todos los puntos de vista que deben recogerse dentro del Estado. Procediendo así la tramitación de los asuntos, sería más rápida en su conjunto, desde que las opiniones de los interesados se considerarían dentro de plazos regulares y sin entorpecer el curso del proyecto. Por otra parte, los textos legales preverían las situaciones que actualmente son materia frecuentemente de nuevos textos aclaratorios o rectificatorios.

La información adecuada, oportuna y rápida sobre las normas permitiría a los abogados redactores

contar con todo el acopio de antecedentes para proponer la justa decisión de los conflictos que deben zanjarse mediante las normas legales. A su vez, la Junta de Gobierno tendría a mano las alternativas de la decisión legal que debe adoptar, en la confianza de que se ha hecho lo posible por tomar en cuenta los intereses legítimos en juego.

El poder será más justo, sólido y efectivo en la medida en que las decisiones que adopte cuenten con la mayor información disponible. Los medios de recoger y comunicar la información política son necesariamente flexibles y variados. El cumplimiento de los altos fines que se proponen las Fuerzas Armadas en la conducción de la República se cumplirán eficazmente en la medida de que ellas dispongan de toda la información requerida para decidir.

Estado y libertad económica

(22 de junio de 1975)

Dos hechos independientes sirven de base al comentario de esta semana: en primer lugar, la declaración del Presidente Pinochet (EM, 20 de junio, pág. 17) a raíz de la petición que hiciera un sector de la Iglesia Luterana en orden a expulsar del país al Obispo luterano Helmut Frenz por actividades calificadas de políticas (EM, 18 junio, pág. 18, y entrevista a Frenz en EM, 21 de junio, pág. 19).

El segundo hecho, de carácter económico, se refiere al límite de 500 mil escudos mensuales que el gobierno ha establecido para el retiro de fondos depositados en Valores Hipotecarios Reajustables (VHR) emitidos por las Asociaciones de Ahorro y Préstamo (EM, 17 de junio, pág. 1). La medida, cuya finalidad es mantener la política antiinflacionaria, afecta a 120 mil ahorrantes.

La Semana Política

LIBERTAD DE CONCIENCIA

Satisfacción general ha producido la declaración del Presidente de la República acerca de que no le corresponde al Gobierno entrometarse en las situaciones internas que viven las comunidades religiosas. La intervención oficial sólo correspondería en el caso de que las personas en conflicto hubiesen infringido disposiciones vigentes.

El general Pinochet dijo también que sigue con interés cualquier problema que afecte a las comunidades espirituales, pues la misión del gobernante es escuchar y estar informado, pero "en ningún caso intervenir" en estas materias.

Las declaraciones fueron formuladas a propósito del rumor que había circulado sobre una posible expulsión del país del Obispo luterano señor Helmut Frenz.

Con lo dicho, el Gobierno muestra respeto por la libertad de con-

ciencia, que es uno de los principios básicos de nuestra República. Este respeto no es indiferencia sino más bien interés por las comunidades espirituales, pero en ningún caso puede transformarse en "intervención", salvo que estén comprometidas las normas vigentes, es decir, que se cometa un delito o se incurra en alguna otra acción ilegal.

Por su parte el Obispo Frenz ha expresado que la fe cristiana y la ideología marxista no son compatibles, lo que es obvio y evidente, porque la fe cristiana afirma la existencia de Dios, en tanto que la ideología marxista está precisamente fundada en la inexistencia de Dios, en el ateísmo.

El Obispo señor Frenz no ha dicho pues nada nuevo al sostener la incompatibilidad entre la fe cristiana y la ideología comunista.

La novedad actual no reside en esta incompatibilidad de conceptos sino en que los comunistas ateos y

materialistas permanecen fieles a sus principios, en tanto que ciertos cristianos empiezan a aceptar de hecho el ser instrumentalizados por el comunismo.

Cuando el Papa Pío XI declaró que "el comunismo es intrínsecamente perverso" y condenó la colaboración de los fieles cristianos con dicho movimiento, no hizo más que traducir el significado real que tiene la incompatibilidad entre fe cristiana e ideología comunista. El comunismo es esencialmente ateo porque es esencialmente materialista, y su interpretación materialista del movimiento histórico lo lleva con toda lógica a proclamar la lucha de clases y la dictadura del proletariado. De ahí entonces que la incompatibilidad advertida por el Obispo Frenz es una verdadera y profunda contradicción, no sólo en las palabras o en los gestos formales sino en las actitudes y en las conductas individuales y sociales.

Una de las paradojas de esta época es que los materialistas comunistas muestran más "idealismo", es decir más rigor en el cumplimiento de sus principios, que muchos cristianos, ya se dejen éstos arrastrar por el materialismo de la comodidad, ya se entreguen al materialismo de la lucha de clases y al mito de la revolución proletaria.

El Gobierno afirma y practica la libertad de conciencia. Ello no excluye ni podría excluir su definición anticomunista, porque la acción del comunismo no es ejercicio legítimo de la libertad de conciencia sino que, por el contrario, es la amenaza de supresión de dicha libertad y de todas las demás.

ESTADO Y LIBERTAD ECONÓMICA

Los expertos del Gobierno están llevando a cabo con éxito una experiencia de libertad económica, pero es importante no perder de vista la naturaleza de esa política para no incurrir en confusiones.

Se ha establecido la libertad de precios, mas la línea oficial está lejos de la economía manchesteriana del siglo pasado. En otras palabras, la política se funda en la eficiencia del mercado como criterio regulador de los precios y, por tanto, como el método más eficiente para la correcta asignación de los recursos de la comunidad, pero eso no significa que el Estado renuncie a su facultad de intervenir en resguardo del interés público, ya sea para eliminar monopolios o para conjurar cualquier peligro financiero o económico que amenace al país.

La soberanía de un Estado es irrenunciable y este poder debe estar siempre al servicio del bien común. El Gobierno ha de intervenir para asegurar el desenvolvimiento del mercado y para reducir lo más rápidamente posible el ritmo de la inflación. Lo que ha ocurrido con los VHR es un ejemplo de esta intervención que, contra todas las críticas, resultó una medida eficaz y no provocó los costos políticos que los augures de turno habían profetizado.

En lo económico, el Gobierno está empeñado en conseguir una moneda sólida y un sistema de precios reales. Para lograr ambos fines, no dejará de intervenir como lo hacen todos los Estados contemporáneos.

Debe tenerse claro, además, que la libertad económica y la búsqueda

da de financiamientos legítimos para el sector público no pueden obligar a todas las instituciones del Estado a transformarse en empresas comerciales. Las que tienen este último carácter podrán seguir las leyes del mercado, pero hay servicios públicos que no pueden ser rentables en el sentido en que las empresas lo son. Más aún, hay empresas de utilidad pública que deben atender a usuarios incurriendo a veces en grandes pérdidas.

Se comprende que en estos momentos de rectificación profunda de las estructuras del Estado y de las modalidades de acción de éste, no sea posible resolver diversos casos particulares que se encuentran gravemente afectados por una política general de reducción del gasto público y de impulso hacia el autofinanciamiento de las empresas estatales.

No obstante, las autoridades debieran velar para que no se paralicen medios de transporte que evitan el aislamiento de ciertas regiones o para que las economías no empiecen por los medicamentos más indispensables para un hospital, o destruyendo las posibilidades de investigaciones universitarias en marcha.

Según el principio de la subsidiariedad, formulado por el Gobierno, corresponde al Estado reali-

zar toda aquella labor de bien común que los particulares no son capaces de emprender. Esa labor específica del Estado debe subsistir en un régimen de libertad económica y llegar a ser todavía más eficaz que en un sistema de frondosa burocracia. Dicha labor específica tiene un costo que el país necesita afrontar como imperativo de su existencia como nación organizada.

Las buenas doctrinas suelen tener discípulos mediocres que las aplican mal por omisión o por exceso. No sería extraño que los criterios para reducir el gasto público o para financiar las instituciones estuvieran guiados a veces por algunos de aquellos discípulos. No faltarán tampoco casos en que la resistencia a la transformación de la economía por parte de ciertos núcleos del sector público se exprese a través de la adopción de medidas absurdas que hagan aparecer al Gobierno en una actitud incomprensiva o antisocial cuando bien podrían cortar gastos con menos daño de sus servicios.

La eliminación de rutinas y abusos a fin de implantar una economía sana no excluye la vigilancia necesaria sobre estos errores de criterio, voluntarios o involuntarios, que pueden perjudicar la buena marcha de la política de libertad económica y estabilización.

Situación universitaria

(24 de agosto de 1975)

Por estos días se anuncia la expulsión de 44 docentes y funcionarios de la sede oriente de la Universidad de Chile por actividades políticas (EM, 16 agosto, pág. 21) y la creación de comités regionales para racionalizar la actividad universitaria (EM, 18 agosto, pág. 15).

El artículo analiza la situación del trabajo universitario y la necesidad de establecer las bases del futuro quehacer universitario, respetando su labor propia, pero teniendo presente el peligro de su penetración por el comunismo.

La Semana Política

SITUACIÓN UNIVERSITARIA

El programa económico del Gobierno está teniendo éxito, lo que, por cierto, no significa que la situación de la mayoría de los habitantes sea aliviada o que vaya a experimentar un alivio notorio a corto plazo.

Se comprueba este éxito porque ya no hay dudas de que la inflación empieza a detenerse, y el tema de las críticas es ahora el llamado costo social de la política económica, tópico este último que también cede su lugar a otras preocupaciones. Los problemas nacionales van enfocándose progresivamente por el Gobierno, y, como éste trata de darles soluciones verdaderas, ellas tardan en dar sus frutos, lo que hace imaginar que las autoridades son insensibles a las inquietudes del momento. Cuando los críticos ya se cansaban de clamar por las alzas de los precios, la inflación empezó a declinar. Cuando parecía que el hambre, la cesantía y el empleo mínimo estaban desatendidos, ya el Gobierno no está organizando y movilizan-

do efectivos para afrontar las consecuencias de la política recesiva, cuyo carácter indispensable e inevitable resulta comprobado a las claras. No hay que alarmarse, pues, con el apareamiento de nuevos problemas y con la tardanza relativa en que se conozcan las soluciones. Generalmente esos problemas no eran nuevos sino que estaban apagados por la evidencia e inminencia de otros. La inflación de la UP era menos sensible que la inseguridad y la escasez que provoca el proceso desintegrador del marxismo. La seguridad, el orden y la limpieza del régimen militar se destacaron sobre las alzas de precios después del 11 de septiembre, y éstas empezaron a golpear la conciencia ciudadana cuando el país se había acostumbrado, en cierto modo, al orden, porque este valor estaba asegurado por los militares. El costo social fue el centro de la inquietud cuando ya era claro que la inflación cedía. En fin, podrían multiplicarse los ejemplos.

Pues bien, ahora preocupa muy especialmente la Universidad. Es un problema complejísimo y que com-

promete zonas vitales de la nación. Es un asunto que debe meditarse y comprenderse en sus verdaderas dimensiones, porque un desconocimiento de su naturaleza o de su trascendencia haría incurrir en un actitud descuidada e indiferente, o en una preocupación solícita pero precipitada.

La Universidad es una parte muy importante del futuro nacional, pues constituye el centro del pensamiento teórico del país, de la ciencia estrictamente desinteresada, de la actividad propiamente académica. Allí está gran parte del futuro, pues si bien las decisiones de los gobernantes marcan la línea del país, ocurre que esas mismas decisiones, los ejecutantes de ellas y quienes sean afectados por las mismas responderán, quieran o no, al molde que les fija un determinado pensamiento nacional. De la Universidad surgen los futuros profesionales, los futuros cuadros civiles, pero más importante que eso es el conjunto de premisas filosóficas, científicas y morales que se difunden en los claustros y que determinan la tarea y el estilo de cada generación.

La situación universitaria es, con frecuencia, delicada, porque compromete sectores sociales naturalmente inquietos, porque afecta actividades cuyo resultado puede ser, a largo plazo, muy decisivo y porque está situada en un complejo de relaciones intelectuales, científicas y políticas de mucha influencia en el país y con resonancia en el extranjero.

CRITICA Y AGITACIÓN

El trabajo universitario es, por su propia índole, crítico y libre. Sin

someter a discusión y análisis las proposiciones científicas no hay sino el repetir y copiar mecánicamente los conceptos, es decir, no se da el trabajo intelectual mínimo requerido por el saber superior. Este saber exige libertad para investigar y para expresarse, pues el progreso de la ciencia está en el avance de la razón por los caminos que le pertenecen y no en el acatamiento a un dogmatismo oficial que se impusiera por vía de autoridad.

Los privilegios universitarios encuentran su fundamento en la naturaleza del saber superior y en las condiciones adecuadas para su cultivo.

Es innegable que esos privilegios le han servido al comunismo para enquistarse en las universidades del mundo libre con una facilidad y con una impunidad que contrastan con la persecución que sufre en el oficialismo intelectual soviético cualquiera idea heterodoxa.

Los comunistas piden libertades y autonomía académicas para atrincherarse dentro de la Universidad, pero, una vez en posesión del poder, niegan esos derechos a sus opositores. Esa experiencia es la de los propios universitarios chilenos que conocieron primero la agitación y luego el terror y el silenciamiento en los claustros dominados poco a poco por el comunismo.

Pero el constante peligro comunista en las universidades occidentales no debe hacer perder el profundo aprecio por el valor de la universidad como elemento crítico, como centro de diversos saberes y como núcleo de irradiación intelectual. Tal vez, por el contrario, habría que aprender de los mismos comunistas su comprensión de la impor-

tancia de la cultura, de la ciencia y del arte como factores de poder. Los saberes superiores son —para nosotros— mucho más que meros instrumentos de poder, pero sería imperdonable que un régimen nacional, humanista y cristiano, como el actual, no tuviera en cuenta este aspecto y desconociera que la "conquista" de la Universidad es una operación en que armonizan la disciplina con el respeto a las modalidades inherentes al clima humano especial en que se desarrolla la vida académica.

La autonomía universitaria pasó de hecho a ser un mito del pasado, pero es de toda conveniencia que las medidas del Gobierno en esta área no den a maestros y estudiantes la impresión de que su misión en la sociedad no es apreciada por las autoridades.

La reducción presupuestaria se aplicó con un determinado criterio, a la vez que el costo de la educación superior empezó a elevarse, todo lo cual facilita los descontentos y por consiguiente el trabajo de los agitadores. La misma complejidad de las estructuras y de los asuntos universitarios ha impedido al parecer que las autoridades discernan entre las posiciones críticas y los quebrantamientos del receso partidista, así como no ha resultado fácil proteger los claustros contra los agitadores manteniendo el respeto a las ideas. En muchos casos los elementos más peligrosos aparecen colaborando mientras que personalidades independientes y francas se exponen a sanciones.

Lo primero que necesitan los verdaderos universitarios es comprensión y respeto por su labor. En esa línea encontrarán siempre, sin

duda, al enérgico pero justiciero Ministro de Educación, almirante don Arturo Troncoso.

La tarea académica no es sólo una preparación profesional sino el cultivo de las ciencias humanas y de la naturaleza, tarea —repetimos— forzosamente crítica y que requiere libertad. Parte de esta última es una cierta tranquilidad, una cierta seguridad para los que se dedican —muy sacrificadamente a veces— al ejercicio del saber superior.

La Universidad es parte del territorio nacional y por tanto está sujeta a las normas del estado de sitio, así como a las medidas de orden que las actuales circunstancias imponen. Lo importante es que tales medidas apunten a los elementos que no son auténticamente universitarios, a los agitadores, y que las comunidades académicas puedan apreciar que las autoridades velan por la libertad y la seguridad del trabajo universitario.

¿QUE HACER CON LA UNIVERSIDAD?

La pregunta no puede obviamente contestarse en pocas líneas. Este comentario aspira sobre todo a invitar al debate sobre tan importante materia.

El inquieto ambiente universitario está influyendo en el futuro nacional. No pueden la ciudadanía y el Gobierno prescindir de esa realidad. Tampoco pueden aparecer temiéndola y como cercándola, o bien intentando vaciarla de su espíritu. Hay que contar con la Universidad como ella es por su naturaleza y de acuerdo a las posibilidades chilenas.

Se necesitaría una concepción precisa de lo que debe y puede ser

nuestra universidad hoy día. Habrá tal vez que separar la actividad universitaria básica y esencial de los agregados accidentales. Por diversas razones, las carreras universitarias han experimentado un enorme incremento, produciendo una confusión entre el saber superior y la enseñanza de oficios o profesiones que podría impartirse en institutos independientes. Si se acepta que la Universidad tiene como objeto esencial el hacer ciencia y el enseñar disciplinas profundamente ligadas con la ciencia, el presupuesto y la administración de las universidades podrían aliviarse de muchas responsabilidades ajenas a la tarea propiamente académica.

Una segunda sugerencia digna de estudio es procurar que el número de alumnos, de disciplinas y de cátedras por cada universidad sea de magnitudes manejables. Es preferible multiplicar el número de universidades o dar más independencia a las sedes, a fin de que cada corporación tenga dimensiones que hagan posible una verdadera convivencia académica y un empleo racional de los recursos y del tiempo.

En las presentes circunstancias las relaciones de las universidades con el Gobierno son necesariamente muy estrechas. Tal vez debiera considerarse una mejor vinculación a través de un subsecretario o de un funcionario con rango ministerial, dedicado específicamente a la atención de los problemas de las universidades. En ese nivel y con la asesoría del Consejo de Rectores podría elaborarse la política universitaria, en términos de conciliar el respeto por el trabajo académico,

el apoyo financiero a las universidades y la colaboración de la enseñanza superior con el sistema nacional de educación.

De todas maneras, las consideraciones anteriores carecen de sentido si la actitud hacia la Universidad es de desconocimiento de la naturaleza de ésta y en consecuencia no se establece el trato justo del problema.

No habrá verdaderamente una transformación profunda de la nación y un movimiento renovador de los motivos espirituales de ésta, a menos que la Universidad reasuma su papel de conductora de la cultura del país. Por eso cuando se habla del desarrollo de la ciencia no basta con pensar en las ciencias físico-matemáticas, sino que hay que atender especialmente a las ciencias humanas: la filosofía, las letras, las lenguas clásicas y los idiomas vivos, la historia y el derecho requieren una especial preocupación. La Declaración de Principios proclama el carácter humanista del régimen. La expresión de ello ha de encontrarse con el tiempo en el lenguaje oficial, en el idioma corriente de los ciudadanos, en la literatura y en la teoría y práctica del derecho. Una cultura verdaderamente humana y verdaderamente libres es lo que hay que esperar de la Universidad. Ello no supone abandono de las ciencias de la naturaleza ni de las conquistas del pensamiento actual, sino que por el contrario es todo el universo de la inteligencia el que puede abrirse a la Universidad, con tal que emplee bien sus modestos medios, se emancipe de los rencores partidistas y disfrute de libertad y seguridad académicas.

Constitución vigente

(21 de septiembre de 1975)

Partiendo del anuncio del Presidente Pinochet respecto de la pronta promulgación de Actas Constitucionales en el Mensaje del 11 de septiembre y de la entrevista concedida a El Mercurio por el abogado Enrique Ortúzar, que preside la comisión formada por el gobierno para redactar la nueva Constitución chilena, el artículo analiza los pros y contras de la promulgación de las mencionadas actas, y la necesidad de clarificar la vigencia de las garantías fundamentales que establece la Constitución de 1925 (EM, 12 de septiembre, pág. 26, y EM, 15 septiembre, pág. 17).

CONSTITUCIÓN VIGENTE

El anuncio del Presidente de la República sobre la eventual promulgación de Actas Constitucionales, que serían otras tantas etapas de la carta Fundamental, ha hecho pensar a algunos que el país se encuentra en una especie de vacío constitucional que correspondería llenar a la brevedad.

Dicho supuesto vacío no existe, porque rige hasta hoy la Carta de 1925, con sus modificaciones introducidas por el poder constituyente previsto en ella y las aprobadas después por la Junta de Gobierno Militar en ejercicio de sus facultades. Las disposiciones suprimidas de la Constitución de 1925 fueron reemplazadas por otras, en términos tales que el conjunto de normas fundamentales es capaz hoy día de regular tanto el funcionamiento del Poder Público como de establecer los derechos de los ciudadanos.

Es lícito discrepar de algunas de las soluciones jurídicas adoptadas en el curso de este profundo cambio institucional que estamos vi-

viendo, pero resulta evidente que las soluciones están en vigor y que son obligatorias para los órganos del Estado y para los ciudadanos.

Parece conveniente que se defina en términos jurídicos la naturaleza de la nueva institucionalidad, precisando los principios en que se inspira. Pero, con razón, el señor Enrique Ortúzar, presidente de la Comisión Redactora Constitucional, ha llamado la atención sobre las profundas mutaciones en el orden moral, cultural, político, social y económico que necesariamente deberán proyectarse en la futura institucionalidad. Ello ilustra acerca de la magnitud de la tarea emprendida por la Comisión redactora y sobre los riesgos que tiene fijar en un texto legal principios ordenadores de un proceso en marcha.

La idea de que la democracia no debe otorgarles a sus adversarios las armas para que la destruyan, no puede ser más justa. Su propio enunciado lleva a un futuro diálogo político en que por definición no tengan parte aquellos adversarios de la democracia o aquellas asociacio-

nes reñidas con la seguridad o soberanía nacionales. Sin embargo, la realidad actual de Chile es que vivimos en un régimen de emergencia con receso político completo en que no es concebible todavía el juego democrático. Sólo ventajas presenta el anticiparse a trazar las líneas de la futura convivencia democrática, pero, para ser realistas, eso quedará por el momento en una simple anticipación.

Más compleja todavía es la tarea de regular la generación y estructura de los órganos del Poder Político. El país sabe que la quiebra de la juridicidad democrática dejó en pie como instituciones legítimas a las Fuerzas Armadas, y los mandos superiores de éstas, junto con expresar su respeto hacia la existencia y atribuciones privativas del Poder Judicial, asumieron la plenitud del Poder Político y para tal efecto se constituyeron en Junta. La evolución del proceso político llevó a la Junta a designar a su presidente como Presidente de la República, entregándole el ejercicio del Poder Ejecutivo, en tanto que los Poderes Constituyente y Legislativo quedaron en la Junta misma.

El régimen así descrito cuenta con indiscutible apoyo ciudadano y descansa en la decisión firme de las Fuerzas Armadas de asumir el poder por el lapso "que las circunstancias exijan", lapso que se medirá por la consecución de los objetivos y no por el transcurso de un tiempo determinado.

Es innecesario y hasta inconveniente adoptar soluciones jurídicas de carácter duradero en esta materia hasta que no maduren por completo las transformaciones iniciadas el 11 de septiembre de 1973. Así lo

entiende don Enrique Ortúzar en entrevista concedida a nuestro diario, y son atendibles sus reservas.

La exigencia de la buena fe en el ejercicio de la autoridad administrativa y el establecimiento de tribunales contencioso-administrativos, encargados de conocer y juzgar acerca de los posibles abusos que puedan cometer las autoridades políticas y administrativas, son dos importantes progresos de la norma constitucional aconsejados por la experiencia del país.

Igual cosa podría decirse de la extensión del derecho de amparo a la protección de todas las garantías constitucionales y no sólo de la libertad personal, así como de otras interesantes innovaciones anunciadas por el Gobierno como futuras normas constitucionales.

Parece necesario sin embargo insistir en que Chile posee una norma fundamental vigente y que no aparece urgencia alguna en codificar o verter en un nuevo texto más orgánico dicha norma fundamental. Hay democracias que no han estimado necesario formular su Constitución en un solo texto, como es el caso de Gran Bretaña, y hay tiranías que disponen de una elocuente Carta Constitucional, como es el caso de la Unión Soviética.

CONSTITUCIÓN Y CONSENSO

¿Qué persiguen las autoridades al dictar Actas Constitucionales parciales, como las anunciadas? El propósito es tal vez exponer en orden sistemático algunas materias ya contenidas en nuestra ley fundamental, explicitando preceptos o mejorando otros, a fin de que se pueda cumplir su sentido y respetar

más cabalmente las intenciones contenidas en la Constitución. Resulta en cambio difícil concebir en Chile una norma constitucional completamente nueva. El propio texto de 1925 emana del de 1833 y éste arranca en parte de otros más antiguos. Pueden siempre efectuarse enmiendas, modificaciones o perfeccionamientos, pero cabe observar con cautela el cambio radical en esta materia.

Con riesgo de simplificar en extremo el asunto, diremos que las Constituciones miran principalmente a dos objetivos: a regular la generación, competencia y funcionamiento del Poder Público, y en resguardar los derechos de los ciudadanos frente a ese Poder Público.

Siendo así es natural que las Constituciones emanen de un cierto consenso cívico, determinado por el debate público y por la propia experiencia histórica. El del 11 de septiembre de 1973 fue un pronunciamiento militar respaldado ampliamente por la ciudadanía y que representaba la única sana reacción institucional ante la quiebra política, jurídica, social y económica en que el país se encontraba. Nada es más lógico entonces que a raíz de este hecho surja una adecuada fórmula constitucional.

El pronunciamiento fue una reacción legítima que va encontrando sus cauces jurídicos, pero cuya forma constitucional parece exigir un consenso más explícito que la propia jornada militar del 11 de septiembre y el fervor ciudadano manifestado tan reiteradamente después en apoyo al Gobierno. La expresión de ese consenso llegará en su oportunidad, en el sentido de que

el país podrá pronunciarse sobre el modo de generar el Poder Político y de fijar sus límites, así como sobre el contenido de las garantías constitucionales.

Entre tanto es discutible la ventaja de dar naturaleza constitucional orgánica a la dictación de normas que virtualmente se encuentran ya en nuestro ordenamiento jurídico y que, para hacerse más claras o específicas, sólo necesitan del sistema de decretos leyes con ejercicio del poder constitucional, tal como se procede actualmente para solucionar las dificultades parciales que surgen con motivo de la organización y funcionamiento del régimen.

En septiembre de 1973 era concebible que se dictara un Acta Constitucional, aunque pensamos que fue sensato omitir aquel formalismo. En todo caso, a fines de 1975 o principios de 1976, no se ve urgencia o el motivo para que los conceptos de la nueva institucionalidad deban tomar la forma de un texto constitucional por partes o en un todo. Ello se explicaría mejor en presencia de un vacío constitucional, pero no en el caso presente, en que están adoptadas todas las medidas para el trabajo normal de los órganos del Estado y en que es posible dictar con expedición toda suerte de normas destinadas a perfeccionar el respeto a los derechos humanos o introducir otros mejoramientos en nuestras leyes.

Hay en cambio riesgo político en el despacho parcial de una Constitución. En efecto, no faltarán voces que pidan el funcionamiento del mecanismo electoral a la brevedad posible para que el pueblo se pronuncie sobre los textos constitucio-

nales. Bien sabemos que, destruidos los registros pertinentes y establecido el receso partidista, no hay medios actuales para provocar una consulta popular. El solo planteamiento de esa posibilidad suscitaría explicable ambiciones y haría todavía más difícil la recuperación moral y económica del país. Una sociedad tan hiperpolitizada como la nuestra se valdrá de cualquier expediente para volver a sus antiguos hábitos, y la discusión constitucional puede ser un buen pretexto para la ruptura del presente esquema, sin que ello traiga ventajas ni para la paz ni para el bienestar de los chilenos.

Estas son las razones por las cuales creemos aconsejable aceptar la evidencia de que el país tiene un régimen constitucional y que éste se encuentra en vigor íntegramente en lo que se refiere a los derechos de la persona humana consagrados en la Constitución de 1925 bajo la forma de garantías constitucionales. Las normas sobre generación y naturaleza del Poder Político sufrie-

ron cambios profundos por causa del pronunciamiento militar y lo mismo ocurrió con las que se refieren al régimen de emergencia. En todo esto, nuevas disposiciones reemplazan a las que existían.

El sano propósito de dar carácter orgánico y sistemático a las normas fundamentales vigentes, así como de introducirles cambios destinados a perfeccionarlas dentro de su mismo espíritu, podría servir para que se inquietaran los ansiosos de inquietarse y se infundiera en el gran público el juicio erróneo de que nuestro país se encuentra menesteroso de una norma constitucional que nunca ha perdido. No son en general esta clase de normas las más necesarias sino la presencia de una imaginación política apta para interpretar y traducir en realidades durables el cambio moral y social que está operando. Una vez consolidado el esquema político será menos difícil que los juristas sometan al país el conjunto de reglas concebidas para que ese esquema sea viable y duradero.

Nuevas circunstancias favorables

(8 de febrero de 1976)

El 27 de enero se realiza en el patio de honor de la Escuela Militar una ceremonia en que las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden proclaman su lealtad al Gobierno Militar. Se presentan los estandartes de todos los regimientos del país y presiden la ceremonia los cuatro integrantes de la Junta (EM, 28 enero, pág. 1).

Se anuncia que se ha solicitado al Banco Mundial un crédito de 33 millones de dólares para proyectarlos en la gran minería del cobre (EM, 29 enero, pág. 17).

Haciendo uso de las disposiciones del Decreto Ley 1.281, el Jefe de la Zona de Emergencia de Santiago ordenó la clausura de la radio Presidente Balmaceda (del Partido Demócrata Cristiano) por "su campaña de propaganda antipatriótica", el día 20 de enero (EM, 21 enero, pág. 17). Esta clausura fue levantada al comenzar febrero por resolución de la justicia.

La Semana Política

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES

A partir del acto de lealtad al Gobierno ejecutado por las Fuerzas Armadas el martes 27 de enero, se ha producido un cambio favorable de las circunstancias que el régimen militar seguramente aprovechará en beneficio de sus altos fines.

En efecto, la expresión de unidad y solidaridad, así como la fuerza organizada que significó aquella ceremonia, ha impresionado a la opinión pública llevándola a la evidencia de que los militares no han intervenido en la marcha del país por casualidad o para demostraciones transitorias. El régimen castrense tomó forma de marcha y dio orden de avanzar, en aquella imprevista concentración de oficiales generales, jefes, oficiales, clases y soldados.

Mientras en el plano interno de

las filas crece la conciencia de unidad y la confianza, no ceden los obstáculos de la vida política. Se diría que la acción pública se ha hecho ejemplarmente difícil en Chile; que llevar una política exterior honesta es lo mismo que provocar toda clase de resistencia; que luchar a fondo contra la preparación de la guerrilla subversiva se presta para las más graves incomprensiones; que realizar un programa económico congruente concita las oposiciones más enérgicas, a la vez que más disímiles entre sí. Esa constatación no debe impulsar al desaliento sino servir de incentivo para respuestas cada vez más rápidas y certeras ante las dificultades sobrevenientes.

Se presentan ahora nuevas circunstancias favorables. La confianza interna de los sectores castrenses se traspasa invisible pero eficaz-

mente a la ciudadanía civil. El dato de la estabilidad del Gobierno, de una estabilidad que nuestro país no conocía en la época de los vaivenes de asamblea, resulta elemento más importante para la acción de hoy. Es también de signo positivo la aprobación por el Banco Mundial del préstamo solicitado para la gran minería del cobre, porque indica que esa institución no sucumbió a los prejuicios políticos de ciertos gobiernos, porque además abre las puertas a nuevas negociaciones internacionales y finalmente porque refuerza la política financiera de nuestro Gobierno. Favorable resulta asimismo el envío de una misión económica de alto nivel que preside el Ministro de Hacienda, señor Jorge Cauas, a los países árabes, cuyas pautas de trabajo están llamadas a ampliar las relaciones comerciales de Chile con ese importante sector del mundo. En el orden político internacional debe mencionarse como de mucha importancia el avance hacia relaciones amistosas y de integración con el Gobierno de Bolivia, a través de la eventual solución del problema de la mediterraneidad de ésta. En el orden interno hay que destacar la reglamentación que favorece a los detenidos por el Estado de Sitio y el inmediato cumplimiento del fallo judicial que dispuso el término de la suspensión de la radio Balmaceda acreditando el respeto del régimen por las sentencias de los Tribunales.

Aunque la conjura internacional e interior sigue activa, han cesado los rumores sobre supuestos ultimátums y todas las versiones que comprometían la unidad o la estabilidad de la Junta Militar de Gobierno. De igual manera, el co-

mienzo de debate político al estilo partidista que se había insinuado a raíz de la publicación de un ex gobernante, dejó de existir quedando en evidencia la falta de verdadera actualidad que caracterizaba a todo aquello.

Las circunstancias anotadas son favorables, pero sobre todo son aprovechables merced a un despliegue de habilidad y de trabajo políticos.

El régimen fundamentalmente orientado hacia las necesidades básicas del pueblo de Chile y respondiendo a un imperativo de esta nación —acertado por lo tanto en lo esencial—, pierde algunas veces posibilidades por carecer de la rapidez de acción que le imponen sus numerosos adversarios y las difíciles contingencias que le salen al paso. Se necesita, es cierto, una agilidad extraordinaria para adaptarse a las cambiantes complejidades que comporta la trayectoria política elegida para Chile por sus Fuerzas Armadas. Si esta trayectoria consistiera en dejarse llevar, en entregarse a la demagogia, en conseguir a toda costa buena voluntad internacional, etc., el problema no revestiría las magnitudes que tiene. La visión de un gran objetivo nacional comporta mayores exigencias y trae consigo más dificultades.

EXIGENCIAS DE LA TAREA

Para aprovechar los elementos favorables y desarrollar cada vez más iniciativa, el régimen necesita con urgencia mejorar en algunos aspectos.

Al Gobierno le falta desde luego un asesoramiento político y jurídico suficiente.

Podrían darse muchos ejemplos ilustrativos a este respecto, pero tal vez baste con señalar los casos de la suspensión indefinida de Radio Balmaceda y el Decreto Ley 1.281 que faculta a los jefes de zona de emergencia para suspender medios informativos transitoriamente por causales muy amplias.

En el caso de Radio Balmaceda, lo que tal vez se propuso el Gobierno era imponer el receso partidista que estima infringido en las transmisiones de aquella, pero la decisión misma de suspender la radio se fundó en la facultad del jefe de zona de emergencia para reprimir la propaganda antipatriótica, que contempla la Ley de Seguridad Interior del Estado. Parecía obvio que el concepto de reprimir un tipo de propaganda no incluye la suspensión indefinida del medio que transmite dicha propaganda, sobre todo cuando la Junta de Gobierno, mediante el Decreto 1.281, ha concedido a los jefes de zona de emergencia facultades específicas para decretar esas suspensiones.

Debe celebrar el pronto acatamiento que dio la autoridad militar a la resolución de la Corte Marcial que dispuso se dejara sin efecto la suspensión de Radio Balmaceda. Ello habla con elocuencia de la rectitud de los propósitos del Gobierno Militar y de su voluntad de someterse a las leyes. Pero política y jurídicamente la medida adoptada no era aconsejable.

Algo similar ocurre con el Decreto Ley 1.281, que ha despertado resistencia unánime en el periodismo nacional fundada en antecedentes constitucionales y legales que no han sido discutidos.

Tal vez la misma presión perio-

dística ha llevado al Ministro Secretario General de Gobierno, general don Hernán Béjares, a proclamar que el decreto ley será mantenido. El régimen militar entiende afirmar así su carácter autoritario y su disposición a oír pero no necesariamente a seguir las opiniones ciudadanas.

Pero ¿era necesaria la dictación de esta norma? ¿Se pensó en las consecuencias que ella tiene actualmente y para el futuro? Cuando se oye decir que no es el ánimo del Gobierno impedir el ejercicio legítimo de la libertad de prensa, menos comprensible resulta que se haya dictado esta norma, que tal vez se dispuso para otros objetivos pero cuyo texto es por desgracia bastante claro. Faltó sin duda en el caso asesoramiento político y legal apropiado.

Cabe preguntarse si la acción del Consejo de Estado podrá cumplir este asesoramiento en todos los detalles y con toda la asiduidad que exige la marcha diaria de los asuntos públicos. En todo caso, parece evidente que los jefes militares han estado alejados durante toda su carrera profesional del juego político y que disponen de asesores jurídicos competentes en el ámbito institucional castrense, lo que lleva a pensar en las conveniencias de un asesoramiento con perspectivas políticas y jurídicas más generales.

El otro elemento indispensable de la acción es la organización administrativa del Estado, que el Gobierno militar heredó de sus antecesores.

En el campo administrativo la voz de orden ha sido la de las economías presupuestarias, línea muy saludable por cierto y apta para ali-

viar al Estado de la burocracia inútil, de las prácticas administrativas anacrónicas e innecesarias y de las funciones y responsabilidades duplicadas o difusas.

Sería injusto negar el progreso de ciertos servicios en la asimilación de los nuevos criterios administrativos, pero es ya oportuno que el régimen militar empiece a forjar una Administración eficiente, racional, impersonal y apolítica, infundiendo un nuevo espíritu a los servicios públicos. No basta para ello con organigramas y reestructuraciones. El proceso debe ser más vital y práctico. Podría empezar por ejemplo por la exigencia de cumplimiento puntual de los horarios de trabajo a partir de los jefes, y por ampliar los tiempos dedicados a la atención del público. Luego cabría estimular las iniciativas para la supresión de trámites inútiles o para la simplificación de las diligencias administrativas. En fin, los servicios públicos deberían mostrar en su organización y en su trabajo que el país se transforma y se moderniza aumentando su eficiencia en todos los niveles.

Un tercer punto que debe merecer renovada preocupación es la lucha contra la cesantía. Las autoridades financieras han declarado repetidamente que no faltan recursos para llevar el número de empleos mínimos hasta el nivel que sea ne-

cesario. Es éste un imperativo de defensa de la vida misma de la población. Nadie debe carecer en Chile de la posibilidad de lograr un empleo mínimo y la renta que éste proporcione debiera ser adecuada para el sustento del trabajador.

El empleo mínimo requiere organizaciones a nivel regional y municipal con posibilidades de recibir a los trabajadores y de encomendarles tareas productivas. Las autoridades se dan generalmente por satisfechas con lo realizado en esta materia, pero los niveles de desempleo continúan altos, lo que indicaría que los empleos mínimos deberían incrementarse. Paralelamente, es posible que funcionen más y mejores estímulos a la contratación privada de mano de obra calificada y no calificada. En fin, lo importante es que existan la conciencia viva y los mandos eficaces, así como los recursos oportunos para enfrentar el desempleo.

No habrá que olvidar sin embargo que la mayor eficiencia política, jurídica y social del régimen chileno sólo le ayudará en la lucha en que está empeñado, pero no hará desaparecer los obstáculos en su camino. Estos son inherentes a ese camino, es decir a la dirección elegida para hacer de Chile una nación verdaderamente independiente, libre y digna.

Un paso más

(27 de junio de 1976)

El Banco Central anuncia que se estudiará una rebaja en los impuestos (EM, 27junio, pág. 1), lo que tiene favorable acogida en el sector privado (EM, 10junio, pág. 17).

El Servicio de Impuestos Internos informa que desde el 1 de julio el IVA (Impuesto al Valor Agregado) se pagará quincenalmente y no mensualmente (EM, 20junio, pág. 27 y 23junio, pág. 19). Esto provoca gran oposición de comerciantes e industriales (EM, junio, pág. 23, y 24junio, pág. 17).

Se da a conocer informe de CONARA (Comisión Nacional de Reforma Administrativa) sobre reformas administrativas y las deficiencias del sistema actual (EM, 20junio, pág. 29).

El Mercurio comienza una serie de reportajes a las poblaciones marginales de Santiago para analizar los problemas básicos que ahí se viven (EM, 25 junio, pág. 1, y 26junio, pág. 1).

La Semana Política

UN PASO MAS

A medida que el país avanza por el camino que ha emprendido, le sobrevienen alternadamente días de ánimo y días de desaliento.

Sólo la firme y tranquila perseverancia del Presidente Pinochet es capaz de marchar sin doblegarse en medio de las presiones de los entusiastas que de súbito se transforman en desanimados o que pasan de este último extremo al primero. Es en definitiva la voluntad presidencial la que sostiene el desarrollo de una política destinada a favorecer a largo plazo a todos los chilenos sin excepción alguna, pero que en el corto plazo hiere intereses, impone sacrificios y presenta a la vez todas las ventajas y todos los inconvenientes de una acción drástica y profunda.

Uno de los secretos del débil

desarrollo chileno, que contrasta con el desenvolvimiento de una cultura intelectual y política de bastante complejidad, reside en que el ciudadano se protegió de su propia inferioridad económica buscando un régimen de excepción para sí y para su gremio o su grupo. Un gigantismo estatal y burocrático sometió a los habitantes a distintos mecanismos de protección y control. El sistema provocó desigualdades, monopolios y mal aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. Las protecciones, las bonificaciones, las exenciones y las franquicias operaron siempre en favor de algunos —a veces de muy pocos— y en perjuicio de los demás.

La política del régimen militar tiende a establecer la verdadera igualdad de oportunidades y la auténtica libertad del ciudadano para forjar su propio destino. De ahí el

esfuerzo por implantar una economía abierta, es decir con dinamismo exportador e importador; la insistencia en disminuir el tamaño del sector público en lo que tiene de inerte, ineficaz y dispendioso; la lucha por sanear la balanza de pagos y defender el buen crédito internacional de Chile, y en fin todas las medidas tendientes a someter la asignación de los recursos económicos y las leyes del mercado, es decir, a las decisiones de los usuarios y consumidores de dichos recursos.

La seriedad de esta política puede medirse a través del mejoramiento de las disponibilidades del país en moneda extranjera sin que haya aumentado prácticamente el endeudamiento y con un precio para el cobre de alrededor de 70 centavos de dólar la libra. Si se prosigue en esta línea de formación de reservas y el precio del cobre continúa elevándose en los próximos meses, nuestra posición en divisas podría llegar teóricamente al término del año a mil millones o más de dólares.

Pero todo en la economía tiene su costo. Este ahorro en divisas significa restricción del consumo de la población, ya sea porque se han exportado bienes que antes se consumían en el territorio, ya sea porque han disminuido ciertas importaciones. A esto debe añadirse una tasa inflacionaria todavía alta. Y la secuela de todo ello en el nivel medio y popular se refleja en el elevadísimo costo de la vida y en el gran número de cesantes.

Quienes soportan el mayor peso de esta política rectificadora se encuentran en los sectores modestos, empezando por los de extrema pobreza y siguiendo también por

grandes capas de población de ingresos bajos y medios.

No quiere esto decir que las personas de grandes ingresos no estén aportando a su vez una contribución tributaria importante y experimentando restricciones económicas por falta de demanda y por alzas continuas de los costos, pero el caso de los más pobres es muchas veces nada menos que un problema de simple subsistencia.

En todo caso, el sacrificio de la población está representado ahora en la considerable mejoría del crédito internacional del país y en la consiguiente disponibilidad de divisas.

Por lo mismo, parece llegado el momento de dar un paso más, impidiendo que la prolongación del esfuerzo traiga demasiada fatiga y se corra el peligro de detener el progreso o de retroceder a etapas ya recorridas.

Muchas veces en la historia los difíciles logros de un gobierno serio han venido a ser malbaratados para dar lucimiento a un grupo de demagogos que lo sucede, aprovechándose de los fondos acumulados por el período austero y constructor. Gracias a la firmeza del Presidente Pinochet que ha preferido ciertamente orientarse a la reconstrucción profunda del país y no al éxito ligero y momentáneo, el programa económico sigue aplicándose sin atenuaciones, pero dicho programa tendrá éxito en la medida en que tome en cuenta las realidades sociales del país.

A este respecto parece indispensable vigilar la extensión efectiva de la cesantía y adaptar los recursos y la organización del empleo mínimo a la magnitud del fenómeno. De

igual manera parece necesario vigilar y medir el funcionamiento efectivo de la entrega de alimentación a los escolares, tanto en volumen de ayuda como en calidad de la misma. Tal vez proceda multiplicar los auxilios, sobre todo durante el curso del invierno.

La acción social está íntimamente relacionada no sólo con los Ministerios de Salud y Educación, sino también con la ejecución de los programas de Obras Públicas y Vivienda. El presupuesto fiscal dio especial énfasis a las inversiones sociales. Lo importante es que los recursos se canalicen hacia obras físicas que proporcionen trabajo y presten el servicio a que están destinadas.

Las Fuerzas Armadas y diversas reparticiones del Gobierno han realizado una labor social muy importante, que aparece encabezada y animada por el Presidente de la República y por su señora esposa, acompañados por los integrantes de la Junta de Gobierno y sus señoras esposas. Pese a todo ese esfuerzo, se diría que el país no llega aún a concebir una estrategia global y una acción suficientemente intensa sobre los males que aquejan a los sectores más desposeídos.

LAS REALIDADES

Los progresos de la balanza de pagos y la previsión de las futuras expectativas en este punto parecen llevar al Gobierno a conceder la primera prioridad nuevamente a la lucha contra la inflación.

Esto supone desburocratizar y simplificar la maquinaria del Estado, llegando hasta la supresión lisa y llana de los servicios que no res-

ponden ya a la finalidad con que fueron creados.

La polémica sobre el IVA y la impresión generalizada de que el país llegó al límite de la carga tributaria indican que el financiamiento del Estado debe buscarse en la reducción del tamaño del sector público antes que en aumentos de los impuestos.

Desde hace años los gobiernos vienen hablando de economías presupuestarias, pero con frecuencia ellas no se dirigen hacia la supresión de servicios y programas, sino hacia la suspensión transitoria de los fondos para el funcionamiento de las oficinas y hacia la baja de la actividad de éstas. La poda verdadera implica eliminar funciones y propósitos que no se justifican, suprimir trámites engorrosos e inútiles, simplificar la estructura del sector público y bajar el número de los empleos. El Gobierno militar ha avanzado mucho en ese sentido y es, desde luego, notoria la labor de CONARA como programación de una reforma administrativa integral. Se advierte, sin embargo, que las urgencias fiscales van a imponer una acción rápida para reducir el tamaño del sector público y desburocratizarlo, pues el aumento de los impuestos ya no es posible y la alternativa que queda es proseguir con la inflación.

Hablando de reducción y eficiencia del sector público, ¿se han hecho en los servicios del propio sector económico del Gobierno —Hacienda y Economía, especialmente— las reformas necesarias para que se conviertan en instrumentos eficaces y oportunos del programa de los señores Ministros y de su equipo técnico de alto nivel?

Por otra parte, el Gobierno sostiene la economía abierta y al efecto promueve intensamente las exportaciones, así como no se asusta por el incremento de las importaciones. El comercio exterior —como el interno— suponen comprar y vender paralelamente. Dentro de esta concepción económica, parece lógico que se advierta con tiempo que a la crisis por carencia de divisas, que teníamos el año pasado, sobrevienen ahora problemas para el empleo inteligente del superávit actual y del previsible.

Las medidas para bajar los costos de producción adquieren especial importancia en estos momentos: desde luego, el dólar, que influye en casi todos los precios, el impuesto de la seguridad social, mediante la reforma de ésta, y los demás factores que inciden en los precios y en la contratación de personal.

El régimen militar no está realizando un mero ordenamiento ni pretende resolver los problemas nacionales con criterio inmedatista. Se empeña por el contrario en la reconstrucción nacional, transformando para ello los hábitos, prejuicios y privilegios tradicionales, aparte de reformar la organización administrativa y política de la nación. El cambio es mucho más hondo y significativo de lo que habitualmente se piensa. Es nada menos que el cambio para el desarrollo pleno, con todo su cortejo de sacrificios, trabajos y tensiones.

El cambio es para la liberación económica de todos los chilenos, con la meta de igualdad de oportunidades. Pero este proceso exige un espíritu pragmático y flexible, para no olvidarse de que hay miles de chilenos en inferioridad actual de condiciones para la competencia en el mercado de bienes y servicios; de que ese mismo mercado tiene obstáculos en un país montañoso, segmentado en valles profundos, con un territorio de extrema longitud y servido por insuficientes medios de comunicaciones y transportes; de que, en fin, el tamaño de nuestra economía y la distancia en que Chile se encuentra de los centros abastecedores mundiales hacen lento y difícil el juego pleno del mercado. Tampoco puede olvidarse obviamente que en el mundo internacional funcionan los proteccionismos y los dumpings hasta de parte de las naciones que más se ufanan con sus economías de mercado.

Lo dicho no significa que el programa económico debiera desvirtuarse o debilitarse. Sólo sugiere que la labor del Gobierno en sus diversos niveles y servicios públicos debe estar coordinada con las decisiones superiores; que la acción social global es indispensable y urgente; y que siempre es dable introducir ajustes en las políticas concretas para tomar en cuenta la realidad del país, sin que ello implique renuncia a los principios del sistema.

Autoridad del Estado

(8 de agosto de 1976)

Los abogados Jaime Castillo Velasco y Eugenio Velasco Letelier son expulsados del país por el gobierno, acusados de constituir un peligro para la Seguridad Interior del Estado (EM, 7 de agosto, pág. 23).

La Semana Política

MAQUINA DEL ESTADO

El secreto de la obra de Portales, cuyo espíritu se invoca predominantemente en el actual régimen, fue haber diseñado una máquina institucional independiente de las personas que gobernaban. El audaz y resuelto Ministro concibió y echó a andar el Estado de Chile, lo que fue por cierto una obra de arte, una construcción objetiva, tan independiente de su creador como de quienes la manejaban. En los decenios del primer período republicano se sucedieron gobernantes que disponían prácticamente de la totalidad del poder, tanto ejecutivo como legislativo. Ellos eran verdaderos monarcas, sujetos naturalmente a la ley, pero responsables únicos durante su período no sólo de la administración y de la política, sino también de la legislación de aquellos días.

La institución del Presidente de la República —primera y tal vez la más original de las instituciones chilenas— concentra en la persona del Jefe del Estado la totalidad del poder supremo y la suma de las responsabilidades de la República. El régimen de Portales concebía su autoridad impersonal en el sentido de que ninguno de los titulares del poder vinculaba su título a sus condi-

ciones personales o a las circunstancias de su designación. Cada designado gobernaba en su período con plena conciencia de que era el depositario único y exclusivo del poder supremo en la República. Cumplido su término, entregaba el mando con la misma abnegación ciudadana con que lo había asumido.

Otras naciones latinoamericanas han sido más favorecidas por las riquezas naturales de su suelo o por la prodigalidad de los talentos, Chile —a través de Portales— recibió como don en medio de su pobreza el genio de la organización política. Colaboraron a ello la lejanía y la limitada cuota de posibilidades económicas e intelectuales con que podía (y puede) contar nuestro país.

El genio de la organización política consistió en automatizar el funcionamiento del Estado. Hubo en otras naciones personalidades más brillantes y magnéticas que las nuestras. Se dieron caudillos y jefes ilustres, cuyos deseos eran susceptibles de encarnarse en leyes o de edificar naciones. No fue éste el caso de Chile. Nunca en nuestro país el Estado fue emanación de la personalidad del gobernante. Por el contrario, la maquinaria institucional funcionó por sí sola y se impuso a los gobernantes a través de los años. Es cierto que la eficiencia de

la maquinaria dependía en gran parte de la habilidad y conciencia de quien la manejaba. Es también cierto que esta maquinaria política necesitaba una moral pública que la justificara e impulsara. La democracia parlamentaria de los últimos 40 años fue designando personalidades para las cuales era cada vez más difícil responder a la singularidad de la vieja institución presidencial portaliana y, por otra parte, la ética nacional que inspiró las milicias portalianas, que empujó a los civiles a la guerra contra la Confederación y a la Guerra del Pacífico, y que configuró la sobria administración chilena, se había ido desvaneciendo con el tiempo.

El funcionamiento automático —ajeno a las personas y a las influencias— que caracterizó al Estado chileno era eficiente mientras se mantenían los rasgos históricos y sociales del edificio portaliano. A medida del desgaste comenzaron a introducirse toda suerte de parásitos y de elementos destructores. Los últimos y casi vergonzantes restos del Estado portaliano vinieron a naufragar en el régimen marxista de Salvador Allende. En ese período se utilizaron las normas en contra de los principios que las mismas contenían, y se empleó la autoridad en contra de lo que sustentaba y hacía posible aquella autoridad. Eso fue el derrumbe del antiguo y venerable edificio. Quienes han venido a la vida después de ese derrumbe, difícilmente pueden comprender la magnitud del desastre e imaginar lo que era aquel edificio portaliano que ellos conocerán tan sólo por la historia.

La quiebra institucional producida con Allende señala el término

definitivo del régimen portaliano. Por fortuna, las Fuerzas Armadas —formadas en una tradición de obediencia constitucional y de neutralidad profesional— toman conciencia de que son el único elemento de continuidad de la República, de que en ellas reside y se mantiene la legitimidad institucional y de que sólo los institutos armados tienen el título moral para generar una nueva institucionalidad. Pero esta institucionalidad nueva está muy lejos de un régimen de emergencia, provisional y de facto. Las Fuerzas Armadas han comprendido desde hace largo tiempo que ellas están llamadas a forjar una nueva organización jurídica.

Tan importante empresa es sólo dable dentro del marco chileno de principios y tradiciones. En consecuencia, no podría concebirse una nueva institucionalidad que estuviera desconectada con la corriente moral que configura nuestro desenvolvimiento histórico.

Conforme a lo dicho, la institucionalidad propiamente tal supone una cierta automaticidad, una forma de funcionamiento de los organismos públicos según reglas que no pueden ser variadas discrecionalmente por la autoridad superior. Ahí reside, precisamente, toda la diferencia entre los despotismos transitorios y adjetivos y la construcción institucional de larga y profunda perspectiva; en la capacidad de los gobernantes para crear o no máquinas semovientes, que se mueven por sí mismas, esto es, en virtud de reglas jurídicas adecuadas para la acción e intervención de funcionarios medios que no demandan continuamente la venia de la autoridad suprema.

AUTORIDAD DEL ESTADO

El grave trastorno institucional provocado por el allendismo impulsó la intervención de las Fuerzas Armadas y la implantación de un régimen autoritario.

El sistema chileno actual puede despertar adhesiones o resistencias, pero es indiscutiblemente un modelo muy definido de acción política contemporánea. Responde al funcionamiento de los mecanismos defensivos naturales de las Fuerzas Armadas en presencia de un grave deterioro nacional, como fue el régimen marxista. Ahora bien, en el curso de la acción esas Fuerzas Armadas han ido configurando una autoridad única en el nivel supremo, la que recibe la adhesión y leal colaboración de todos los mandos castrenses. Hay entre nosotros, pues, un solo centro de poder y, por tanto, de responsabilidad política y administrativa. Dicho autoritarismo centralizado, con apoyo de la unidad férrea de las instituciones armadas, se ha convertido en el adversario más temible para el comunismo y demás tendencias disolventes.

El régimen militar está próximo a cumplir tres años, en los cuales ha asegurado la paz cívica y sentado las bases del futuro desarrollo.

La reciente adopción de severas medidas respecto de dos personajes políticos, a los que el Gobierno acusa de participar en actividades subversivas, recuerda a la ciudadanía la vigencia del estado de sitio y la actividad de una autoridad militar que no da cuenta a nadie de sus decisiones.

Mientras rija esta situación de emergencia en que la opinión pública no participa de los hechos po-

líticos ni siquiera por la vía de la información, sólo podrá avanzarse en los estudios de una nueva institucionalidad, pero será difícil que esté surja con las características originales que debían serle propias. Una nueva organización constitucional no consiste, obviamente, en legalizar por escrito y en perpetuar así un sistema de emergencia. Es preferible mantener este último sistema tal como funciona y seguir ahondando en las reflexiones sobre la manera de reconstruir la autoridad del Estado con el automatismo en que estribaba su primitiva eficiencia.

Entretanto, hay que decir que son respetables las razones de seguridad que se invocan para la medida de expulsión de los señores Castillo y Velasco, y debe entenderse que la reserva oficial sobre los fundamentos de hecho de su resolución corresponde también a imperativos de seguridad. Con todo, habría sido deseable que el público conociera las acusaciones concretas y circunstanciadas, a fin de que se apreciara la justicia con que el Gobierno ha actuado. A falta de una explicación suficiente, la autoridad del Estado puede apelar a la confianza del país, pero no cuenta con la participación ciudadana en esta materia, ni tampoco la requiere.

Ahora bien, el apoyo último de los gobiernos es la opinión pública y con este factor contaron las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973. El Gobierno sigue recibiendo ese apoyo, pero él constituye un acto de fe en la honestidad de intenciones y en la prudencia de los responsables del Estado. Precisamente porque falta el automatismo de que hablábamos y existe una muy limi-

tada participación ciudadana en el conocimiento de las decisiones y de los motivos de éstas, el país debe hacer renovadamente un acto de confianza y de fe en el mando supremo. La vía de la información (no de la propaganda ni de los comunicados sucintos), de la información honesta y circunstanciada de los hechos políticos más importantes, constituye una manera por la que la ciudadanía participe y apoye a conciencia las decisiones de la autoridad. Hay importantes sectores que no desean otra cosa que vivir tranquilos y que nada les interesa de lo que ocurre en la esfera política. Pero, aparte de que aún éstos se preocupan de los hechos administrativos que les afectan, resulta inconveniente que un gobierno se apoye en la suma de las indiferencias. Necesita, por el contrario, el respaldo vivo y activo de una opinión pública que no está formada por la masa amorfa, sino por los sectores que reflexionan y que influyen en la comunidad. La participación de los grupos más responsa-

bles y dinámicos es la que se encuentra por la vía de la información honesta, aunque ella no tiene por qué ser siempre grata a las autoridades.

Bien sabemos que en el país hay una amplia información económica y administrativa. Las preocupaciones sociales, culturales, deportivas, y sobre todo económicas, encuentran amplia cabida en las noticias y en los debates periodísticos. No ocurre lo mismo en el plano político, donde sin quebranto del receso partidista pudieran las fuentes informativas oficiales ser más abiertas en todos los casos en que la estricta seguridad nacional no esté en juego.

Las Fuerzas Armadas están empeñadas en labrar una nueva institucionalidad. Ello no significa ni volver a la antigua ni recurrir forzosamente a procedimientos electorales conocidos, pero debiera implicar la instauración gradual de una mayor participación ciudadana a través del conocimiento objetivo de los actos jurídicos de la autoridad.

La inevitable política

(10 de octubre de 1976)

Entre los acontecimientos recientes está la publicación del detalle de los gastos sociales que está realizando el gobierno (EM, 1 de octubre, pág. 1). En el texto se alude al "Mapa de la Extrema Pobreza" —estudio elaborado por la Oficina de Planificación Nacional y la Universidad Católica—, en el que se señalan, a base de una tabla, los lugares de Chile donde se concentran las familias catalogadas como de extrema pobreza (EM, Informe Económico Mensual N° 14, pág. 5).

En discurso pronunciado en Naciones Unidas, el Ministro de Relaciones Exteriores, almirante Patricio Carvajal, expresó que "la URSS es el enemigo número uno de la paz mundial" (EM, 6 de octubre, pág. 21). En la televisión norteamericana, el candidato presidencial Jimmy Carter se refiere a operaciones de la CIA en Chile y a la ayuda prestada por el gobierno republicano a la Junta Militar chilena (EM, 7 de octubre, pág. 1 y EM, 8 de octubre, pág. 1).

La Semana Política

NO SOLO ECONOMÍA

Cuando las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad del poder existían dos órdenes de programas de acción claros y congruentes. Uno de ellos era el relativo a la Seguridad Nacional, estudiado por el Ejército y por las demás instituciones de la Defensa, desde niveles teóricos en la Academia de Guerra hasta planificaciones detalladas y concretas en los diversos Estados Mayores. El 11 de septiembre de 1973 fue una decisión de Seguridad Nacional. La forma en que los institutos armados controlaron el país e inmovilizaron las resistencias extremistas es una prueba de que el conjunto de ideas individualizado bajo el concepto de Seguridad Nacional tenía claridad, eficacia y grupo ejecutor organizado. El otro

programa ideado como sistema internamente lógico y con un grupo de ejecutores bien preciso fue el plan económico de Gobierno.

Ambos programas —el de seguridad y el económico— han despertado críticas, oposiciones y clamores de los afectados. Por diversas razones y desde distintos ángulos han sido combatidos, pero los responsables de su ejecución han continuado adelante con una inflexibilidad que parece prenda de la completa fe que ellos tienen en el éxito feliz de su esfuerzo. Han podido ser eficaces e inflexibles porque partían de premisas claras y acudían a métodos probados. No es extraño, entonces, que tales programas se hayan impuesto por su propio dinamismo y que hayan abarcado no sólo su ámbito específico, sino, en el hecho, todo el horizonte público del país.

Cuando se advierten la seriedad del trabajo del actual Gobierno y la honestidad con que desafía a los intereses, a los prejuicios y a las rutinas, no faltan quienes piensan que éste es uno de los mejores gobiernos chilenos, sobre todo en el aspecto financiero administrativo. Pero, obviamente, no es este último aspecto el que realmente le da proyección al régimen ni es el que provoca todas las reacciones que sabemos se generan contra Chile y su Gobierno militar. Hay una gran política enunciada con firmeza por nuestro Gobierno. Contra ella van desde los estudios sesudos hasta las consignas de los carteles murales. También contra ella van, en el fondo, los ataques al programa económico y las dudas sobre la honradez interna del concepto de Seguridad Nacional.

Hay, entonces, una posición política del Gobierno, que en estos momentos resulta original, novedosa, valiente y susceptible de trascendencia. Debe reconocerse, sin embargo, que esa política asume un rostro de mera probidad administrativa, o de medidas de Seguridad Nacional o de porfiada lucha por instaurar una economía de mercado. Los tres elementos que acabamos de citar son capaces de interesar y aun de conmover políticamente, pero este patrimonio de alta política disponible no encuentra herramientas suficientes eficaces por causa de que no hubo en el plano político una meditación tan seria y unos equipos tan integrados como los que se presentaron para la Seguridad Nacional y para el programa económico.

No puede un comentario pretender equipararse a la reflexión

poderada y profunda que precedió a los planes de Seguridad Nacional y Económica. Sólo cabe sugerir que se dé en el plano político una labor de grupo, una búsqueda de claridad y unos realizadores que tengan cierta equivalencia con lo efectuado en aquellos otros órdenes.

La presencia y la acción del equipo económico no tan sólo tienen eficacia realizadora, sino que constituyen una cierta característica del régimen. Ahora bien, lo aconsejable es que el grupo económico no se confunda completamente con el Gobierno. En otras palabras, interesa que, además de las nociones y medidas económicas, se realicen y difundan nociones y medidas políticas.

Nunca será de temer que nuestro país se vea arrastrado a un economicismo, si por tal se entiende una auténtica supeditación de todos los valores al espíritu de lucro. El verdadero peligro no está ahí, sino en la posibilidad de que, por falta de creación en las otras esferas de la vida civil y cultural, los conceptos económicos y las normas mercantiles ocupen todo el espacio que legítimamente corresponde a principios y conductas de más jerarquía real, como es el caso de la verdadera política.

LA INEVITABLE POLÍTICA

El régimen militar puede decretar el receso partidista y aun, si se lo propone, disolver los antiguos partidos políticos, pero jamás podrá prescindir de la política. Esto debe tenerse muy especialmente en cuenta en las circunstancias actuales, cuando el país se esmera por trazar y recorrer un camino inde-

pendiente. Tal independencia no puede ser un aislamiento suicida o una aventura irreal. Se trata, ciertamente, de una resolución política, lo que supone apoyos, medios, fuerzas, idoneidad para cumplir el fin propuesto.

No hace mucho hablamos de la necesidad de una acción diplomática y, someramente, de sus elementos más necesarios. Tal vez convenga ahora recordar que una política exterior, por independiente y digna que se la suponga, necesita aliados y hasta seguidores. La política internacional chilena de los últimos decenios había discurrido dentro del marco del poder protector de los Estados Unidos, marco que ni siquiera sobrepasó totalmente la Unidad Popular. ¿Qué ocurre ahora? ¿Se había dado antes el caso de que un candidato vigoroso a la Presidencia de los Estados Unidos —como el señor Carter— hubiera entretenido a sus televidentes con reiterados ataques a Chile? ¿Ha estado en otra oportunidad el país privado de la ayuda militar norteamericana, desde que dicho programa empezó a aplicarse?

Parece indispensable y urgente una reflexión política de carácter internacional. Resulta forzoso volver a pensar sobre el papel que juega Chile en el concierto de las naciones y acerca de sus posibilidades y expectativas más sensatas. La política internacional no resulta ser siempre una exposición de fidelidades doctrinarias, pero tal vez lo más significativo de una línea de acción exterior justificable es la ausencia de contradicciones profundas en las alianzas o en las beligerancias de un país. Esa línea exterior ha de ser pensada a la luz de las exigencias

permanentes de la nación, de lo que constituye propiamente una política de Estado, pero también debe contemplar, como es obvio, los matices de la situación del momento, lo que permite también que aquella política sobreviva.

El problema es más visible en el campo internacional, pero no es menos relevante en lo interno. También en este último la política se edifica sobre alianzas y se define frente a contradicciones. No puede realizarse una labor pública estable sin atender a esta realidad.

Tenemos, por ejemplo, que los economistas han efectuado un análisis profundo para detectar e individualizar los focos de extrema pobreza en el territorio, con lo cual han demostrado que los políticos tradicionales descuidaron el sector más pobre y desvalido de la nación. La deducción es clara a este respecto: surge con meridiana evidencia la convicción de que aquellos políticos, no obstante sus aparentes posturas populares, fueron incapaces de cumplir una auténtica y genuina política popular.

Si el tema de la extremada pobreza queda desposeído de sus connotaciones humanitarias y emocionales para analizar desde la fría luz política la conclusión no es tan desfavorable para los viejos tribunos partidistas. Es cierto que los llamados partidos populares —para no hablar de los demás— no tuvieron preocupación alguna por los sectores realmente más desfavorecidos y abandonados de la sociedad. Sin embargo, lo cierto es que una política se sustenta y alimenta de apoyos sociales efectivos. Aquellos políticos mal llamados populares tal vez no se preocuparon suficiente-

mente del modestísimo agricultor minifundista, del artesano relegado a las áreas rurales, del prestatario de humildes servicios no afiliado a sindicatos o partidos y, en fin, de muchos de los multitudinarios desplazados de la economía moderna chilena. ¿Por qué no se preocuparon de esos sectores? Porque aquellos políticos cuidaban su fuerza social de apoyo y sustentación, que no estaba ciertamente en los medios rurales o urbanos más pobres, sino en los sindicatos, en las industrias, en los medios estudiantiles e intelectuales, en fin, en los sectores sociales que respaldaban a dichos políticos.

El interés profundo por levantar de su postración a los sectores de extrema pobreza es una de las características más nobles de este Gobierno. La convicción de que el mejoramiento de los más pobres no puede hacerse en Chile de otra manera, sino a costa de los sectores medios —los ricos son pocos en el país y no tan ricos como para que sus impuestos y aun su completo despojo influyan significativamente en la distribución del ingreso—, es otra de las verdades no discutidas. Sin embargo, el extremismo en la tesis de defensa de los demás pobres puede llegar al sacrificio demasiado rápido y profundo de los sectores medios, con olvido de que este Gobierno, como cualquier otro, tienen su principal respaldo en la clase media, entendida como una profunda capa social que viene desde los obreros especializados y calificados hasta muchos de los más prósperos empresarios. La atención cuidadosa de la clase media parece un dato elemental de la política chilena, que debía estar en cualquiera consideración de un programa que no de-

pendiera tan sólo del ángulo económico.

Hablando de búsqueda de apoyos y de la influencia de la clase media, surge espontáneamente el tema de la Universidad. Ella es el centro pensante del país, y por mil razones, la flor y nata de los sectores medios de Chile. He ahí una zona digna del máximo cuidado. Sería un error suponer que allí los enemigos sólo radican en el extremismo marxista o en alguna que otra tesis contraria al Gobierno. El peligro en la Universidad se encuentra, principalmente, en el olvido en que pudieran caer las autoridades acerca de la función de aquélla. Por consiguiente, todo el esfuerzo que se haga para devolver a la Universidad su papel de hogar libre del pensamiento debe juzgarse útil para la política en el sentido más elevado de la misma. La Universidad no es un asunto de disciplina aplicable desde el exterior ni un mero problema de financiamiento. Se trata de un ser vivo que obedece a sus propias leyes —las del pensamiento— y cuya respuesta ante exigencias contradictorias con su ser es morir. De ahí, entonces, la extrema peligrosidad del problema universitario.

Resumiendo, diríamos que el tema político no ha tenido la reflexión y profundización que merecieron el de la Seguridad Nacional y el Programa Económico. Debe añadirse que la política es decisiva y que no consiste en el mero diseño de acciones por realizar, sino, también, en la búsqueda de apoyos y fuerzas para llevar a la práctica aquellas acciones. En nuestro caso, la clase media y la Universidad parecen un soporte indispensable, y requieren, por tanto, de cuidados y preferente atención.

Unidad y solidaridad

(31 de octubre de 1976)

Se precisa el sentido de la unidad nacional, señalándola como una vinculación de personas y hechos en el tiempo; una vinculación con la tierra patria y una vinculación política. Esta unidad debe traducirse, en definitiva, en solidaridad social.

La Semana Política

UNIDAD NACIONAL

El concepto de unidad nacional es tan básico y obvio que pareciera a veces carecer de contenido político concreto. ¿Qué nación y, aún más, qué organización social cualquiera deja de aspirar a la unidad en cuanto afirma su propia existencia? Insistir, pues en la unidad nacional es como redundar en un elemento que, por pertenecer a todos, se diría que no pertenece a ninguno y que, por tanto, no sirve ni para unir ni para distinguir a unos de otros. Así considerado, sería algo tan amplio y envolvente como la atmósfera; vale decir, una realidad tan necesaria como impalpable, habitual y poco novedosa, una realidad que en consecuencia no sería idónea para apoyar una empresa de carácter político.

La objeción tendría validez si no se dieran algunas circunstancias muy propias de la actual situación chilena, en las que la unidad nacional constituye una meta y, en cierto modo, una novedad.

Desde hace algunos años los chilenos están sintiendo que se encuentra en juego la existencia misma de la nación chilena. Tendencias foráneas impulsaron divisiones profundas entre connacionales que

llevaron a desgarrar y desgajar la unidad de la convivencia. Durante la administración Allende, y aun antes, se advirtieron temblores de intensidad progresiva que amenazaban aquella unidad. Cuando la situación estuvo a punto de tornarse incontrolable, las Fuerzas Armadas asumieron el poder e iniciaron la reconstrucción moral y material del país, poniendo término a la acción pública de las fuerzas disociadoras.

Muchos pudieron pensar que el establecimiento del régimen militar chileno iba a observarse con indiferencia por la opinión mundial, y que no pocos americanos —del norte, centro y sur— iban a sentirse satisfechos de que una cabeza de puente soviética en el Pacífico Sur americano hubiera quedado frustrada por la acción de las Fuerzas Armadas de Chile. El tiempo ha mostrado, sin embargo, que el supuesto socialismo democrático de Allende tenía la mejor imagen internacional, y que los acontecimientos iniciados el 11 de septiembre de 1973 contradecían los prejuicios, los intereses y las tendencias de la política mundial. No sólo no hubo indiferencia, sino hostilidad, y los que pudieron alegrarse de la derrota soviética en Chile han tenido pocas oportunidades de manifestarse a favor de

nuestro Gobierno, a causa de la propia situación mundial y de algunos errores de nuestra parte en el planteamiento de la posición chilena.

Después de tres años de régimen militar, la campaña exterior sigue aumentando en virulencia y en amplitud. Ello señala la imperiosa necesidad de poner el acento en el frente externo y de dedicar las mejores capacidades a la política exterior, pero ya es evidente que la mejor estrategia resultaría débil a menos que lograra un gran respaldo ciudadano en lo interno.

La unidad nacional parece algo vago e intangible mientras no está amenazada la existencia misma de la nación.

Pero cuanto esto ocurre, el llamamiento a la unidad equivale a una apelación al ser nacional.

Frente a los peligros de la disociación y de la subversión, y frente a un emergencia internacional nada fácil, el país no puede responder sino con un robustecimiento de su unidad interna. Esta unidad deja, por tanto, de ser un enunciado vacío, y aparece como la forma espontánea de encarar una amenaza vital. Los riesgos inminentes de aislamiento o las decisiones extranjeras incompatibles con la soberanía o la dignidad nacional han de encontrarse con un país íntimamente unido y solidario.

LAS BASES DE LA UNIDAD

La unidad nacional importa desde luego una vinculación de personas y hechos en el tiempo. La nación se une a lo largo de sus hazañas y de la sucesión del modesto acontecer cotidiano. Y se une a través de los vivos y de los muertos. La

veneración a estos últimos, que se palpa tan vivamente el día 2 de noviembre, es una manera en que el pueblo recobra su pasado familiar. El homenaje a los héroes es una forma en que la nación se reencontra a sí misma en los grandes ejemplos.

No hay, pues, unidad nacional sin un sentido dinámico de la tradición, lo que resulta evidente al considerar que la nación misma es un ente histórico, una singularidad que se mantiene como tal a lo largo del tiempo y que se caracteriza por perpetuarse a través de las generaciones.

La unidad nacional importa, en segundo término, una vinculación a la tierra patria, al territorio físico con todas sus posibilidades y características. La defensa del patrimonio natural respecto de los agentes de destrucción, el sentido de la geografía y del paisaje, el contacto con la naturaleza chilena, el conocimiento y cultivo de los recursos renovables, el apego al bosque, al mar, a la cordillera, son algunos de los elementos en que descansa la necesaria unidad. La tierra es la sede de la comunidad nacional. De cómo se cuide esta tierra y dé sus frutos, conservándose y remozándose, dependerá el destino que puedan tener sus habitantes.

Un tercer plano de la unidad nacional es el de la vinculación política. En los últimos años Chile ha sufrido hondas disensiones cívicas que llegaron a quebrantar la convivencia nacional. No ha sido posible hasta ahora reconstruir, por así decirlo, esta convivencia. Al contrario, las difíciles circunstancias en que el país se encuentra han agravado ciertas divisiones, empezando

por las que representan y acentúan ciertos chilenos exiliados. La unidad nacional en el plano político implica superar las mutuas incomprendiones y deponer los rencores personales. No podría envolver un desarme doctrinario en el sentido de que la conciliación nuble la claridad de los principios y haga menos nítidas las contradicciones y las identidades. La unidad nacional no puede reconocer como suyos a quienes son precisamente enemigos de dicha unidad en nombre de la lucha de clases y del internacionalismo socialista, pero sí puede abrir los brazos mucho más ampliamente que lo que han permitido los duros años de lucha anticomunista y de resistencia a la incomprensión exterior.

Hay tareas cívicas de naturaleza genuinamente unitaria, donde pueden atenuarse las disensiones antiguas. El pasado común, la tierra común y las empresas sociales que no tienen más bandera que la chilena podrían servir como factores vinculantes de la unidad nacional. También, y sobre todo, ha de servir la conciencia de que el país debe subsistir como tal, en medio de serias amenazas morales, económicas y políticas. Tratándose de reconstruir objetivamente el país y de defender su sustancia misma, tal vez sea posible que se reúnan voluntades ajenas a todo espíritu de partido o, a lo menos, capaces de relegar los intereses partidistas cuando se trata del bien común mostrado con veracidad y honestidad.

Las tareas cívicas unitarias debieran servir como nuevas formas de desarrollo del espíritu público y como manifestaciones de una actividad política superior, desligada e

independiente de grupos o facciones. La participación de los civiles, no en el régimen sino en el Gobierno, podría encontrar sus cauces orgánicos en la realización de estas tareas unitarias en que puede aplicarse la voluntad de servicio, la capacidad creadora y las aptitudes para conducir hombres y organizaciones.

UNIDAD Y SOLIDARIDAD

La unidad nacional necesita traducirse, por último, en solidaridad social. En la actualidad, la cohesión interna de la nación chilena y el respaldo ciudadano para emprender grandes proyectos colectivos o sencillamente para resistir presiones foráneas han de tener por base la existencia de una verdadera comunidad de valores, afectos e intereses.

Los lazos del pasado, de la tierra y de la posible colaboración política, tienden a debilitarse a medida que surgen los desniveles sociales. Las diferencias van más allá de la cuantía de los respectivos ingresos. Las distancias entre los sectores sociales corresponden a raíces culturales diversas, a distintos grados de aislamiento geográfico, al acceso desigual a la ilustración, a la comunicación y a la educación modernas, lo que se refleja, a su vez, en hábitos, aspiraciones y modalidades de vida disímiles. De ahí, entonces, que nuestra unidad nacional, tan sólida en aspectos visibles, encierre debilidades internas que son producto de hondos distanciamientos sociales y culturales, heredados de otros regímenes y nunca atendidos por las políticas que se consideraban avanzadas.

El régimen militar tiene el mérito de haber publicado y enfatizado el diagnóstico de la extrema pobreza, que es una de las formas de este distanciamiento social. Son apreciables, además, los esfuerzos que realiza el Estado, dentro de los exigüos recursos de que dispone, para remediar los males más agudos de la extrema pobreza.

Pero los distanciamientos sociales no afectan sólo a los sectores más pobres. Aun los grupos relativamente más favorecidos mantienen distancias apreciables entre sí. Esos desniveles parecen haberse hecho más evidentes desde el momento en que el Gobierno eliminó muchos subsidios al consumo, dejó en libertad los precios y aplicó medidas de austeridad que tenían que reflejarse en desempleo pronunciado. No es que el programa económico haya aumentado realmente los desniveles. Lo que ha hecho es desnudar el estado de pobreza a que nos redujeron los años de desorden y el impacto de la crisis energética.

La cesantía disfrazada ha pasado en muchos casos a transformarse en cesantía real. El clima de competencia económica exige aptitudes que no siempre posee el chileno

común, enfermo crónico del mal que Encina calificó de "inferioridad económica". El acento en la actividad financiera por sobre la industrial y agrícola ha ocasionado también desplazamiento. Por último, la orientación hacia la economía abierta va colocando a ciertos sectores en situación de familiaridad con el consumo elevado y refinado de productos extranjeros, lo que hace sensible la distancia respecto de otros sectores sociales más atrasados.

Se diría, en fin, que antes del 11 de septiembre de 1973 el país buscó mil artificios para ocultar diferencias sociales y económicas profundas. A contar del pronunciamiento las brechas no se disimulan. Y esto tiene que ser una invitación a resolver los problemas del desarrollo desigual. No sólo el de la extrema pobreza, sino el de la clase trabajadora industrial y la clase media rezagadas, junto al peligro de proletarizar la clase media.

La unidad nacional ha de reflejarse en una solidaridad social efectiva, no simplemente paternalista, eficaz y dirigida a derribar obstáculos y acortar distancias. Una acción de unidad nacional es, pues, un vastísimo programa cívico.

El régimen militar

(14 de noviembre de 1976)

Se analiza aquí la necesidad de permanencia del régimen militar, para enseguida distinguir entre régimen y Gobierno, señalando que este último debe ser de carácter nacional, en el que se integren militares y civiles.

La Semana Política

EL RÉGIMEN MILITAR

La creciente presión externa contra el país no está inspirada en el propósito de restaurar la democracia liberal en Chile, sino en el de provocar el fracaso y el derrumbe del régimen militar.

En el exterior hay elementos que cultivan el odio y el ánimo de desquite propios y ajenos. Nadie podría hacerse ilusiones sobre lo que signifique en la práctica el cumplimiento de los propósitos hostiles al régimen militar. Los casos de Vietnam, de Camboya y de Angola se repetirían en nuestro país. Tal vez el proceso podría insinuarse con modalidades que ocultaran la verdad del cambio. Siempre habrá disfraces democráticos iniciales para esconder la acción comunista y pasar con el mínimo de ruido a un régimen totalitario vengativo y sangriento. En el momento adecuado, se cerraría la cortina hacia el exterior y se silenciarían el dolor y la protesta, con complicidad de muchos expertos en derechos humanos y de muchos apóstoles de la democracia y de la liberación del hombre.

Quienes piensan en Chile que el odio externo tiene por blancos tan sólo al Presidente Pinochet, a los señores miembros de la Junta de Gobierno y a otras altas personali-

dades se equivocan por completo. El desquite comunista no perdonaría a ningún hombre de armas, a ningún jefe, oficial, suboficial, clase o soldado, a ningún funcionario civil que hubiera prestado servicios al régimen militar, y, por último, a nadie de la gran multitud de quienes activa o pasivamente colaboran con la situación establecida.

La subsistencia del régimen militar es un supuesto fundamental de la paz, del orden y de la unidad nacionales, pero también es la base de la seguridad personal de un gran número de chilenos.

Quienes saldrían gravemente afectados en un vuelco de la situación resultan a veces los críticos más exigentes del régimen y los menos colaboradores. Son muchos los que toman distancia y ven como desde un balcón los acontecimientos, como si lo que ocurre no los comprometiera vitalmente a ellos y a sus hogares.

Si en la actualidad pudiera plantearse a la inmensa mayoría de los chilenos la disyuntiva entre el régimen militar y la caída en el comunismo, cuyos primeros síntomas se sintieron en el Gobierno de Allende, ciertamente la respuesta favorecería al régimen militar. Sin embargo, esa disyuntiva no se presenta a las imaginaciones con suficiente claridad,

desde que el marxismo y el filomarxismo exhiben falsas terceras posiciones que oscurecen el cuadro y engañan sobre el significado final de estas últimas.

Es, pues, necesario que la opinión pública no se deje confundir ni desanimar. La alternativa del régimen militar no es por ahora otra que el comunismo, aunque éste empiece utilizando aliados de rostro apacible y de gesto moderado. Todo aconseja, por lo tanto, apoyar al régimen militar y prestarle la colaboración que requiere.

Los chilenos sensatos estiman, sin duda, indispensable al actual régimen, y nadie, rectamente y en su sano juicio, podría desear que los militares se alejaran del poder. El solo enunciado de tal perspectiva la convierte en indeseable, considerando lo que ocurriría en ese caso.

La discusión se orienta más bien hacia los medios que aseguren la vitalidad y eficiencia del régimen militar, sin que lo priven de ninguna de sus características ni debiliten su poder.

En este plano se sitúa la distinción entre régimen y Gobierno, lo que no significa por cierto propiciar directa o indirectamente un régimen militar y un Gobierno civil.

El régimen militar surge de la destrucción de la institucionalidad por obra del marxismo, a resultas de lo cual las Fuerzas Armadas, a través de sus mandos institucionales, constituyen un Gobierno y dan comienzo a una nueva organización nacional. Desde el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas se convierten en la fuente indiscutida del poder político, y en el respaldo del Gobierno que ellas resolvieron formar.

La cabeza del régimen militar, a la vez que del Gobierno, es el Presidente de la República, quien es también Comandante en Jefe del Ejército.

Ahora bien, ¿por qué y para qué hacer la distinción entre régimen militar y Gobierno? La razón y el objetivo miran a conferir solidez, flexibilidad y eficacia al primero, pero en ningún caso se relacionan con el imposible de un régimen militar expresado en un Gobierno sin militares. Sería equivocado, en consecuencia, ver en la distinción un criterio que opusiera militares a civiles, o que insinuara la marginación de los primeros de las funciones del Estado.

Las Fuerzas Armadas han constituido legítimamente un régimen y están comprometidas en la creación de una nueva institucionalidad. Ellas forman, respaldan e inspiran el Gobierno surgido de su pronunciamiento, pero no pueden identificarse como tales con las políticas y actos administrativos del Gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen fines que se confunden con los de la nación misma; trascienden, por tanto, las contingencias de un Gobierno y no podrían comprometerse ni arriesgar sus valores permanentes en el juicio de la opinión pública a que está expuesto todo Gobierno. Las Fuerzas Armadas, como tales, se encuentran fuera del debate político y, por tanto, son independientes del Gobierno. El régimen militar está unido al Gobierno que ha formado, pero es importante que no se confundan los valores que él representa con las alternativas políticas y con los personeros que las llevan a cabo. Un planteamiento económico, una gestión ministerial, una mi-

sión política cualquiera no deberían comprometer al régimen militar sino al Gobierno.

Por otra parte, la distinción a que nos referimos es válida en el sentido de que el Gobierno no está desempeñado directamente por las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, aunque sus miembros actúen en puestos de responsabilidad gubernativa. Esos funcionarios no son delegados de la respectiva institución en el Gobierno, pues dependen constitucionalmente del Presidente de la República. El régimen, por tanto, es militar, pero no lo es el Gobierno, en el cual sirven militares y civiles en virtud del nombramiento presidencial y sin atender a su condición de uniformados o de sin uniformes.

Debe añadirse que la distinción entre régimen y Gobierno es aplicable al caso en que la gran mayoría de los altos cargos públicos se desempeñe por uniformados. Ni aún así estaríamos en presencia de un Gobierno militar, a condición de que los nombramientos y relaciones jerárquicas en el servicio civil del Estado se subordinen al jefe del Gobierno.

GOBIERNO NACIONAL

La distinción entre régimen militar y Gobierno se hace, pues, con el objeto de respetar la independencia de las Fuerzas Armadas y de no asociarlas, ni indirectamente siquiera, a las contingencias de la política diaria. Se hace, además, la distinción para asegurar la unidad y eficacia de la acción gubernativa, sobre la base de la autoridad del Poder Ejecutivo, al cual se subordinan en el desempeño de sus cargos

todos los funcionarios, vistan o *no* uniforme. Cabe, por último, subrayar que ello da libertad al Jefe del Estado para designar a los individuos más idóneos en los respectivos cargos.

Más que para oponer militares a civiles, las nociones de régimen y Gobierno debieran propender a la integración de unos y otros en el trabajo gubernativo desde el momento en que realizan una misma acción, con idénticos objetivos y bajo la misma obediencia.

El Gobierno del Presidente Pinochet reúne por eso especiales condiciones para llevar adelante una política nacional, como efectivamente ha estado haciéndolo. La búsqueda del bienestar a largo plazo de la mayoría en el campo económico, los programas de erradicación de la extrema pobreza y otros son manifestaciones de este carácter nacional de la política que se sigue.

Esta línea de conducta puede definirse como política de Estado, entendiendo por tal aquella que está al servicio de los fines permanentes de la nación y que no es instrumentalizada por grupos o sectores de la comunidad.

La presencia de un régimen que se apoya en las Fuerzas Armadas y que participa, por tanto, del carácter nacional permanente e indiscutido de aquéllas, constituye un factor de sustentación de la política de Estado. El Gobierno que la realice podrá sostenerla con más firmeza y persistencia, en la medida en que exprese los objetivos del régimen militar.

Ese Gobierno nacional adquiere vigor en la medida en que el pueblo comprende su verdadero carácter y se siente efectivamente interpreta-

do por su política. La coincidencia del pueblo con el Gobierno se logra difícilmente a través de promesas demagógicas. El camino —ya lo ha probado el Gobierno— es despertar las coincidencias, mostrándose capaz de satisfacer los hondos anhelos de elevación y de dignidad reales que abriga el pueblo. Si el gobernante es depositario de las esperanzas más profundas y nobles de la ciudadanía canalizará también la confianza popular y podrá exigir los trabajos y sacrificios implícitos en toda gran obra política.

Una oportunidad de reafirmar esta línea de conducta se abre ahora a raíz de que se evidencian nuevas y palpables muestras de la profunda incomprensión internacional que nos rodea. Frente a ella es ciertamente necesario contar con dispositivos políticos eficaces, en términos que la magnitud de las adversidades no abrume a los encargados de la conducción del país ni haga vacilar al régimen militar en sí mismo. Pero, aun antes que eso, el Gobierno debe contar con el apoyo ciudadano explícito, es decir, con

la solidaridad renovada de la comunidad nacional en presencia de los peligros de aislamiento externo que se ciernen sobre la patria.

Un Gobierno nacional, no sólo en los principios sino en los hechos, un Gobierno que interprete a la ciudadanía y en el cual ésta participe activamente, tendrá la fuerza suficiente para resistir los embates externos y para superar sus propias dificultades. De ahí el imperativo de que exista una verdadera política nacional, caracterizada por un amplio movimiento envolvente —y no aislante— del Gobierno. Son grandes los valores en juego si el régimen militar no logra completar la formación de los mecanismos políticos de Gobierno o avanzar en acciones que mantengan a la ciudadanía toda cohesionada respaldándolo. De ahí la insistencia en presentar con distintas fases el tema de la política, no para minimizarlo discutiendo el papel de militares y civiles, sino para insinuar una política de Estado que libre al régimen y al Gobierno de los peligros del encastillamiento.

Otra quimera del oro

(23 de enero de 1977)

Se analizan los problemas financieros del momento, sus causas y la necesidad de restaurar los valores morales en la actividad económica, a raíz de la designación del Ministro en Visita Sergio Dunlop para investigar la situación de entidades financieras tales como la Cooperativa "La Familia", Financiera "Finregio", Cooperativa "El Sendero", Sociedad de Inversiones por Región, etc. (EM, 16 enero, pág. 11; EM, 23 enero, pág. 9). El Presidente Pinochet realizó un recorrido por la zona austral del país, embarcándose luego en un transporte de la Armada para visitar las bases chilenas en el territorio antártico.

La Semana Política

OTRA QUIMERA DEL ORO

Los recursos de Chile se obtienen mediante una explotación costosa y difícil. Nunca ha sido ésta la tierra de la abundancia. Sólo el trabajo de las generaciones ha conseguido a veces un atesoramiento que casi nunca ha llegado a la opulencia. El país desconoce el enriquecimiento rápido y duradero a la vez. Tiene, en cambio, experiencias en los vaivenes de fortuna y en los imprevistos derrumbes de las ilusiones. Chile, en resumen, es un país pobre en que la sobriedad de vida y el trabajo tesonero abren el único camino sólido del bienestar.

A la caída del régimen de Allende, la descapitalización de las empresas y el empobrecimiento de los ciudadanos corrían a parejas con la penuria fiscal.

El programa económico del Gobierno militar creó las condiciones para salir de aquel empobrecimiento, implantando la sinceridad económica, es decir, estableciendo los precios verdaderos de las cosas y,

por tanto, las magnitudes exactas de las fortunas de individuos y empresas. El mercado ha sido el gran detector de la verdad económica y, en el terreno del dinero y del interés, ha sido el mercado de capitales el agente de la veracidad.

En pleno régimen de libertad económica se produjo el rápido regreso de las empresas CORFO al sector privado, con las solas excepciones conocidas. Esta operación ofreció a los grupos económicos particulares tentadoras expectativas de adquirir negocios de diversos giros y tamaños.

Las circunstancias estaban dadas para superar poco a poco el empobrecimiento, pero el país no había dejado de ser pobre y no habían surgido por algún milagro los requisitos para enriquecerse en la holganza y en el buen vivir. Por el contrario, el régimen de libertad exigía más trabajo, más responsabilidad y más sentido profesional para las actividades económicas. En el mundo financiero, las celebradas cualidades de los "ágiles y dinámi-

cos" debían ceder la primacía a los calculadores fríos y cautelosos. La alegre desaprensión siguió adelante, pero sólo los que se preparaban a las inclemencias del nuevo clima tenían destino.

El nuevo clima implicaba aceptar que Chile había sido rebajado en sus posibilidades económicas y que esa descapitalización era una pesada carga para los salarios y patrimonios del país. Los primeros que sufrieron los efectos sensibles del fenómeno fueron los trabajadores, que vieron alzarse los precios mientras sus salarios los seguían a bastante distancia. Pero el empobrecimiento significaba, además, que muchos tenedores de capital no podían recuperar todo lo perdido y que muchas empresas no iban a sobrevivir en el giro y los volúmenes que registraban antes.

No había que confundir un régimen de libertad con un régimen de licencia. Por el contrario, ahora eran más necesarios que nunca el trabajo, la sobriedad, el buen empleo de los recursos, la prudencia y la imaginación moderada por el realismo.

Sin embargo, la libertad económica y las amplias posibilidades de comerciar el dinero dieron pábulo a la codicia. En vez de comprender cada cual los límites de su propia pobreza, empezaron unos a conservar o adquirir a crédito, en tanto que otros vivían holgadamente de la usura. En resumen, ciertas empresas y personas no supieron ajustar sus miras y sus gastos a los nuevos tiempos. No faltaron enriquecimientos bruscos y vidas ostentosas para el promedio habitual chileno. Tampoco escasearon las compras de empresas CORFO a

precios altísimos si se toma en cuenta la rentabilidad de dichos negocios.

Mientras el grueso de los trabajadores no tuvo más alternativa que adaptarse económicamente a las limitaciones de su poder adquisitivo, un grupo de personas apostó en el hecho contra la política del Gobierno y se empeñó en mantener activos sobre la base de pagar elevadísimos intereses por el financiamiento de esos negocios. Aunque en todos los círculos se oye decir desde hace tiempo que nadie puede pagar intereses tan altos como los que llegaron a estipularse, otro grupo de apostadores jugó contra el riesgo del crédito, obteniendo entradas suculentas de la usura.

Dichas apuestas se cursaron contando con la posibilidad de que el Gobierno cediera en su política intransigente, suponiendo que el Presidente de la República dejara de dar respaldo a la línea de saneamiento económico en marcha; imaginando, en fin, que el Gobierno y las Fuerzas Armadas iban a asustarse por el descalabro de ciertas firmas y hasta por una cadena de cesaciones de pagos. Es posible que alguno haya pensado que su seguridad estaba en el gran volumen de su pasivo y, por tanto, en la enorme magnitud del daño que produciría su insolvencia. Por fortuna para el país, la política económica se ha mantenido con firmeza, colocando a los grandes deudores en la necesidad de disminuir sus activos para hacer frente a sus obligaciones.

Quienes se han dejado arrastrar por una especie de quimera del oro tienen ahora que moderar sus ambiciones.

VUELTA A LA REALIDAD

Los que han corrido el albur de mantener grandes activos desfinanciados o de pretender intereses de extorsión se han mostrado más audaces mientras menos capacidad profesional tenían para moverse en el mercado financiero. Tal vez no se advirtió oportunamente que este comercio supone una gran dosis de experiencia, de tino y de prudencia. Los últimos acontecimientos demuestran que no está abierto para todos el éxito en el mercado del dinero y que para triunfar en él se requiere mucho más que disponer de créditos, influencia y capitales. La eficiencia profesional se necesita en este campo, como en cualquier otro, con el agravante de que no se manifiesta por un título ni por unos estudios académicos, sino por un conjunto de condiciones y aptitudes que se van desplegando con la experiencia.

Por parte del Gobierno faltó, asimismo, suficiente capacidad profesional. En efecto, el control de las entidades financieras se limitó a las llamadas formales, dejando en peligrosa libertad a los informales. Por otra parte, los obstáculos para constituir entidades financieras formales estimulaban la creación de las informales.

La reacción oficial frente a los pocos casos críticos se produjo aplicando correctivos en general bien orientados, pero las mismas medidas pudieron haber contribuido a normalizar mejor la situación si se hubieran estudiado a la luz de todos los antecedentes en la materia. Como se ha dicho por las autoridades, el mercado formal se encuentra en orden y las dificultades sur-

gen de la legislación reciente que reservó la captación de recursos públicos a las entidades formales. Pero, precisamente aquí está el problema. La decisión legal que prohibió abruptamente una actividad que era lícita el día anterior, es la principal causa de las perturbaciones de aquellas empresas medianas y pequeñas que estaban acudiendo al crédito de particulares en espera de una posibilidad de exportar o de un aumento de la demanda interna o del aporte de capital de terceros, o, en fin, de cualquier otro factor que regularizara su situación financiera. Las dificultades de aquellas firmas no derivan de la libertad económica ni del programa de Gobierno, sino de una medida legal que no dio tiempo suficiente para que el mercado informal se adaptara al reordenamiento.

En cambio, no se ha despachado aún el proyecto de ley sobre oferta pública de valores, que recoge la experiencia de otros países en esta materia y que procura dar seriedad a la intermediación financiera, sin disminuir la libertad ni favorecer posibles monopolios de la captación del dinero.

Las dificultades producidas se traducen a menudo en situaciones dolorosas que envuelven a personas muchas veces ajenas a toda participación en las causas de aquéllas. Sin embargo, esta crisis es una etapa de la regularización del mercado que resulta inevitable al establecer un sistema de libertad que resultaba desconocido tanto para los particulares como para el aparato administrativo del Gobierno.

En este cuadro es forzoso referirse también a la influencia de los manejos dolosos en las operaciones

financieras. Afortunadamente no son muchos los casos delictuosos, pero resulta necesario que la justicia proceda con la mayor energía en todos ellos, con el objeto de que esto sirva de escarmiento. La única manera de salvar la libertad es el castigo riguroso de los que abusan de ella. En cambio, la falta de sanción de los delitos favorece los controles masivos que hostigan por igual a los inocentes que a los presuntos culpables, a la vez que multiplican la burocracia.

Pero las actitudes severas han de dirigirse al dolo propiamente tal o a la negligencia muy grave, sin olvidar que las reacciones poco serenas frente a ciertas dificultades pueden transformar en delitos a simples incumplimientos comerciales.

La experiencia de la crisis en ciertas áreas del mercado de capitales será positiva siempre que signifique una vuelta del país a su propia realidad. En otras palabras, debiera aprovecharse lo sucedido para restaurar los valores morales en la actividad económica, para reafirmar el primado del trabajo sobre la especulación, para regresar al sentido de la responsabilidad en los administradores de bienes ajenos y para reconocer los límites de las ambiciones de dinero. Lo peor sería

equivocarse culpando de lo que sucede a la libertad económica o al programa económico de Gobierno. Hay que reconocer, en cambio, que ha habido ligereza en el manejo de instrumentos de gran efecto potencial y que en la confusión han aparecido individuos de pocos escrúpulos.

El regreso del Presidente de la República de la Antártica, después de un viaje de la más alta significación, se produce en momentos en que el mercado de capitales se normaliza y en que están aprovechándose las experiencias para el avance del programa económico. Se espera que la presencia del Jefe del Estado en la capital sea una reafirmación de dicho programa y, por tanto, de la necesidad de que las medidas del Gobierno confluyan al mantenimiento de la economía de mercado, cuyos frutos positivos están a la vista, pese a las perturbaciones financieras específicas registradas en estos días. El perfeccionamiento del sistema irá saneándolo y habituando a la ciudadanía a que el mercado de capitales es todo lo contrario de una invitación al ocio remunerado, así como la libertad de importación libre no coloca a nadie en la obligación de vivir y consumir más allá de sus medios.

Reforma constitucional

(6 de febrero de 1977)

El 31 de enero se publica en el Diario Oficial una reforma al Acta Constitucional Número 4, que se refiere a la procedencia del recurso de protección, establecido en el Acta N° 3, durante la vigencia de regímenes de excepción constitucional. El proyecto de reforma fue tramitado con reserva, sin que se hubiera dado información acerca de su preparación (EM, 1 febrero, pág. 19).

La Semana Política

REFORMA CONSTITUCIONAL

Estas columnas han sostenido más de una vez que el Gobierno dispone de una idea y un plan claros sobre Seguridad Nacional, así como de un esquema congruente y lógico para el Programa Económico, materias en las cuales se advierten coherencia y objetivos precisos. No ocurre lo mismo, se ha dicho, en lo que se refiere a la línea jurídico-política del régimen, punto sin duda importante, puesto que el Estado se conduce mediante pautas jurídicas e institucionales, sin cuya presencia no hay propiamente doctrina política en el verdadero sentido de la palabra.

La imprecisión de la línea jurídico-política aparece de manifiesto en la reforma constitucional publicada en el *Diario Oficial* el 31 de enero de este año.

La reforma deroga el artículo 14 del Acta Constitucional N° 4, que decía textualmente así: "Los recursos de protección y de amparo establecidos en los artículos 2 y 3 del Acta Constitucional N° 3 sólo serán procedentes en la medida que sean integralmente compatibles con las

disposiciones legales que rijan las referidas situaciones de emergencia".

En sustitución de la norma derogada se ha dictado la siguiente: "El recurso de protección establecido en el artículo 2° del Acta Constitucional N° 3 será improcedente en las situaciones de emergencia sea de las contempladas en el Acta Constitucional N° 4 de 1976 o en otras normas constitucionales o legales".

Un primer examen de la reforma constitucional indica al lector que el precepto derogado permitía entablar los recursos de protección y de amparo, durante los regímenes de emergencia, "en la medida que sean integralmente compatibles con las disposiciones legales que rijan las referidas situaciones de emergencia". El precepto que sustituye al derogado declara, en cambio, "improcedente" el recurso de protección en los regímenes de emergencia y nada dice sobre el recurso de amparo.

De esta modificación constitucional, cuya trascendencia es mucha, nada se supo hasta la aparición del *Diario Oficial* del lunes 31 de enero. No hubo debate público so-

bre el tema ni se dio información acerca de que la Junta de Gobierno estuviera debatiendo una enmienda constitucional. Más aún, no hay constancia de que fuera consultada sobre el punto. Y al parecer no tuvo tampoco intervención el Ministerio de Justicia, al que le corresponde de hecho y de derecho la secretaría en los asuntos relativos al despacho de normas constitucionales o de cuerpos legales de importancia.

¿Hubo motivos que justificaran una acción rápida y la prescindencia de los consultores o canales habituales para una modificación de normas constitucionales que fueron promulgadas el 11 de septiembre último? La pregunta no es fácil de contestar, pues no se divisa la utilidad de este cambio, mientras que resultan evidentes las desventajas del mismo.

Cuando se promulgaron las Actas Constitucionales N^{ros.} 3 y 4 el Gobierno encomió la novedad y méritos del recurso de protección, que constituye en efecto un modo original de resguardar los derechos y garantías constitucionales aparte de la libertad personal que se cautela con el recurso de amparo. En otras palabras, el régimen constitucional contempla el amparo en contra del arresto arbitrario. El recurso de protección defiende por su parte a la persona en contra de toda privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías individuales, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Debe añadirse que el recurso de protección provino de la experiencia jurídica recogida en la época de la Unidad Popular, en que los ciudadanos veían desconocidas sus garantías constitucionales por actos

arbitrarios de que resultaba a veces difícil o imposible reclamar con buen resultado.

La amplitud del recurso de protección permite que un individuo acuda a la Corte de Apelaciones respectiva y obtenga las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ya sea que el atropello venga de la autoridad o de un simple particular.

El recurso de protección es sin perjuicio de los demás derechos que tenga el afectado, pues lo que persigue es la salvaguardia de los derechos constitucionales. Es éste un modo para lograr que las autoridades y los particulares se atengan al respeto de tales derechos, de modo que en ningún caso el ciudadano quede en la indefensión con respecto a las garantías que las normas constitucionales le aseguran.

Como era natural, los recursos de amparo y de protección no pueden ejercitarse con las mismas características en los regímenes de emergencia que en un período normal. De ahí que el constituyente reconociera la vigencia de los recursos de amparo de protección en las situaciones de emergencia, pero sólo en la medida en que "sean integralmente compatibles con las disposiciones legales que rijan las referidas situaciones de emergencia".

Esta limitación significaba que el recurso de amparo quedaba restringido porque los tribunales deben respetar la competencia propia del Poder Ejecutivo, que es el que adopta las medidas de seguridad y califica soberanamente los motivos de sus órdenes.

En cuanto al recurso de protección, éste quedaba forzosamente li-

mitado por el ejercicio de las facultades que competen al Gobierno en las situaciones de emergencia, cuyos diversos estados comportan sucesivas restricciones de la libertad que, obviamente, no podían verse quebrantadas por este recurso excepcional.

El Acta Constitucional N° 4 fija un plazo dentro del cual debe dictarse la ley complementaria respectiva. Esa era la oportunidad normal para reglamentar los casos en que procede o no procede el recurso de protección, a fin de armonizar específicamente cada uno de los atributos del Poder Ejecutivo en las situaciones de emergencia con las posibilidades concedidas a los particulares para la defensa de sus derechos. Por ejemplo, en el "estado de defensa contra la subversión" el Presidente de la República puede restringir el derecho de reunión sin expresar causa, y, evidentemente, nadie podría invocar el derecho de protección en este caso. Nadie tampoco podría evitar con este recurso restricciones a la libertad de prensa en los casos en que el Presidente de la República tiene potestad para restringir dicha libertad, conforme a las normas constitucionales.

En vez de dictar una ley complementaria del Acta N° 4 como estaba previsto en ella, se ha modificado dicha Acta disponiendo ahora que el recurso de protección es improcedente y omitiendo toda decisión sobre el recurso de amparo.

CONSECUENCIAS DE LA REFORMA

Al declarar improcedente el recurso de protección para todas las situaciones de emergencia se cambia en el hecho la doctrina constitu-

cional formulada en septiembre último. La improcedencia significa, en primer lugar, que los abusos o arbitrariedades de un particular en contra de otro particular dejan de tener esta vía de reparación especial, lo que no tiene ventaja alguna. La modificación de una norma fundamental a menos de cinco meses de dictada no constituye una buena práctica porque siembra dudas sobre la estabilidad de la legislación. El peligro de que la norma constitucional se prestara para que se parapetasen tras ella situaciones abusivas o contrarias a la Seguridad Nacional se habría conjurado con la ley complementaria que contempla el propio texto del Acta N° 4. Si hubiera hecho falta, pudieron dictarse otras leyes que regularan el receso político o que, en fin, cumplieran los objetivos de Seguridad Nacional que se han tenido en vista.

Es, sobre todo, digno de registrarse el hecho de que en esta etapa de nuestra evolución política se restrinja un recurso constitucional de protección, sin que ello traiga aparejado un beneficio para el orden público o la Seguridad Nacional, pues todo lo que pudiera temerse del abuso de este recurso pudo evitarse con decretos leyes que no hubieran alterado la naciente institucionalidad constitucional.

Lo ocurrido es una experiencia para el Gobierno y para el país. Sería erróneo suponer que la reforma constitucional significaba un cambio de orientación o que tiene alcances políticos apreciables. Más justo es interpretar el hecho como insuficiencia de asesoría o, mejor dicho, como la falta de un esquema institucional y político tan claro y coherente como los de Seguridad

Nacional y el Programa Económico. Mientras la línea política, que se refleja obviamente en las decisiones constitucionales no se estructure como un todo continuo y armónico pueden presentarse situaciones como ésta, difíciles de explicar y que no han merecido un esclarecimiento de las autoridades.

Un buen esquema político y jurídico supone una concepción tal que permita el juego automático de las disposiciones, sin que haya ne-

cesidad de meter mano en ellas para enmendarlas cada vez que ocurre un caso supuestamente imprevisible. La gran obra política tiene algo de maquinal y en buena parte está guiada por su propio peso. En lo político se ha avanzado en principios teóricos, pero faltan el plano y la construcción misma de la máquina. Por lo mismo, hay que mirar con calma estas experiencias, si bien no cabe guardar silencio frente a ellas.

Libertad de información

13 de febrero de 1977

Con motivo de celebrarse el "Día de la Prensa", se analiza el decreto del Jefe de Zona en Estado de Emergencia de Santiago que ordenó la suspensión indefinida de las transmisiones de la Radio Presidente Balmaceda, por el hecho de pertenecer a un partido político declarado en receso (Democracia Cristiana) (EM, 1 febrero, pág. 3). La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de protección en favor de la Radio (Texto del fallo: EM, 12 febrero, pág. 19). El director de El Mercurio, Arturo Fontaine Aldunate, da una conferencia sobre "Función de la Prensa en la Vida Nacional" (EM, 13 febrero, separata).

La Semana Política

EL CASO DE RADIO BALMACEDA

En el plano jurídico, el problema central que plantea la suspensión de Radio Balmaceda consiste en establecer si en este régimen de emergencia puede el Gobierno o la autoridad militar respectiva suspender indefinidamente un medio de difusión, en virtud de razones de seguridad o por quebrantamiento del receso político.

Los términos en que se formule este amplísimo poder del Ejecutivo pueden ser diversos, pero es importante que en los Tribunales se haya mencionado el carácter virtualmente absoluto de esta potestad.

Corresponde a los jueces y juristas definir la cuestión, en tanto que a la ciudadanía le asiste el derecho de examinar el caso concreto de la suspensión de Radio Balmaceda desde un punto de vista político general.

Desde luego, es evidente la enorme popularidad del Presidente Pinochet en todo el país. La persona de S. E. cuenta con el firme apoyo de las mayorías nacionales,

pese a las críticas o descontentos de círculos aislados. Aunque el Presidente no silencia su compromiso personal con la labor administrativa del Gobierno y su respaldo a ella —singularmente al programa económico—, las objeciones u oposiciones que despiertan determinadas medidas o algunos efectos de la política gubernativa no alcanzan a tocar al Presidente.

El Jefe del Estado queda, pues, al margen de la crítica pública, por corrosiva, injusta o apasionada que ella sea.

El régimen militar, en segundo término, dispone del amplio respaldo ciudadano. Cuenta con una masa de partidarios efectivos; se apoya, además, en el respeto tradicional del pueblo por sus Fuerzas Armadas y finalmente aparece, aun para los descontentos, como la sola alternativa posible de poder.

Sabe la ciudadanía que su opción única es el apoyo al régimen y que lo contrario es el regreso al caos, a la anarquía y, en último término, a la dictadura comunista.

El Gobierno mismo, por último, comete errores y está expuesto naturalmente a los reparos que justa o injustamente le prodigan en público o en privado los ciudadanos. Sin embargo, hay sobre este particular un hecho nuevo. Existe la confianza de que la misma autoridad que comete el error lo advierta y lo corrija. Existe la evidencia de que la continuidad de la Administración es un principio de solución de los problemas nacionales y que el antiguo sistema pendular en que se alternaban autoritarios con demagogos, independientes con políticos, liberales con socialistas, estabilizadores de la economía con inflacionistas, es ya un sistema superado. La línea continúa admitiendo los ajustes y rectificaciones prudentes, aplaca las expectativas malsanas, las tentaciones demagógicas y las ambiciones desmedidas. El país espera frutos lentos pero seguros, logrados por la paz cívica y por la concepción y ejecución de programas a largo plazo.

En este cuadro hay que situar la propaganda negativa de ciertos políticos virtualmente ya sin eco, y la publicidad tendenciosa de algunos contados medios de expresión. ¿Es conveniente para el Jefe del Estado, para el régimen militar, para el Gobierno, la aplicación de mano dura contra ciertos medios informativos? Sin duda este punto es de la competencia y decisión privativas del Jefe del Estado, pero hay un deber ciudadano en representar lealmente el pro y el contra de esta situación.

Nadie ignora que hay sectores políticos desplazados y ofendidos. ¿Dejarán ellos de existir porque se les silencia una radioemisora? De

ninguna manera. ¿Avanzan políticamente mucho con la propaganda radial? Es difícil saberlo, pero la solidez del Gobierno y el visible mejoramiento que se advierte en el país colocan a los opositores políticos en una actitud virtualmente contraria a la realidad. Parece más sensato que el Gobierno autoritario, fuerte, apartidista, independiente de ideologías y empeñado en las realizaciones, deje abiertas las posibilidades de disenter, sin perjuicio de que recabe el castigo más severo a los delitos que se cometan contra el orden público.

La Radio Balmaceda iba subiendo el tono de las críticas e insinuaciones contra el Gobierno. Este último no encontró un expediente mejor que el adoptado. Con ello, sin embargo, las autoridades atraen la atención sobre la radio suspendida, en tanto que los periodistas de todos los sectores manifiestan su solidaridad a los afectados. El costo político de la medida es, pues, muy alto. Debe recordarse que en el régimen de la Unidad Popular la oposición política virtualmente provocaba la clausura de las radios y que la detención de periodistas era motivo para nuevas provocaciones, con todo lo cual el ambiente se tornaba más desfavorable para el Gobierno de la época. Aunque la situación actual es completamente diversa en virtud de la adhesión y la confianza ciudadanas frente al régimen, no parece aconsejable favorecer esta clase de inquietudes.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Hoy es el aniversario de la aparición del primer ejemplar de la "Aurora de Chile". Ayer el perio-

dismo celebró el Día de la Prensa. Siempre en estas ocasiones se renueva la fe en la libertad de prensa y se formulan análisis y comentarios sobre el alcance de la libertad de información como base y protectora de todas las libertades públicas.

En esta oportunidad es conveniente insistir en que la libertad de prensa es una conquista ciudadana que nace con la independencia nacional y que forma parte del más apreciado patrimonio de los chilenos. Esta libertad no es, por cierto, absoluta. Admite las limitaciones constitucionales pertinentes y no ampara ni el abuso ni el delito. Pero la vulneración de esta libertad es mirada con preocupación por la ciudadanía y despertada la resistencia moral de los periodistas.

El régimen militar ha contado con una colaboración notable de la prensa, que no se debe, como algunos podrían suponer, a tendencias oportunistas o al temor. Pruebas han dado los periodistas chilenos de su espíritu de independencia y decisión en otros momentos. El apoyo del periodismo al régimen actual nace de la confianza en la honestidad de las Fuerzas Armadas, en las duras experiencias vividas durante la Unidad Popular y en la esperanza de que este Gobierno estable, firme y pragmático resuelva los problemas crónicos del país. No podemos decir que el respaldo de la prensa es esencial para un gobierno militar, pero nadie ignora que no hay política que pueda llevarse adelante sin opinión pública, sobre todo en un país como Chile.

Es una coincidencia lamentable que el caso de Radio Balmaceda se produzca en los días en que el pensamiento de los periodistas y el co-

mentario de los medios informativos evocan a fray Camilo Henríquez junto a los principios de libertad que han dado validez a nuestra vida cívica.

Pueden las autoridades dar muy buenas razones para la medida y sus defensores legales probar que el Ejecutivo está facultado para ello y para mucho más. El problema, por desgracia, trasciende al ámbito legal. Se ha dicho más arriba que el Presidente, el régimen militar y el Gobierno poseen un amplio respaldo ciudadano. Pero dicho apoyo es básicamente un fenómeno de confianza que, en muchas medidas, tiene su base en las expresiones públicas de adhesión que dan muchos medios informativos al comprobar los hechos morales y materiales favorables que ya hemos señalado. Por el bien del país es de desear fervientemente que este respaldo público de la prensa no se debilite.

Pese a las amplísimas y discrecionales atribuciones que posee el Gobierno en virtud del Estado de Emergencia, parece aconsejable que los medios informativos como tales actúen dentro de un marco legal claro y firme. No hay inconveniente en que disposiciones objetivas previas señalen el campo de lo ilícito, pero no es positivo que la acción de los periodistas y de los medios esté sujeta a una eventual medida administrativa que se adopta según el criterio de la autoridad pertinente y que nadie puede, en el hecho, revisar.

La grave cuestión planteada es precisamente la de la libertad de expresión, entendida como la seguridad de los medios informativos para actuar sin otros límites que los

fijados de manera determinada por la ley que reprime abusos o delitos.

No está de más recordar que el amplio y mayoritario respaldo del periodismo al régimen militar y al Gobierno tiene su mérito en el hecho de que se da libremente, sin temor y sin interés. No se ve la razón de que las autoridades se priven por propia iniciativa de esta fuerza que milita en su favor y que, en lugar de la adhesión de una prensa libre, logren el silencio o el aplauso, obligados o remunerados.

No hay sino ventajas en el ejercicio de la libertad de información, porque la noticia falsa se desmiente con pruebas sólidas; el comentario malévolo se contrarresta con análisis positivos y bien fundados; la objeción crítica fundamentada encuentra su réplica en otros argumentos. Pero la ciudadanía conoce los hechos fundamentales, puede de este modo desoír rumores y se impone también de los diversos planteamientos que surgen normalmente en las cuestiones públicas en todo régimen de convivencia sano.

Es cierto que el país vive una emergencia, que tiene poderosos enemigos externos y que hay grupos que se suman a tales amenazas desde el interior. Conviene desmentar públicamente esos hechos y hacer luz sobre toda amenaza de este género. Pero también conviene que las críticas no se silencien, pues el Gobierno y el país deben admitir el debate y el análisis de lo que ocurre, sin que esto signifique de suyo quebrantar el receso político. Las autoridades saben que la obra administrativa y de rectificación económica que está en marcha es demasiado importante como para no someterla con amplitud a la discusión y hasta a la objeción de mala fe. Esta última no dura mucho en la opinión pública.

Es cierto que el país pide y necesita un régimen autoritario, pero dicha autoridad institucional es compatible con las libertades esenciales y se prestigia más y más en la medida en que las restringe sólo en lo que es legal y estrictamente indispensable para el mantenimiento del orden público.

Normas éticas y desarrollo económico

(20 de febrero de 1977)

La Superintendencia de Bancos dicta nuevas normas sobre intermediación financiera, estableciendo más obligaciones y responsabilidades para las entidades que participan en ella (EM, 19 febrero, pág. 19).

La Semana Política

NORMAS ETICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

Si bien es cierto que desde que se dieron a conocer las bases de la política económica gubernativa comenzó a hablarse de la necesidad de organizar el mercado de capitales, no es menos efectivo que no se concibió esto último como elemento básico de las medidas que se comenzaban a aplicar.

En la opinión pública el mercado de capitales apareció como una nueva modalidad para activar las inversiones y los negocios, pero no existía al ponérselo en movimiento una reglamentación probada sobre la forma en que debían operar las organizaciones financieras y bancarias y las personas individualmente consideradas para un normal juego de los intereses comprometidos en la intermediación de dineros.

Al evidenciarse la crisis de un sistema que no funcionaba con uniformidad, desde que se reconocía que algunas financieras se consideraban normales y otras anormales, se hizo indispensable estudiar la reglamentación que faltaba y las medidas de intervención en determinadas organizaciones, para poner a resguardo las colocaciones de numerosos ahorrantes que se veían

perjudicados por la falta de cumplimiento de las entidades que habían captado depósitos y no estaban en condiciones de responder de su reintegro.

En una primera etapa se consiguió crear un ambiente de regulación, llegándose a otorgar la garantía del Estado a los depósitos de los ahorrantes hasta por sumas individuales de 50 mil pesos.

El esfuerzo del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos no logró conjurar enteramente las situaciones anormales que se habían producido y seguían produciéndose.

Así se comprende que haya sido necesario poner en vigencia nuevas disposiciones a fines de esta semana para conseguir una regularización más satisfactoria que la alcanzada anteriormente.

Las nuevas normas de intermediación financiera juegan dentro del DL. 1.638, del 30 de diciembre del año último, y de los acuerdos adoptados el 19 de enero de este año en el Consejo Monetario.

La circular señala que "los únicos efectos de comercio que pueden intermediar las instituciones financieras autorizadas, sin que éstas se obliguen directa o indirectamente a su pago, son los pagarés y letras de cambio emitidos por empresas del Estado o sociedades anónimas y

cuya emisión se encuentre previamente registrada en la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, hecho que deberá establecer la institución financiera con el correspondiente certificado emanado de dicha Superintendencia".

"En consecuencia, agrega la declaración, cualquier otro efecto de comercio que una institución financiera autorizada coloque o negocie con el público deberá necesariamente llevar incorporada la obligación o responsabilidad en el pago de la institución financiera, ya sea en forma indirecta, como suscriptor de un pagaré o aceptante de una letra de cambio, o en forma directa como aval o fiador o endosante".

Las disposiciones citadas abarcan a 49 financieras, y los términos en que se individualizan tanto las instituciones financieras autorizadas como la forma de garantizar las operaciones son suficientemente rigurosos para considerar que se ha hecho un serio avance para sanear el mercado de capitales.

MORALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS

Las progresivas precauciones que se han venido adoptando eran esperadas para evitar que continuara subsistiendo una falta de confianza moral en los negocios.

También por este camino se notifica al país que las operaciones del mercado de capitales no son en absoluto una amenaza para la estabilidad de la política económica y que el Gobierno no sólo procedió a cautelar los intereses de los pequeños ahorrantes afectados por las actuaciones de las financieras, sino que se propone que el conjunto de

operaciones que se refieren a ese sector se desenvuelva bajo normas serias y que contribuyan a estimular la inversión y a reprimir los negocios simplemente especulativos.

Otro aspecto al que hay que referirse en esta oportunidad es a la confusión producida entre el negocio bancario y la obtención de recursos exclusivamente para el desarrollo de industrias dependientes de los que asumen dichos negocios bancarios.

Nadie discute ni se podría oponer a que los poseedores de empresas pudiesen utilizar créditos bancarios para movilizarlas, pero muy distinto es el caso de los que han recurrido a operar instituciones bancarias exclusivamente con propósitos de expansión para negocios propios, con los lamentables resultados que han quedado a la vista en bancos que se consideraban bien cimentados y dirigidos.

Es necesario asegurar las bases para un funcionamiento permanentemente sano de la actividad bancaria, aunque para ello fuera necesario modificar la legislación vigente.

La función bancaria debe estar claramente deslindada de afanes especulativos actuales o potenciales. Y, por sobre todo, hay que evitar que a pretexto de un funcionamiento normal de la tasa de interés se excedan las operaciones en favor de sectores, empresas o personas determinados, porque es bien sabido que la tasa de interés está regulada por una normal emisión de dinero y que al violentar esta última a lo único que se llega es al estímulo de la inflación y, en muchos casos, sólo para beneficio de sectores limitados.

Las consideraciones antes estampadas tienen el propósito de contribuir a un restablecimiento de la ética en los negocios, lo que es perfectamente factible dentro de una economía en que no desaparezca una saludable libertad unida a la necesaria vigilancia de los hábitos comerciales y bancarios.

Hay que tener en cuenta que en la medida en que se logre moralizar la vida económica se hará la mejor defensa del plan que el Gobierno viene poniendo en práctica con una amplia cooperación de la ciudadanía y no pocos sacrificios de los que trabajan y producen.

Se comprende perfectamente que las difíciles obligaciones que recaen sobre el equipo económico no hayan permitido ir eliminando algunos hábitos inveterados en nuestra organización económica. Pero ello no significa que falte ánimo para emprender una labor que depure el ambiente nacional y que haga concebir con seriedad a toda la ciudadanía, y muy especialmente a quienes pueden orientarla, como son los medios de comunicación, que el asentamiento de una labor de Gobierno que tantos logros ha alcanzado requiere una acción más ejemplarizada.

Contra el extremismo

(13 de marzo de 1977)

En los primeros días de marzo se suceden acontecimientos políticos que son analizados en el comentario: el día 10 renuncia el gabinete ministerial, procediéndose al reemplazo de dos ministros (EM, 12 marzo, pág. 1). El viernes 11 el Ministro Secretario General de Gobierno denuncia la violación del receso político por parte de los dirigentes demócratacristianos Andrés Zaldívar y Tomás Reyes, quienes hicieron circular documentos con sus opiniones políticas entre los militantes del partido (EM, 12 marzo, pág. 30).

Se dicta un Bando que restringe la circulación de nuevos impresos (Bando 107) (EM, 13 marzo, pág. 1).

La Semana Política

CAMBIOS SORPRESIVOS

Al cumplirse tres años y medio del régimen militar y tres de la publicación de la Declaración de Principios, el Gobierno ha procedido a tomar diversas iniciativas.

En la semana antepasada se anunciaron medidas destinadas a expandir la actividad económica. En esta semana se produjo la renuncia colectiva del Gabinete y la petición general de renuncias a los jefes de servicios y funcionarios de la confianza del Presidente. La breve crisis de Gabinete se solucionó con el alejamiento del Ministro de Justicia, don Miguel Schweitzer, quien experimentaba natural cansancio después de la gran labor cumplida, y del Ministro de la Vivienda, don Carlos Granifo, que no podía prolongar más el sacrificio de sus intereses personales envuelto en las tareas de su cargo. Los sucesores, señores Renato Damilano y Edmundo Ruiz, son profesionales de prestigio que se han desempeñado con

éxito en otras funciones públicas y de quienes mucho se espera.

El viernes en la tarde, el Ministro Secretario General de Gobierno, general don Hernán Béjares, reunió a representantes de los medios informativos, a fin de darles a conocer documentos de origen demócratacristiano que revelan en sus autores y propiciadores —cualesquiera que sean— una evidente violación del receso político partidista, lo que se demostraría, hasta el grado de conjura y conspiración, en otros documentos provenientes del extranjero.

La reacción del Gobierno frente a estos hechos ha sido severa. En adelante, la fundación, edición, publicación, circulación, distribución y comercialización en cualquier forma de nuevos diarios, revistas, periódicos e impresos en general deberán contar con la autorización previa de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia. A la misma autorización quedan sujetas la importación y comercialización de

toda clase de libros, diarios, revistas e impresos en general. A ello se añade el decreto-ley dictado por la Junta de Gobierno, en ejercicio de su Poder Constituyente, en virtud del cual se suspende la norma constitucional que garantiza a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos y disuelve los partidos.

Los fundamentos de este decreto-ley expresan que determinados partidos han proseguido en acción no obstante el receso, lo que fomenta la confrontación ideológico-partidista, y que dicha medida es indispensable para propender a la integración armónica de todos los sectores de la nación.

El decreto-ley declara disueltos "todos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político no comprendidos en el decreto-ley N° 77 de 1973", esto es, el que disolvió los partidos marxistas.

Prohíbe, además, la "existencia, organización, actuación y propaganda, por cualquier medio, de todos los partidos políticos, entidades y demás organizaciones señaladas en el presente decreto-ley".

Los infractores a estas normas serán penados con presidio, relegación o extrañamiento, hasta por cinco años, más la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cualquier cargo público o en servicios o entidades en que el Fisco tenga participación mayoritaria.

En consonancia con estas disposiciones, el decreto-ley suspende la vigencia del artículo de la Constitución que garantiza los derechos políticos y ampara a los partidos, norma introducida en su forma actual por una enmienda de 1971.

La opinión pública no esperaba estas medidas ni estaba impuesta de las actividades clandestinas que ha denunciado el Gobierno. Constituye, por cierto, una sorpresa el que se haya estimado necesario reforzar aún más el control en materia de expresión pública y de institucionalidad política.

Sólo una minoría desea el fracaso del régimen militar o propugna un régimen partidista despojado de autoridad, que sería la antesala de un sangriento desquite marxista. En cambio, muchos partidarios responsables del régimen verán con inquietud el curso de los acontecimientos.

Se diría que a los tres años de la Declaración de Principios, los planteamientos de ésta empiezan a ser objeto de cierta revisión interna. El cambio puede apreciarse de la sola lectura de algunos párrafos de la Declaración que dicen así: "Chile ha vivido siempre dentro de un orden jurídico. La majestad de la ley ha estado invariablemente presente en nuestra evolución social. Pero además ese orden jurídico ha sido siempre reflejo del aprecio profundo que el chileno siente por la dignidad espiritual de la persona humana y, consiguientemente, de sus derechos fundamentales. Es en ese respeto por los derechos humanos, más que en su tradición de generación popular y sucesión constitucional de los Gobiernos, donde debe encontrarse la savia y la médula de la democracia chilena". Y añade la Declaración: "Otra importante característica de nuestra tradición jurídica ha sido el respeto por la libertad de conciencia y el derecho a discrepar. Ambos aspectos deberán ser preservados por el

Estado de Derecho que el movimiento del 11 de septiembre se propone recrear, pero cuya vigencia fundamental ha sido mantenida dentro de las medidas de emergencia que él mismo contempla. Los derechos humanos deberán reforzarse para que su ejercicio pueda ser efectivamente disfrutado por todos y ampliarse a sus manifestaciones sociales más modernas. El derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de fijar los límites admisibles de esa discrepancia. No puede permitirse nunca que, en nombre de un pluralismo mal entendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que auspician la violencia guerrillera para alcanzar el poder o que, fingiendo aceptar las reglas de la democracia, sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En consecuencia, los partidos y movimientos marxistas no serán nuevamente admitidos en la vida cívica".

Orden jurídico, libertad de conciencia, derecho a discrepar y exclusión de los partidos y movimientos marxistas es la fórmula de la Declaración de Principios.

CONTRA EL EXTREMISMO

En virtud de los cambios anunciados, el derecho a discrepar públicamente aparece reducido y se convierte en delictiva cualquiera actividad político-partidista, lo que podría regir aun respecto de organizaciones que no eran partidos políticos el 11 de septiembre de 1973.

Pudo configurarse el delito de violación del receso partidista y penársele severamente, con lo cual se habrían desanimado las intenciones más visibles de reconstrucción de la antigua actividad partidista.

En esas mismas normas pudo haberse diseñado lo que es atropello del receso y lo que es ejercicio legítimo del derecho de discrepar, así como lo que es organización lícita de la ciudadanía con fines públicos.

En virtud de una regla constitucional, la actividad política aparece rechazada por completo y esto afecta o puede afectar inclusive a las organizaciones sociales de apoyo al Gobierno, desde que podrían estimarse "entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político".

Por otra parte, la libertad de expresión recibe un cercenamiento al someter a las autoridades militares la circulación de nuevos impresos.

El cerco internacional contra Chile no se aliviará con estas medidas. Las mismas pruebas de ligereza y de falta de autoridad moral en que han incurrido nuestros detractores, al injuriar y repudiar traicioneramente a nuestro país mientras absuelven al Presidente Amin, no podrán aprovecharse con tanta eficacia si damos nuevos argumentos en contra nuestra.

El azaroso y continuo debate en las Naciones Unidas, así como la acción diplomática normal de Chile frente a los países amigos deben verosíblemente contar con más tropiezos, en vista de los cambios políticos recientes.

La interpretación extranjera tenderá por cierto a ligar estas nuevas medidas con la renuncia general de

funcionarios y con los accidentes ocurridos en el mercado de capitales, dando así una falsa imagen de inestabilidad que sería muy negativa para todos los objetivos que el país persigue.

En el plano interno, lo ocurrido no facilita la apertura de canales de expresión y comunicación de la ciudadanía con el Gobierno, pues el carácter general de las normas comprende no sólo a los infractores del receso político sino que podría desanimar cualquier intento de participación civil en la actividad pública que no sea la de servir cargos funcionarios.

En cuanto a la eficacia de la disolución de los partidos, es de temer que la medida agudice y refuerce la actividad clandestina del Partido Comunista, entrenado largamente para estas emergencias. Probablemente otros sectores sean arrastrados a la clandestinidad, situación que nunca es propicia a la moderación y en que triunfan y dirigen los más exaltados. Por último, los grupos que podrían organizarse como intérpretes de algún pensamiento coincidente con el régimen tampoco verán caminos expeditos.

Una pregunta surge en el examen de estos hechos: ¿no están acaso algunos dirigentes de la estrategia del Gobierno llevando a éste a dar la batalla en el terreno deseado por sus enemigos? A estos últimos les

conviene extremar las cosas y presentar al régimen militar como opuesto a las tradiciones jurídicas y políticas chilenas. Les conviene, además, que el bloqueo internacional aumente y que se multipliquen los enemigos internos y externos del régimen imperante. Ocurre a veces que las ayudas y los auxilios más generosos, por excesivos o inoportunos, no constituyen un verdadero socorro.

Por fortuna, los hechos políticos no son irreversibles y no hay tendencias de los acontecimientos que no admitan alguna rectificación. Tal vez los casos que comentamos sirvan para ilustrar al Gobierno acerca de la dirección que sigue y darle confianza de que su compleja tarea va teniendo éxitos en muchos campos, lo cual concurre a facilitar la integración armónica de los chilenos sin necesidad de medidas que aumenten las incomprendiones.

Si es difícil conciliar el orden con la libertad, esa tarea es todavía más ardua en las situaciones de emergencia que vive Chile. De ahí la conveniencia de no abandonarse a los extremismos y de no confundir, ni siquiera respecto de un problema parcial, lo que son los requerimientos de la emergencia con las normas que dan estructura y estabilidad al edificio institucional que construye el régimen.

Encogimiento cultural

(10 de abril de 1977)

Se estudian con mayor detenimiento las consecuencias de las restricciones a la fundación de periódicos, edición de libros e importación de libros e impresos que han sido implantadas desde el mes de marzo.

La Semana Política

ENCOGIMIENTO CULTURAL

No han sido el salitre ni el cobre ni sus otras riquezas las que han permitido que nuestro país alcanzara tempranamente los niveles de organización institucional y de convivencia cívica que son características de su historia. Tampoco ha sido la abundancia material o alguna situación geográfica privilegiada lo que atrajo a nuestras universidades múltiples alumnos de toda América y que desplegó nuestra influencia y nuestro prestigio en diversas latitudes. En verdad Chile es lo que es por su cultura, por el talento de su gente, por la apertura de sus fronteras a todas las ideas y por la capacidad de sus maestros.

Hay desarrollos económicos muy superiores al nuestro. No ha habido, en cambio, en los países de habla española, desarrollos políticos, experiencias sociales y realizaciones institucionales que tengan parangón con los de Chile en los últimos 150 años. Orientaciones equivocadas han frustrado no pocas de las posibilidades culturales y científicas chilenas, pero, con todas sus limitaciones, el cultivo de las capacidades intelectuales ha sido una meta y un logro parcial siempre llenos de promesas. Las universidades han conseguido una tradición de estu-

dio e investigación. Los escritores y artistas chilenos han podido desenvolverse dentro de la pobreza de nuestro medio. Los profesionales y especialistas chilenos han figurado con decoro en los torneos del mundo. En fin, el horizonte intelectual de nuestro país, limitado por las distancias y obstáculos de la geografía, logró ensancharse y ofrecer renovadas esperanzas a la juventud.

El colapso institucional de la Unidad Popular trajo a tierra muchas ilusiones y evidenció errores gravísimos en la conducción de nuestra política y en la visión de nuestra cultura. Pero la reacción contra dicho colapso y el esfuerzo de la reconstrucción nacional no significan que el país pueda partir de cero y hacer tabla rasa de su herencia cultural e intelectual. Es preciso rectificar errores, pero no es lícito destruir o desconocer lo que es nuestra cultura y el derecho que a ella tienen el pueblo, los jóvenes, los ciudadanos todos.

El Bando N° 107 de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia del Área Metropolitana (repetido en las otras zonas del país) obliga a solicitar la autorización previa de la autoridad militar para "la importación y comercialización de toda clase de libros, diarios, revistas e impresos en general", además de

exigir igual requisito para la edición, publicación y circulación de nuevos impresos producidos en Chile.

Pudo creerse que esta norma, que limita enérgicamente la libertad de expresión, iba a tardar en aplicarse o constituía una medida de advertencia, pese a lo cual estas columnas estamparon en su tiempo las observaciones críticas que ella merecía en principio.

Se ha sabido ahora que en Chile no hay libertad de importación de libros e impresos, por establecerlo así disposiciones reservadas que aplica la Dirección Nacional de Comunicación Social.

No interesa que la prohibición recaiga sobre el literato snobista izquierdista Cortázar o sobre el economista derechista Pijou. Lo que realmente debe llamar la atención es que entre nosotros haya trabas para la importación de libros y otros impresos. ¿Se puede importar whisky, cigarrillos y foie gras, pero no se pueden traer libros! Esto es lo que llama la atención, sin que ello implique olvidar por un momento que el país se encuentra en régimen de emergencia.

La Iglesia Católica eliminó el índice de Libros Prohibidos cuando advirtió que las ideas contenidas en aquellos se divulgaban en formas todavía más distorsionadas y perversas a través de plagios y adaptaciones, y cuando percibió, sobre todo, que la permanencia de muchos fieles en una especie de asepsia intelectual los hacía más vulnerables a los viejos errores humanos, aparentemente nuevos bajo el esplendor de lo prohibido.

No es posible que un régimen institucional chileno, que nuestro

régimen militar, establecido para salvar la libertad, resucite el mecanismo del "Index", respecto de los libros extranjeros o de las nuevas publicaciones que puedan efectuarse en Chile.

Esto no es un problema político. Es un asunto cultural. Nadie, absolutamente nadie, por buena intención que tenga y por elevada que sea su ciencia, tiene la posibilidad de decidir con justicia qué es lo que puede o no puede leer la gente adulta. Más aún, el solo hecho de que haya instancias calificadoras de las lecturas lícitas o ilícitas comporta un angostamiento cultural, un encogimiento de las posibilidades de reflexión, de investigación y de crítica a que tienen derecho los chilenos.

No debe olvidarse que el marxismo perdió la opinión pública del país, perdió en buena lid las mentes y las conciencias, fue repudiado por los amplios sectores sociales cuando se le conoció de cerca. Mientras era un promesa aureoleada y lejana, tenía atractivos. Cuando estuvo aquí y empezó a dar frutos, vino el rechazo profundo, desde dentro de la mentalidad nacional. Ahora bien, el marxismo perdió la batalla de las mentes cuando en los puestos de diarios se vendía literatura marxista a bajo precio y cuando las calles y caminos estaban abarrotados de propaganda comunista. El contacto con el pensamiento y la oratoria de los prohombres del materialismo dialéctico produjo la fatiga y sirvió de vacuna para la reacción generalizada del organismo nacional.

Es este un país maduro, que necesita estar informado y asomarse a todos los horizontes del mundo. Ni el marxismo ni ningún otro pensa-

miento, ninguna creación literaria, artística o científica deben serle negados. Gracias a esa madurez, el 11 de septiembre logró el consenso cívico. Sería un error imperdonable que el país se encerrara en una especie de asepsia ortodoxa al estilo franquista, pues corre el riesgo de que aquí sobrevenga lo que en el postfranquismo; el afán de "destape" y la búsqueda infantil de novedades. Chile ha de seguir siendo lo que es: un país sensato que ha triunfado del comunismo, antes que nada en el terreno de las convicciones y que por eso no les teme a las ideas, sino que, al contrario, busca en la confrontación intelectual una de las maneras de vigorizar su cultura. Volver a la menor edad en estos asuntos, aceptar padrinos o inquisidores de las ideas y teorías, someterse a dieta restrictiva de lectura, constituye un peligroso retroceso, incompatible con la gran victoria de la libertad obtenida el 11 de septiembre de 1973.

SEGURIDAD NACIONAL Y CULTURA

El análisis de cualquier medida de Gobierno debe partir de la premisa de que estamos en régimen de emergencia y de que la seguridad nacional no puede ser descuidada.

A nuestro juicio, las restricciones a la importación, producción interna o circulación de libros no contribuyen al resguardo del orden público o de la seguridad nacional.

En efecto, ya hemos dicho que Chile venció al marxismo en plena difusión y discusión de todas las ideas, escritas o habladas. El nivel intelectual del país aconseja que el público tenga amplio acceso a las ideas. El Gobierno y las Fuerzas

Armadas han de tener confianza en que su posición no se defiende rehuyendo las críticas sino afrontándolas y que no hay motivo para que algún libro pueda ser objetivamente peligroso si hay otro y muchos otros que lo rebaten. La amplia apertura intelectual del país es, pues, la mejor salvaguardia del régimen, desde que uno de los privilegios de éste es haber llegado al poder con el aplauso de una mayoría nacional hastiada y desengañada del marxismo. Las nuevas generaciones deben ser también vacunadas en el debate intelectual libre, en que se comparen experiencias, tendencias y teorías, en que se conozca la realidad espiritual y cultural del mundo contemporáneo. Chile forma parte de este mundo y su propia gesta nacional es un buen aporte a nuestra época, por lo que el país no debe ausentarse de ella ni asustarse de los vientos exteriores.

La seguridad nacional no consiste sólo en factores negativos sino muy especialmente en los positivos. Ella exige, por ejemplo, motivar y fundamentar los objetivos nacionales. Ella exige, en nuestro caso concreto, que el desengaño popular acerca del marxismo vaya transformándose en un cuerpo de ideas capaces de inspirar adhesión y que interpreten el Chile de hoy y al chileno de hoy con arreglo a sanos principios racionales. Todo este complejo trabajo requiere lecturas y reflexiones. No hay quien pueda medir la calidad y magnitud de los materiales que se necesitan para producir una nueva mentalidad que corresponda a la tradición y que sea, a la vez, fiel a su tiempo. Sólo la completa apertura de las fronteras a todo lo que signifique literatura,

poesía, filosofía, ciencias políticas y sociales, ciencias naturales y cualquiera otra forma de expresión del pensamiento o de la aptitud creadora del hombre, puede alimentar intelectualmente a los que deben seguir superando al marxismo. Sólo así será factible evitar el antimarxismo repetidor para avanzar en el desarrollo de una auténtica y rica cultura chilena insertada en la corriente de la cultura universal.

La seguridad nacional ha de ser inseparable de una cultura nacional. Esta será sobre todo obra de los jóvenes, de los que inician su magisterio intelectual y de los que se encuentran en pleno aprendizaje. A los jóvenes no puede cerrárseles el

horizonte y acostumbrárseles a que se deslicen a hurtadillas en busca de lo prohibido, que por este solo hecho resulta magnificado y se convierte en invenciblemente atractivo. A los jóvenes hay que habituarlos a la lucha intelectual honesta, al conocimiento y a la investigación francos, a la crítica valiente. Con todo ello gana el país, gana la cultura nacional, gana la seguridad nacional y gana el régimen militar.

La restricción de cualquiera clase de libros es, pues, contraria a la seguridad nacional y contraria a una larga y no interrumpida tradición de libertad intelectual a la que Chile debe gran parte de lo que es.

Gestación institucional

(17 de julio de 1977)

En la celebración del Día de la Juventud, en la cumbre del Cerro Chacarillas en Santiago, el Primer Mandatario anuncia el comienzo de la etapa de "transición para 1981". En ella el Poder Constituyente lo ejercerá la Junta con consulta al Consejo de Estado; se instalará una Cámara Legislativa designada por la Junta. A partir de 1985, esta Cámara se elegirá por sufragio universal (2/3 de sus miembros) y designará al Presidente de la República. Junto con ello se dictará la Nueva Constitución. (EM, 10 junio, pág. 33). También señala como características de la nueva democracia el que será autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación.

La Semana Política

ESTABILIDAD DEL RÉGIMEN

Los anuncios presidenciales de Chacarillas pueden considerarse, desde un punto de vista formal, como proposiciones o delineamientos que se traducirán en definitiva en normas dictadas por la Junta de Gobierno, en el ejercicio de su potestad constituyente. Sin embargo, hay aspectos políticos de fondo que corresponden a la inspiración central del régimen y que aparecen esclarecidos en el discurso del sábado pasado.

En primer término, no habrá cambios institucionales hasta 1980. El país vive una etapa de recuperación en que el poder corresponde íntegramente a las Fuerzas Armadas y que debiera ser aprovechado para gestar la nueva institucionalidad, a la vez que para situar a la sociedad chilena en el camino del desarrollo acelerado. Este desarrollo habrá de ser el genuino suyo para que perdure y verdaderamente florezca, así como la institucionalidad

habrá de continuar las líneas marcadas por el estilo nacional que fija nuestra historia.

Las expresiones del Presidente de la República hacen presumir que calcula en unos tres años más el tiempo necesario para el logro de la plena pacificación del país y para la construcción de las bases económicas y sociales del Chile futuro. En efecto, es prudente pensar que el programa económico proporcione frutos cada vez más abundantes en los próximos años, siempre que las medidas sigan aplicándose de manera inflexible y a condición de que los recursos se administren con la rigurosa prudencia hasta ahora imperante. También puede suponerse que el nivel de empleo y el término medio de los ingresos de la población hayan experimentado aumentos notorios. Finalmente, es dable confiar en que la amenaza extremista externa e interna haya aflojado lo suficiente como para que la paz social y la seguridad nacional se consoliden.

Sólo en 1980 habrá llegado para el régimen el momento de dar un paso hacia la entrega del poder a la civilidad. Las modalidades de este período de transición, apenas insinuadas por S. E., pueden ser muchas y admiten un amplio y sereno análisis. En ningún caso ha llegado todavía el fin del receso político ni está a la vista un cuadro definitivo de futuro institucional.

Las conclusiones políticas claras que resultan del discurso de Chacarillas son que el régimen se mantiene inalterable hasta 1980 y que dentro de una evolución que puede no ser corta, éste busca llegar a la plena participación ciudadana. Además, el Presidente proclama el deber de que gobernantes y gobernados se sometan a una norma jurídica, objetiva e impersonal. Con no menos énfasis reconoce a las Fuerzas Armadas un papel tutelar de las instituciones.

Estas conclusiones políticas simples han producido tranquilidad en la opinión pública, pues llevan al convencimiento de que el régimen no busca la inmovilidad, pero que a la vez las Fuerzas Armadas se empeñan responsablemente en crear un estado de cosas que haga imposible la vuelta al desastre conjurado el 11 de septiembre de 1973.

Es una ventaja que se hayan registrado favorables reacciones externas hacia los anuncios del Presidente Pinochet, pero el Gobierno se encargó de hacer público que las decisiones constitucionales que se adopten a raíz de las ideas expuestas corresponden al ejercicio de la soberanía interna. Resulta oportuna la aclaración porque las complacencias demasiado explícitas e in-

sistentes son la otra cara de la intervención extranjera. Lo que aquí se resuelva debiera ser respetado por nuestros amigos, sin que les corresponda a ellos ni condenarnos ni absolvernos.

Los anuncios a que nos referimos están lejos de implicar una oportunidad para que las figuras políticas con claras posiciones partidistas reiteren sus planteamientos. No hay por ahora lugar a reestrenos, reediciones o reapariciones, sobre todo cuando las personas y los temas no han cambiado mientras el país cambia velozmente, dejando atrás a quienes no han advertido el profundo viraje que las Fuerzas Armadas han impreso a la vida pública y a la conducción económica.

El afán de situar la pugna política en primer plano impulsa a algunos a deducir desacuerdos fundamentales en la Junta de Gobierno basados en declaraciones ocasionales de dos de los miembros de ésta. En lo esencial del régimen, de sus motivaciones y de su justificación profunda, no hay ciertamente ni la más leve desavenencia entre los señores integrantes de la Junta de Gobierno. Pueden, en cambio, existir, y hasta es sano que existan, puntos de vista diferentes sobre determinadas materias. La expresión de estos últimos debe mirarse, sobre todo, como aportes válidos a la maduración del proceso y en nada afectan a la probada estabilidad del régimen. Se diría que, por el contrario, son signos de dicha estabilidad y motivo para que los particulares, las empresas y las colectividades de todo género formulen planes a largo plazo, contando con aquella solidez.

GESTACIÓN INSTITUCIONAL

En los próximos tres años se abren dos alternativas posibles en el terreno político. Una de ellas es el abandono liso y llano de la preocupación por los problemas públicos; la caída en la indolencia cívica y la falta de nuevas vocaciones e ideas políticas, en tanto que un grupo de juristas bosqueja la nueva institucionalidad, muy especialmente sobre la base de la de las Fuerzas Armadas y de la restringida manifestación de la ciudadanía. El otro camino es aprovechar estos años para desarrollar un sistema de vida pública en que florezca la verdadera libertad, en que surjan ideas políticas y en que, sin embargo, el poder no pueda usarse para sofocar la libertad.

La primera alternativa aplaca toda expresión de los problemas públicos, pero no impide que el extremismo y el totalitarismo sobrevivan, se organicen y esperen su hora. Cuando las Fuerzas Armadas se retiren, no habrá poder organizado en el bando de la libertad y del orden mientras los totalitarios esgrimirán las banderas de la democracia y de la libertad.

De ahí la importancia de que el período propiamente militar del régimen establecido el 11 de septiembre de 1973 permita la germinación y gestación institucionales, creando el sistema en que la libertad sea compatible con el orden y en que las instituciones no requieran el apoyo indefinidamente prolongado de las Fuerzas Armadas. Todo esto exige la discusión y propagación de ideas políticas que permitan establecer poco a poco el funcionamiento de las instituciones li-

bres en virtud del dinamismo propio de éstas.

La propiedad privada es el fundamento material de la sociedad libre. La prohibición constitucional de que un ciudadano sea despojado de lo suyo, salvo indemnización al contado de la expropiación, es la única garantía efectiva de la propiedad. El Estado tiene derecho a expropiar, pero no tiene derecho a exigirles crédito forzoso a los expropiados ni a fijar indemnizaciones arbitrarias a las expropiaciones. El derecho de propiedad no está garantido tan estrictamente en las Actas Constitucionales. Es deseable que se discuta la conveniencia de impedir el pago a plazo de las expropiaciones. Para pagarlas, el Estado debiera acudir a su propio crédito, pero no imponer plazos de pago que constituyen el camino del despojo.

El poder coercitivo debe reservarse exclusivamente al Estado. Ningún particular o ningún grupo de particulares, llámese gremio, asociación, cartel de empresarios, grupo financiero, federación sindical, colegio profesional, etc., puede imponer obligatoriamente tarifas, precios, condiciones de trabajo o limitaciones a la libertad del mismo, sobre la base de una coacción fundada en la fuerza del grupo y no en la autoridad de la ley. Tan sólo la autoridad legal puede obligar por la fuerza.

A ningún gobernante, a ninguna Cámara Legislativa, a ninguna autoridad puede permitírsele el abuso del poder monetario. En este sentido, el financiamiento riguroso de los presupuestos, la aprobación de proyectos de acuerdo con su rentabilidad económica y social, la am-

plia publicidad del costo real e individual de los programas de gastos públicos y la independencia del instituto emisor son algunas de las normas decisivas para proteger la libertad. Es preciso estudiar disposiciones constitucionales que hagan imposible el cohecho de los ciudadanos a través de ofertas demagógicas que van a financiarse en último término con el impuesto regresivo de la inflación. La mejor defensa de la libertad se identifica con la defensa del signo monetario, el cual es señal de poderío de la nación, de libertad de los ciudadanos y de patriótica moderación de sus autoridades.

La prohibición constitucional de que las leyes tengan efecto retroactivo, es decir, que se apliquen a situaciones regidas normalmente por la ley anterior, afectando derechos adquiridos bajo ésta, es otra garantía esencial de la propiedad y de la libertad. En un período de reconstrucción y recuperación excepcionalísimo, como el presente, han debido admitirse decisiones legales con efecto retroactivo, pero, a medida que la situación tienda a normalizarse, es deseable que esto no ocurra y que, para el futuro, logre consagración constitucional la no retroactividad de las leyes.

Si la función tutelar de las Fuerzas Armadas sobre las instituciones se identifica con la defensa de la

propiedad privada, de la moneda nacional, del poder del Estado como titular único de la coacción y de la estabilidad del sistema legal, puede decirse que los institutos armados serán garantes de la libertad y que preservarán a la República de todo despotismo.

En la actualidad el Gobierno está cumpliendo de hecho con tales principios y por ello no se deja ver la importancia que tiene la estructuración orgánica y sistemática de los mismos. Sin embargo, parece conveniente aprovechar el período de recuperación con tal objeto. Dentro del mencionado sistema, la intermediación abusiva de los partidos no sería ya posible y la política alcanzaría otro nivel. Supuesto el funcionamiento de una organización jurídica en que se incluyan, entre otros, principios como los señalados, será difícil que la democracia vaya a ser destruida por la demagogia. En el mismo supuesto, el análisis de las alternativas para el tránsito del poder militar al poder civil reviste otro carácter, porque la libertad fundamental queda asegurada a lo largo de todo el proceso. Careciendo la demagogia de recursos económicos y de arbitrios legales, puede discutirse con serenidad acerca de las modalidades en que habrá de expresarse auténticamente la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Solución propia a problemas universales

(6 de noviembre de 1977)

El artículo se refiere a la descomposición moral que se advierte en Occidente, a la sociedad de consumo, y en general al materialismo que corroe a la sociedad, confrontándolo con las soluciones que se pueden dar en Chile a este problema a partir del pronunciamiento militar, el cual debe continuar el proceso iniciado para impulsar la reconstrucción moral y jurídica del país.

La Semana Política

SOLUCIÓN PROPIA A PROBLEMAS UNIVERSALES

La plaga del terrorismo es uno de los signos de la profunda descomposición de los valores y principios de la civilización occidental. Los terroristas no surgen por generación espontánea: hay toda una línea de pensamiento que tolera, provoca e incita esos crímenes, y hay un marco espiritual, social y económico que los hace posibles. Los desequilibrios graves en el campo de las ideas trastornan la sociedad, en tanto que los serios conflictos sociales atentan a la estabilidad psíquica de los individuos o, a la inversa, la hora del desorden social y político es una cita para los inestables y desequilibrados.

El comunismo, como ideología totalitaria, como interpretación dogmática de la estructura y de la marcha de la sociedad, y como instrumento de propagación del imperialismo con sede en Moscú, constituye una gravísima amenaza. Pero no sería tal, si Occidente no estuviera íntimamente debilitado y desquiciado, como lo ha visto con tanta claridad el escritor Solzhenitsyn.

El fenómeno generalizado de la inflación combinada con el estagnamiento o, por lo menos, con el crecimiento débil de las economías; la dictadura de las centrales sindicales sobre los políticos, partidos y gobiernos; el auge del crimen, de la droga y de la pornografía; el desorden y suciedad entronizados en las calles y que avanzan hasta la polución de los mares, son algunos de los síntomas de una descomposición que acusa orígenes espirituales remotos y vastos. La llamada economía de consumo —que no puede confundirse con un régimen económico atento a las señales del mercado y estimulador de la sana competencia—, la exacerbación artificial de los apetitos y la afirmación del individualismo ciego de los instintos, despertaron aspiraciones a un nivel de vida general susceptible de descarrilar la sociedad. La búsqueda de las dos casas y de los dos autos por familia, más todo el equipamiento doméstico a la última moda, debían terminar en la disyuntiva de la inflación o del desempleo, en la crisis energética y en graves tensiones sociales. El desorden íntimo del individuo engendró

la indisciplina social y esta última ha empezado a estorbar la antigua eficiencia de las sociedades industriales y a introducir la locura y la irracionalidad (como es el caso del terrorismo) en pueblos históricamente ordenados, metódicos y cerebrales.

El antiguo orden público y social, que llegó a parecer un valor despreciable frente a las ambiciosas tareas del desarrollo y a las proezas de la tecnología, ha mostrado su carácter necesario desde el momento en que las violaciones de dicho orden se hacen habituales y la indisciplina se transforma en hábito colectivo.

Los conflictos políticos internos y externos complican todavía más esta situación de desorden.

El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 es la respuesta de un país en desarrollo frente a los gérmenes destructivos de la disciplina social. En Chile se dieron los aspectos políticos del desorden contemporáneo y también apareció el desequilibrio psíquico y moral, acompañado de diversos factores que parecen anticipos de lo que ahora viven sociedades mucho más maduras que la nuestra.

La solución chilena puede ser criticada y en algunos aspectos criticable, pero constituye una manera de afrontar al materialismo inhumano que lleva a la descomposición social; implica en realidad un reconocimiento de que los antiguos moldes políticos y de convivencia no sirven para superar el caos circundante; y, sobre todo, traduce la reacción frente a un conjunto de problemas que no son meramente chilenos, que son la carga del hombre contemporáneo y que no pue-

den ya abordarse con el instrumental político o ideológico del pasado reciente.

¿Quién no desea entre nosotros el pleno e irrestricto imperio de las libertades públicas? ¿Quién puede despreocuparse de las causas y consecuencias de la desocupación? ¿Quién no quiere paz, abundancia y bienestar para todos?

No pocas de las críticas al Gobierno representan el afán nostálgico de situaciones que ya no existen. Aquellos valores y bienes que se anhelan están imaginados como si no hubiera existido en Chile la Unidad Popular; como si las fuerzas disociadoras se hubieran desintegrado y desaparecido; como si la situación mundial fuera la de los "milagros" económicos que hacían subir el precio de nuestro cobre sin que el país pudiera aprovecharlo debidamente a causa de su postración política.

Es justo buscar formas de participación cívica y canales adecuados de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía; es indispensable seguir caminando hacia la nueva institucionalidad y el afianzamiento del régimen de derecho; pero resultaría imperdonable la actitud suicida de olvidar nuestra propia experiencia y, sobre todo, de ignorar que Chile afronta problemas de carácter universal, casi siempre mal resueltos en el exterior, y que tienden a agravarse en los países más civilizados y adelantados del planeta.

No parece del caso envanecernos con la solución chilena, tan difícil, sacrificada e internacionalmente incomprendida. Pero lo cierto es que ya no podemos encontrar modelos en el exterior, porque sencillamente no existen.

FINALIDAD HUMANA DE LA SOCIEDAD

El régimen militar chileno parte de la convicción de que la sociedad y la economía tienen por finalidad al hombre como persona. Esto lo afirma la Declaración de Principios del Gobierno. De allí surgen las tesis de que los derechos esenciales de la persona son anteriores y superiores al Estado; que el objetivo de éste es el bien común; que la sociedad política ha de organizarse en un régimen de derecho; que el principio de subsidiariedad señala los límites de la acción del Estado, de los organismos intermedios y del individuo, etc.

Pero este conjunto de premisas se apoya en un mínimo de disciplina social y de seguridad nacional. El individuo no se debe a sí mismo y a sus instintos. La nación no puede entregarse a la anarquía y a la disociación. El Estado debe mantenerse unido y conservar su perfil histórico y cultural.

En un período de emergencia, la fuerza puede reemplazar con éxito a muchas convicciones y establecer un clima de orden, consagración al trabajo y unidad extema en la ciudadanía. Dicho clima no es de suyo durable, si bien su prolongación puede ser propicia al arraigo de virtudes y hábitos capaces de sobreponerse en el futuro a la anarquía. En sí mismo el régimen de emergencia no suprime los conflictos sociales ni elimina tendencias, banderas e ideologías. Tal vez, al contrario, la falta de ejercicio de la actividad pública y la ausencia de confrontación de las posiciones políticas colocan a los partidos e idearios en una cierta hibernación que les per-

mite revivir intactos y hacer tabla rasa de los principios del orden autoritario.

Uno de los problemas que afronta nuestro régimen chileno es cómo asegurar que su inspiración genuina de repulsa al materialismo y a la disociación moral se mantenga, de modo que no vuelva a repetirse la amarga experiencia del período 1970-1973.

Ciertamente pueden buscarse fórmulas constitucionales y legales, pero los textos más sabios serían incapaces de producir un orden social y político duradero, si al mismo tiempo no se restablece el equilibrio interno del hombre y se buscan estructuras sociales más naturales y armónicas.

El actual período de emergencia no debiera ser desfavorable al desarrollo de una obra de formación espiritual, intelectual y física de la juventud, tendiente a reconocer y perseguir la plena realización humana de los individuos, su orden y conformación jerárquica interiores.

Por otra parte, una política económica que pone el acento en el desarrollo de los recursos naturales y que tiende a provocar empleos en la agricultura, la agroindustria, la pesca y la minería, tratando de interrumpir el proceso de congestiónamiento urbano y de hacinamiento poblacional, tendría que llevar a una cierta humanización en la vida del trabajo, en la vivienda y en la convivencia de los chilenos. El desarrollo económico fundado en las posibilidades naturales del territorio debiera coincidir, pues, con una salida de la población desde las grandes ciudades hacia campos abiertos y hacia condiciones éticas y físicas más sanas.

Esta tendencia humanizante debería reforzarse con la regionalización, en la medida en que este programa entregue a las regiones y provincias la conveniente libertad y simplicidad en su gobierno local. La regionalización ha de considerarse, además, como un terreno favorable para experiencias de participación ciudadana que van desde la asesoría o el consejo hasta la adopción de iniciativas de adelanto zonal.

Por último, la progresiva desconcentración del poder que significan el desenvolvimiento administrativo y económico de las regiones a la vez que el retiro del Estado de la actividad productora directa, tiende a consolidar la autoridad y la fuerza del Gobierno en su papel esencialmente político y militar, pero impide que un leve golpe de timón gubernativo central influya

sobre la sociedad entera. En 1970 una minoría se entronizó en el gobierno central y ejerció su influencia nefasta sobre el país mismo. Ello no habría ocurrido en un sistema de vigoroso desarrollo regional y de amplia disseminación del poder económico a lo largo del territorio y a través de la ciudadanía. El centralismo hizo posible el absolutismo del poder y de la influencia en el campo social y político.

Corresponde a las Fuerzas Armadas continuar el proceso liberador que iniciaron el 11 de septiembre de 1973. Este no termina con la derrota del poder político y armado de la izquierda marxista sino que continúa con la reconstrucción moral y jurídica del país, en términos de que la victoria sobre el materialismo y la descomposición moral conduzca al mayor desarrollo posible de los valores humanos.

Repartición de la carga

(13 de noviembre de 1977)

El día 2 de noviembre, parte de los trabajadores de la mina en el mineral de "El Teniente", en Rancagua, no se presentaron a sus faenas (EM, 3 noviembre, pág. 27).

Los dirigentes sindicales señalan que no se trata de un movimiento huelguístico organizado, pero que sí existe inquietud de los trabajadores por no encontrar respuesta a algunas peticiones (EM, 4 noviembre pág. 1). Luego de conversaciones entre los dirigentes y Codelco se acuerda un anticipo general para los trabajadores, y el estudio de una solución más global a sus problemas (EM, 8 noviembre, pág. 1).

La Semana Política

EL TEMA DE LOS TRABAJADORES

Las dificultades producidas en El Teniente a propósito de las remuneraciones de los trabajadores de ese mineral, colocan al país en una situación nueva, que no debe quedar sin análisis.

Desde luego, el Presidente de la República ha dispuesto que se acojan las peticiones principales de los trabajadores y que se practique un estudio a fondo de la situación económica de éstos.

Las solas instrucciones presidenciales indican que la inquietud laboral no tiene origen o propósitos meramente políticos, sino que responde a una realidad. Por tanto, no hay lugar en este caso para que se atribuya a comunistas o demócratas cristianos un conflicto que las autoridades procuran solucionar con la mayor comprensión. Apartar la mirada del contenido de esos conflictos e interpretarlos como maniobras de los adversarios del régimen les otorga a éstos simplemente el beneficio de suponerlos defen-

diendo una causa justa. Se les regala así una posición meritoria que debe pertenecer al Gobierno.

Prueba de ello es que éste se preocupa de atender rápidamente el sentir de los trabajadores.

Es de lamentar, sin embargo, que las fórmulas de arreglo surgieran después de un paro parcial en ciertas faenas, lo que podría alimentar otras ambiciones sobre la base de la infundada hipótesis de que lo ocurrido indicaría una debilidad del Gobierno. Tan errónea conclusión sólo aparece como imaginable porque las raíces y dimensiones del conflicto se mantuvieron en reserva hasta que la prensa informó sobre el ausentismo al trabajo de los mineros.

Si los antecedentes se hubieran conocido con oportunidad, el paro parcial se habría evitado y las soluciones habrían prevenido la crisis.

La equivocada interpretación acerca de la debilidad se apoya también en el hecho mismo del paro. Resulta difícil concebir, en efecto, que se haya concertado y efectuado

una suspensión del trabajo de cierta importancia en pleno régimen de emergencia.

En todo caso, es satisfactorio que el Presidente de la República haya dispuesto las medidas para resolver el problema.

La solución incide en el propio manejo administrativo de Codelco, pues la actual política económica tiende a que las empresas públicas no recurran a ayudas presupuestarias adicionales para el pago de las planillas. En otras épocas, el conflicto laboral dentro de las empresas públicas se solucionaba poniendo en marcha la emisión de billetes nuevos y dejaba, por tanto, inalterable el funcionamiento habitual de aquellas empresas, con sus ventajas y deficiencias, con sus buenos hábitos y sus rutinas antieconómicas. En la actualidad, los trabajadores de las empresas públicas deben ganar sus remuneraciones con cargo a las entradas de aquéllas. Los arreglos laborales implican, por consiguiente, un acondicionamiento interno de las empresas o una expansión de los negocios de éstas, susceptible de financiar las aspiraciones de los trabajadores.

Suele creerse que la situación deprimida de algunos sectores laborales se debe a la política económica del Gobierno, pero esto no es así. Dicha política restringe los medios de pago y las asignaciones presupuestarias, pero la forma en que se distribuyan los recursos dentro de las empresas no tiene por qué ser necesariamente desfavorable a los trabajadores más postergados. Los programas de inversiones y los gastos corrientes no destinados a los trabajadores tendrán que tomar en

cuenta los derechos de éstos, las conquistas sociales y la defensa de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones.

Es posible, sin embargo, que, aun manteniendo las más severa estrictez en los gastos de inversión y operación de las empresas no haya margen para satisfacer las peticiones económicas de los trabajadores. En este caso, los últimos comprenderán la situación con tal que se la expliquen. Los trabajadores han dado muestras de su capacidad para soportar los malos tiempos y de aceptar con lealtad los sacrificios que impone la consecución del bien común. Pero no puede pedírseles que acepten en forma indefinida una distribución desigual del sacrificio que no aparezca justificada.

Lo dicho viene a subrayar la imperativa necesidad de la información. Información interna en las empresas. Información pública al país. Nadie de buena fe dejará de aceptar las limitaciones, insalvables por ahora, que son efecto del derroche de la Unidad Popular, de la caída del precio del cobre, del alto costo de la energía y del corte de las relaciones económicas entre nuestro país y los centros exportadores de capitales. Pero no es tan fácil evitar comparaciones entre las duras faenas en la montaña con recompensa insuficiente, frente a niveles envidiables de remuneraciones y de comodidad en el trabajo. Si tal diferencia se conoce y se explica —pues sin duda debe ser explicable y justificada—, los trabajadores y el país aceptarán el hecho, y se evitarán posibles conflictos.

Lo importante es que no vuelva a repetirse una situación sorpresiva como la ocurrida en El Teniente. A

evitarla contribuirán el espíritu de justicia en la distribución de los recursos de las empresas, la buena administración de las relaciones industriales y la existencia de canales informativos internos y externos que favorezcan la confianza de los trabajadores y de la ciudadanía.

REPARTICIÓN DE LA CARGA

El país sale con dificultades de un régimen socialista paternalista para ingresar a un sistema de libertad. Al parecer, no había método más eficaz para producir la transición que dejar libres los precios, inclusive el precio del dinero que son los intereses, y presionar para el equilibrio del presupuesto introduciendo severos cortes al gasto público.

Esta política, dirigida a largo plazo hacia el desarrollo, y defensora, en último término, de los intereses de los más modestos, pasa forzosamente por un período en que el desempleo castiga a muchos hogares y en que se restringe la capacidad de compra de grandes sectores. El fenómeno va acompañado por la presencia de grandes utilidades en algunas áreas económicas y por el gasto y hasta el derroche en consumos suntuarios o semisuntuarios de parte de ciertos grupos. La libertad de importación, indispensable para exportar y para el juego libre de los precios internos, se presta a algunos desbordes que no pocos encuentran desafiantes.

En pleno proceso de adaptación a patrones enteramente nuevos, pueden echarse de menos ciertos afinamientos y, aun, advertirse fallas. Es virtualmente imposible manejar al mismo tiempo, y sin erro-

res ni vacilaciones, la multiplicidad de variables que influyen en una transmutación económica de la naturaleza de la emprendida por el país. Al poner el acento en una variable, puede no cuidarse lo bastante otra o desentenderse por completo una tercera; luego se invierte el orden de prioridades, y así ocurre hasta el momento en que todo marcha por los nuevos cauces, nunca por cierto sin sobresaltos e injusticias pero, a lo menos, con relativa normalidad.

Las condiciones económicas actuales son bastante más auspiciosas que hace un par de años. Pero la tendencia a la recuperación no es sinónimo de tranquilidad. A medida que las condiciones mejoran, cada cual desea progresar más rápidamente, surgen nuevas necesidades y se aprecian con más agudeza las diferencias sociales y de rentas.

El terreno se presenta propicio al incremento de las críticas a la gestión del Gobierno y para culpar a su política económica de una inquietud que no es más que el fruto de un mejoramiento conseguido con dicha política. Superado el colapso nacional que trajo el marxismo, levantada la economía de la postración de 1975 y puestas las bases para un resurgimiento acelerado, se multiplican los anatemas contra los grupos económicos, viene el clamor por la insuficiencia de los salarios, brotan las peticiones de anticipos y se condena el lujo de las minorías.

El problema planteado en el cobre puede servir a la vez de síntoma y de lección en este cambio de circunstancias, favorable de suyo, pero susceptible de ser mal interpretado y políticamente mal administrado.

Las fallas que se advierten no son consecuencia de la política económica. Los objetivos que esta persigue son justos y van lográndose, por desgracia, con inevitable lentitud. El descontento actual y del próximo futuro es el resultado paradójico de que la situación mejora pero no lo suficiente para que sea visible y despierte el optimismo. Por último, la falta de adecuada información a los trabajadores no protege el orden sino que lo perjudica.

Hay, sin embargo, hechos anormales que no son consecuencia de la política del Gobierno pero que deben ser corregidos. Así, por ejemplo, una cosa es la apertura al comercio exterior y otra distinta es la exacerbación de los consumos suntuarios; una cosa es la libertad de iniciativa en el campo económico y otra muy distinta es la ostentación arrogante de un bienestar desproporcionado para las fuerzas del país y, en todo caso, que no guarda relación alguna con las penurias de gran parte de la población. Estas fallas no son conse-

cuencia de la política económica ni se remedian con el alza de los aranceles a los artículos importados de consumo selecto. No es por la vía de los aranceles sino del impuesto interno como hay que detener el consumo suntuuario excesivo.

El impuesto interno al gasto francamente suntuuario, a través del IVA u otros mecanismos, sería una de las maneras de que se eviten diferencias irritantes entre las clases o grupos sociales. El perfeccionamiento de la fiscalización tributaria general es un paso en el mismo sentido. Debe haber otros. Lo importante es que el acento en la libertad no deje atrás la preocupación por evitar desproporciones injustificadas en el sacrificio económico. Dentro de su misma política, el Gobierno posee herramientas para contener los derroches sin desalentar las iniciativas ni cortar el vuelo de la libertad económica. Salvar lo esencial y lo positivo de esta política, sancionando al mismo tiempo los abusos y adelantándose a salvar las fallas, es lo que se impone hoy.

Papel de la información pública

(12 de febrero de 1978)

Al celebrarse nuevamente el Día de la Prensa se pasa revista a la importancia de la información relativa a las actividades, proyectos, iniciativas o decisiones que toma el Gobierno a través de sus distintos niveles e instituciones, y a la necesidad de que dicha información se canalice en forma expedita hacia la prensa.

Se hace referencia además a la Consulta Nacional, realizada el 4 de enero. En ella se pidió votar "Sí" o "No" al siguiente punto: "Frente a la agresión internacional desatada en contra del Gobierno de nuestra patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país".

El resultado de la consulta fue el siguiente:

Por el SI: 4.012.023 votos (75%)

Por el NO: 1.092.226 votos (20,4%)

Blancos y nulos: 244.923 votos (4,6%)

La Semana Política

PAPEL DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En diversos aspectos el Gobierno militar demuestra una eficacia y una capacidad realizadora pocas veces vistas. No hay duda alguna de que el país, gracias a esta acción, experimenta un cambio profundo de sus estructuras y de sus hábitos. Sin embargo, la misma velocidad del proceso genera nuevos problemas y exige más realizaciones. Entre tanto, la acción contraria al Gobierno, dentro y fuera del país, aprovecha cualquier falta o deficiencia administrativa para desprestigiar el conjunto de la obra.

Una manera concreta de defender el trabajo gubernativo y de darle a su vez agilidad y expedición es ampliar la información pública acerca de aquél.

Como resultado del quiebre de la organización jurídica vigente hasta el 11 de septiembre de 1973 y del control de los militares sobre la maquinaria administrativa del Estado, las modalidades de la función de legislar y de administrar han cambiado. En la actualidad, los proyectos de decreto ley proceden de diversas fuentes y son objeto de estudio por muchos organismos. Igual ocurre con las decisiones administrativas. En algunas oportunidades, una decisión de gran trascendencia se adopta con extrema rapidez y saltando los trámites establecidos. En otros casos, las normas y resoluciones sufren retardos o toman sendas extraviadas, lo que dilata la solución de los problemas.

Un sinnúmero de comisiones y otros organismos estudian, redac-

tan, o evalúan proyectos y programas. Con frecuencia es difícil seguir la pista de un proyecto, así como se ignora a veces quién es el autor de ésta u otra modificación o no se sabe por qué motivo la fórmula legal que ya parecía resuelta y a punto de entrar en vigencia queda paralizada. Sin perjuicio de lo anterior, las grandes decisiones que interesan al Gobierno, ya sea en el orden institucional como en el administrativo o financiero, van aprobándose de acuerdo a las necesidades. No ocurre lo mismo con decisiones como la reforma de la seguridad social y otras, detenidas por obstáculos que a veces surgen en el propio seno del Gobierno.

Las condiciones por completo excepcionales que vive el país en los planos jurídico y administrativo determinan regímenes también excepcionales de legislación y administración.

Lo dicho puede llevar al desencanto a los puristas jurídicos, que con toda razón claman por cauces ordenados, metódicos y objetivos para el debido curso de los asuntos públicos. Muy deseable es llegar a este punto óptimo, pero, por ahora, la realidad del Estado es la que describimos: no existe, en efecto, un sistema, sino varios que funcionan simultáneamente para preparar las decisiones. Por cierto que en la cúspide se impone la unidad, pero no todos los asuntos llegan al nivel supremo en el orden de su importancia, pues avanzan, se modifican o se detienen en los períodos preparatorios de las resoluciones finales.

Sin pretender, por el momento, que esta situación se modifique de manera sustancial, porque ello se-

ría quimérico, vale la pena examinar si no hay algún medio de impedir atascamientos innecesarios o de que se tomen iniciativas que obliguen a desandar caminos en el trabajo de administración y legislación, antes de que los asuntos lleguen a considerarse por el Presidente de la República o por la Junta de Gobierno.

El medio de ir introduciendo cierto orden en los sistemas que preparan las decisiones no parece ser otro que el de la amplia y completa información pública en estas materias.

El país cuenta con medios informativos que no buscan el sensacionalismo ni cultivan la oposición política. Es posible, entonces, que las noticias acerca de proyectos legislativos o administrativos lleguen al público en términos objetivos, dando lugar a que los interesados y los especialistas formulen observaciones. En todos los casos en que la información no vaya a ser mal utilizada o pueda frustrar el éxito de las medidas, resulta ventajoso dar a conocer el pensamiento del Gobierno y brindar oportunidad a que los particulares expongan el suyo. La reserva respecto de asuntos como la legislación cultural, laboral, de seguridad social u otros, conduce a veces a que las autoridades se vean privadas de útiles sugerencias o, por el contrario, de la oportunidad para refutar errores o prejuicios sobre sus proyectos.

También es útil que exista información pública acerca del curso interno de las iniciativas. No son el Gobierno ni el Presidente Pinochet quienes retardan tal o cual medida de beneficio de un sector determinado. El público debiera saber que

el asunto se encuentra en éste o aquel organismo o servicio y que está pendiente del informe de tal o cual perito. Nada es más saludable que la luz plena sobre estas materias, y no hay mejor animador que la opinión pública para los funcionarios remolones o indecisos.

No menos conveniente es conferir a los expertos y funcionarios la responsabilidad personal por sus iniciativas o decisiones. La legislación que se está despachando y las resoluciones administrativas que se adoptan surgen de proposiciones de asesores o expertos. Lo que interesa conocer públicamente es la autoría de tales proposiciones, o, a lo menos, la identidad de los organismos o servicios que las formulan.

La información sobre el contenido de los proyectos de importancia, sobre el itinerario que siguen las tramitaciones y sobre la individualidad de quienes proponen iniciativas, modificaciones, aceleraciones o paralizaciones en estas materias sería de indudable beneficio para el Gobierno. En efecto, todas o casi todas las ineficiencias del sistema podrían advertirse a tiempo, precisamente en el período preparatorio de las normas. En segundo término, la plena luz sobre el desarrollo de los trabajos legislativo y administrativo aumentaría el sentido de responsabilidad de quienes intervienen en aquéllos, evitando dilaciones innecesarias y obligando a estudiar y resolver con la máxima dedicación y sentido del bien común. En tercer lugar, la información pública sobre la labor del Gobierno aliviaría al propio Presidente de la República de las consecuencias de errores o tardanzas que escapan por completo a su control. Muchas ve-

ces se atribuye al Gobierno o a las Fuerzas Armadas lo que con frecuencia es iniciativa y responsabilidad de un funcionario o de algún organismo intermedio. El papel de la información pública es establecer la verdad a este respecto.

FUENTES DE INFORMACIÓN

A fin de que la información pública desempeñe su papel y preste a las autoridades los servicios insustituibles que debe brindarles, es necesaria una actividad periodística de gran eficiencia profesional, pero se requiere igualmente de la disposición de fuentes informativas para suministrar los datos necesarios.

Dichas fuentes informativas son, en este caso, los servicios públicos y las comisiones u organismos asesores que constituyen los canales por donde discurre la labor legislativa y administrativa del país.

Después de un largo tiempo en que la exacerbación del partidismo político y del espíritu polémico hizo pensar que la divulgación excesiva obstaculiza la solución correcta de muchos problemas, puede haberse caído en el extremo contrario, en la excesiva e innecesaria reserva en torno a asuntos que debieran ventilarse en público con más ventajas que inconvenientes.

Esta desmesurada reserva contribuye a dar espectacularidad y sensacionalismo a hechos que pasarían inadvertidos en otro momento; o el carácter de sorpresa a situaciones rutinarias e intrascendentes.

Si los organismos públicos y comisiones legislativas o asesoras entregaran normal y fluidamente noticias acerca de sus trabajos y pro-

yectos sin esperar a que éstos adquieran su perfil definitivo, se conseguiría todo el apoyo que la información pública oportuna podría dar al Gobierno. No importa que los proyectos o trabajos sean susceptibles de modificaciones o afronten críticas. El conocimiento del público acerca de los principales hechos que van a afectarlo en lo sucesivo y el ordenado debate ciudadano sobre esos asuntos de interés público no pueden dejar de beneficiar al país, pero el proceso no se desarrolla en todas sus posibilidades si no hay conciencia en el Gobierno de las ventajas de una participación cívica a través de la información completa y honesta de los acontecimientos y problemas.

De más está decir que hay asuntos concernientes a la seguridad nacional y otros sobre los cuales la información y el debate serán siempre necesariamente restringidos. La institución de la sesión parlamentaria secreta no es sino el reconocimiento de que, aun en el recinto que más miraba al público por su naturaleza y funciones, era imprescindible la reserva en ciertas cuestiones graves.

El error está en exagerar la reserva y en convertir las pequeñas cosas en secretos de Estado. Se equivocan los que confunden la información pública, esto es, la transmisión a la ciudadanía de la verdad de lo que acontece en cuanto tenga interés general con la publicidad o la propaganda de ciertos mensajes. Estas últimas son instrumentos también valiosos de divulgación de

valores, y ciertamente no podrán nunca ser descuidados. Pero la información pública a que nos referimos mira a describir la acción del Estado y de sus servidores tal como es y no como ellos quisieran que fuera conocida y apreciada. Este género de información es el propiamente periodístico y se desarrolla normalmente entre nosotros, de acuerdo a una vieja tradición de libertad de prensa. Sólo que las condiciones del régimen impulsan a ciertos sectores del Gobierno a extremar el celo en cuanto a reducir en lo posible la entrega de noticias que aún no corresponden a realizaciones completas o a decisiones definitivas. La elaboración misma de la acción y lo que ocurre en el período preparatorio a ella suelen descartarse como noticia por los funcionarios. Sin embargo, la luz sobre este período ayuda a la Administración a conocerse a sí misma y ayuda al país a apreciar lo que están haciendo el Gobierno y el pueblo.

Hechos como la Consulta Nacional del 4 de enero evidenciaron el buen juicio del país y, por tanto, el derecho de la ciudadanía a disponer de una excelente información básica. Se ha avanzado en esta última materia, pero se progresaría mucho más en el ordenamiento administrativo e institucional si la luz tranquila del trabajo informativo serio y de la crítica reflexiva cooperara plenamente al positivo esfuerzo de bien público en que se empeñan el Gobierno y las Fuerzas Armadas.

El marco de la discusión

(7 de mayo de 1978)

Se comenta el nombramiento de nuevos civiles en el gabinete, encabezados por el Ministro del Interior, Sergio Fernández, al que se agregan el Ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Cubillos, y de Agricultura, Alfonso Márquez de la Plata.

El 18 de abril se publica en el Diario Oficial un decreto ley mediante el cual se establece una amnistía general, que favorece a quienes han cometido determinados delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

La Semana Política

EL MARCO DE LA DISCUSIÓN

El nombramiento de ministros civiles en las carteras de Interior, Relaciones, Agricultura y Transportes, más el decreto de amnistía general, están lejos de corresponder a la entronización de pretendidas líneas blandas o de trasuntar debilidad por parte del Gobierno. Se diría que, al contrario, el manejo más suelto es índice de una creciente seguridad de las autoridades en la consolidación del régimen.

Como es natural, el rostro civil del Gobierno deja sorprendidos a quienes quisieran perpetuar para siempre la presencia tranquilizadora de los militares en el poder. Los que desean esta paz bajo las armas no comprenden que el ejercicio directo del Gobierno por los militares es necesariamente producto de una emergencia y que tiene, por tanto, carácter transitorio. Si durante el período de la paz armada los civiles no logran crear hábitos e instituciones que funcionen con independencia del respaldo militar, el enorme esfuerzo y el sacrificio de las Fuer-

zas Armadas en la emergencia se frustrarían. De ahí la conveniencia de la progresiva participación civil en el Gobierno, e inclusive, de la formación de corrientes de opinión sustentadoras de una línea que interprete en el campo civil los objetivos patrióticos que movilizaron a las Fuerzas Armadas a intervenir en la conducción del país.

No siempre se comprende que la participación civil es una exigencia de contribución a la responsabilidad, al riesgo y al peso de los asuntos públicos. El propósito dista mucho de ser el desplazamiento de los militares en beneficio de los civiles. Se trata, por el contrario, de un relevo que vaya poco a poco reintegrando a los militares a sus labores específicas y reeducando a los civiles para el ejercicio de la plenitud de las funciones públicas con un sentido nacional superador de antiguos divisionismos, mezquindades y apetitos.

El reemplazo de militares por civiles idóneos en algunos altos cargos no tiene por qué debilitar al Gobierno o significar ablanda-

miento de principios o desvío en la persecución de objetivos. Muy por el contrario, la participación civil tendrá justificación y valor en la misma medida en que aplique criterio flexible y tácticas apropiadas a la gestión política, para la realización de los mismos objetivos planteados en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973.

La ciudadanía tiene que volver a convivir en paz, en orden y en justicia, mediante instituciones que garanticen tales valores y, sobre todo, mediante el imperio de una moral pública que anteponga el interés supremo del país a los fines individuales. El período preparatorio puede no ser breve y será menester una amplia cooperación cívico-militar como ya se la está viendo en magnitudes que no tienen precedentes en nuestra historia. La participación civil irá coincidiendo con el diseño y la marcha de la institucionalidad, en un proceso que requiere valentía y a la vez prudencia, pues ha de conservarse todo lo positivo de este gran momento del país, y, sin embargo, ir más allá de él para edificar un régimen verdaderamente libre y democrático.

Sería un error y una grave injusticia desconocer la enorme capacidad desplegada por el Ejército y por las demás ramas de la Defensa al servicio de la reconstrucción nacional. Sin la firmeza y tenacidad del Presidente Pinochet y sin el despliegue de las grandes virtudes militares de las instituciones castrenses y de orden el país no habría logrado salir del caos y avanzar rápidamente por el camino del progreso, a pesar de las dificultades acumula-

das a su paso. Corresponde ahora a los elementos civiles proseguir, en el campo en que actúan, las líneas trazadas desde el 11 de septiembre de 1973.

Si en algunos ha habido inquietudes porque interpretaron que la participación civil era un debilitamiento y un peligro, otros sectores han creído que la mayor presencia de civiles en el Gobierno era una oportunidad para multiplicar la guerrilla ideológica contra el régimen y para ejercer toda suerte de presiones políticas dirigidas a derribar las medidas que impiden el simple regreso a la situación anterior al pronunciamiento militar.

La oposición al Gobierno militar no parece numerosa, pero tiene voz potente y multiplica con habilidad los ataques. Sus estrategos suelen estar convencidos de que el régimen dispone de menor apoyo que en enero de este año y que hay que dar ahora la batalla para impedir que coseche los frutos de sus éxitos económicos, los que a mediano plazo habrán de transformarse en sociales y políticos.

Derrotados por la Consulta del 4 de enero, perplejos con la amnistía general y las otras medidas liberadoras, han creído rehabilitarse utilizando las iniciativas del Gobierno para exigir más y más apertura política en un intento por acelerar el ansiado advenimiento de los mecanismos electorales. En el orden institucional, los opositores no aceptan otro esquema que el de la democracia según el modelo norteamericano, negando implícitamente que la democracia chilena tiene orígenes muy anteriores a la de Jefferson. En el orden universitario

esgrimen la resurrección de la Fech como un campo de entrenamiento para el juego político. En el orden social atacan el desempleo, pero no admiten medida alguna tendiente a quebrar las rigideces económicas que obstaculizan el crecimiento de las ocupaciones. En el orden internacional, se advierten las coincidencias entre las presiones foráneas para imponernos fórmulas y conductas políticas con análogos movimientos internos.

Parecería que algunos sectores quieren aprovecharse de la voluntad de concordia y pacificación del Gobierno para conseguir mejores posiciones de poder, y que las rectificaciones serias promovidas por el régimen tienen apenas una buena acogida formal pero luego son utilizadas para abrir nuevos puntos de conflicto y para dar paso a nuevas exigencias.

Es interesante, pues, que se precise el marco de la discusión institucional y política. Ni hay lugar para que los numerosos partidarios del Gobierno presuman vacilaciones o debilidades en lo que es el empleo político flexible del propio vigor del régimen; tampoco hay cabida para que se dé por eliminado el período de emergencia y cada cual pueda campar en la actividad partidista como mejor le pareciere, aun perjudicando la unidad y seguridad del país. Algunas decisiones severas del Ministro del Interior, relativas a impedir reingresos inconvenientes al territorio y a la expulsión de extranjeros no merecedores de la hospitalidad del país, son indicios de que la presencia civil en el Gobierno es compatible con una afirmación clara de la autoridad.

EL RÉGIMEN

La incorporación de civiles se ha efectuado en el plano del Gobierno mientras que el régimen militar permanece inalterable. Las Fuerzas Armadas asumieron un compromiso el 11 de septiembre de 1973 y lo mantienen. El régimen como tal no ha retrocedido ni cambiado. La circunstancia de que vayan ahora civiles a otros puestos de responsabilidad política evidencia que nuevos hombres llegan a los frentes de lucha y desgaste, cuyas contingencias afectarán a esos hombres y al Gobierno pero no al régimen.

La evolución política necesaria hacia el régimen civil se ve todavía remota. Se diría que estamos en una etapa de gobierno civil y régimen militar. El otro paso implica tiempo y requerirá de los acondicionamientos indispensables para que la demagogia y la irresponsabilidad no dilapiden lo ganado en estos años.

Por otra parte, el gobierno sigue y seguirá siendo presidencial. El Presidente es a la vez Jefe de Estado y del Gobierno, como corresponde a nuestras tradiciones republicanas. S.E. es cabeza del régimen militar y cabeza del Estado y del Gobierno. Tal situación no se ha alterado en lo más mínimo con la designación de nuevos Ministros civiles.

El Ministro del Interior, señor Sergio Fernández, no es "Premier" ni Primer Ministro como algunos habían supuesto. El encabeza el Gabinete —no el Gobierno—, recibió el encargo especial de proponer a S.E. la nómina de Ministros y tiene también la misión específica de

ejecutar las acciones encaminadas a la nueva institucionalidad.

Como ya se ha dicho, las características que rodearon su nombramiento tienen más que todo un fin práctico. Primeramente, se trataba de conferir unidad de acción interna y externa al Gobierno, para lo cual S.E. concibió la idea de hacer responsable a un equipo civil de dicha labor, tal como existe un equipo militar a cargo de la seguridad y un equipo técnico a cargo de la gestión económica. Razones de coyuntura dan singular prioridad actual a la acción política. De ahí que el nombramiento y las primeras iniciativas del Ministro Fernández hayan tenido relieve. Un segundo motivo llevó al Presidente Pinochet a proceder en la forma en que lo hizo: parecía necesario nombrar a un ejecutor responsable de encauzar y ordenar el proceso de la nueva institucionalidad. Esta última no depende sólo de la formulación de buenas normas a cargo de expertos juristas, sino que implica un conjunto concertado de decisiones que han de adoptarse por quien disponga de autoridad suficiente para exigir a las autoridades y organismos la tarea que conduzca a la institucionalización. Ningún Ministerio está en mejores condiciones que el de Interior para cumplir con eficacia esta misión orientadora y coordinadora.

Las primeras resoluciones ministeriales han demostrado que el Gobierno se mantiene en la línea fijada en Chacarillas y, sobre todo, en el espíritu de aquella declaración presidencial. Dicho espíritu está íntimamente relacionado con el propósito de establecer y mantener un ordenamiento jurídico objetivo en que sea la ley la que mande y no sea ésta impuesta por las voluntades pasajeras. Esta juridicidad del Estado y del Gobierno, manifestada en que los organismos de poder se sujeten a la norma preestablecida, tiene más importancia para la vigencia de los derechos humanos y para el bien público en general que el regreso a los partidos y a las elecciones. Sin querer desvalorizar ni los unos ni las otras, se diría que el actual marco de la discusión transcurre dentro del régimen militar y por el período suficiente para que se cumplan los objetivos económicos y sociales que miran al desarrollo ordenado y, consiguientemente, a la victoria sobre la pobreza y la cesantía. Pero ese mismo desarrollo exige un régimen de derecho, un acatamiento constante de las autoridades a la ley. Ello no es debilidad de un Gobierno sino mando con fuerza moral, pues pasando una tras otra las circunstancias extraordinarias se hacen injustificadas las facultades de excepción.

Comunistas y creyentes

(11 de junio de 1978)

Tanto en el país como en el extranjero tiene lugar una serie de manifestaciones de protesta por los desaparecidos, en la que participan tanto marxistas como sectores cristianos: 20 sacerdotes y jóvenes laicos efectúan actividades de protesta en la Parroquia San Antonio María Claret (EM, 2 de junio, pág. 33); se realizan cerca de 60 huelgas en el exterior (EM, 3 de junio, pág. 37; EM, 4 de junio pág. 37), así como jornadas de ayuno en sedes internacionales, parroquias y sindicatos (EM, 6 de junio, pág. 25). A raíz de lo anterior, se dan a conocer los actuales planteamientos del comunismo cubano sobre la religión.

La Semana Política

DESENMASCARAMIENTO

La protesta por los desaparecidos, realizada a través de huelgas de hambre y algunas modestas manifestaciones callejeras, no ha impedido que el Gobierno continúe investigando los casos respectivos y estudiando la manera de solucionar los aspectos humanos subsanales de aquel problema.

Paralelamente a la realidad moral y social de los desaparecidos se ha evidenciado públicamente la presencia activa de los comunistas que, por primera vez durante el régimen militar, se quitan la careta y aparecen explotando políticamente el dolor de los inocentes, en lo que siguen una vieja táctica demostrativa de la frialdad con que operan.

A eso hay que añadir que, una vez más, los comunistas empiezan a echar por delante a sectores cristianos de izquierda, los que suelen ofenderse cuando se les acusa de servir de instrumentos a la antigua secta totalitaria. Sin embargo, su obsecuencia ideológica y política

con el comunismo justifica las prevenciones más categóricas respecto a esas actitudes revestidas de humanidad, paz, y libertad, que en el hecho están encuadradas en una estrategia amplia de carácter mundial que pretende hacer de Chile una cabeza de puente del comunismo.

La acción comunista se ha revelado además tan vigorosa que, nuevamente, los sectores medios o moderados se encontraron con que el control de la protesta pasaba a manos de los marxistas. Ni siquiera la realización de huelgas de hambre en las iglesias o la participación de sacerdotes en el movimiento hizo perder de vista a la opinión pública el verdadero carácter del fenómeno. Pareciera que una dinámica incontrastable llevara la rebeldía moderada contra el régimen actual hacia el comunismo, pasando por ciertos cristianos alborotados, así como la Democracia Cristiana moderada no pudo evitar el MAPU y el régimen mismo desembocó en Allende.

Los factores indicados llevan a pensar que el camino de la verdade-

ra democracia chilena no se encuentra en la alianza de los enemigos internos y externos del régimen militar sino en la evolución inteligente de éste hacia un sistema institucional objetivo que asegure la libertad y la justicia. Perder, en cambio, la cabeza en protestas donde se confunden valores humanos legítimos con la presión de una campaña internacional comunista es hacer el juego a ésta. No por casualidad se realizan simultáneamente en 17 países y 79 ciudades diversas huelgas de hambre que comprenden a 579 personas. La participación de figuras comunistas mundiales en el movimiento no permite desconocer el verdadero espíritu y la finalidad directamente política de las protestas. Los desaparecidos y el dolor de los familiares han sido apenas un pretexto para dar consistencia a una oposición marxista por primera vez visible dentro del país desde el 11 de septiembre de 1973.

El desenmascaramiento del comunismo operante en Chile es algo positivo dentro del triste ciclo de protestas que no sólo pretende urgir al Gobierno, sino alimentar la esperanza de los familiares afligidos a través de versiones acerca de que las personas buscadas se encontrarían presas en tal o cual lugar. El desenmascaramiento es positivo porque obliga a la ciudadanía a reaccionar e implica una advertencia de que los agitadores intentarán a toda costa mantener viva la interrogante dolorosa a fin de que no se produzcan la reconciliación y la paz.

COMUNISTAS Y CREYENTES

En diciembre de 1975 se celebró en La Habana el Primer Congreso

del Partido Comunista de Cuba. Una de las tesis de dicha conferencia se refiere a "la religión, la Iglesia y los creyentes". Ese documento repite los principios clásicos marxistas sobre religión e indica la estrategia de los comunistas con los cristianos.

Como es obvio, la tesis cubana muestra que el totalitarismo ateo no ha cambiado: "La religión es una de las formas de la conciencia social y, como tal, un reflejo de la conciencia del hombre de la realidad exterior. Su origen es terrenal y no celestial. Su particularidad respecto de las demás formas de la conciencia radica en que por su esencia constituye un reflejo fantástico, tergiversado y falso de dicha realidad que está determinado fundamentalmente por las condiciones de vida de los hombres". (Cap. 1, N° 7).

En otro lugar el documento establece que "para el partido (comunista), cuyo fundamento filosófico es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, la religión no es un asunto privado, pues entre sus deberes está el actuar de modo que las masas gradualmente, en el curso de la lucha activa por la nueva sociedad, se liberen de las creencias religiosas". (1, 14).

"El partido considera indispensable que la enseñanza que se imparta sea estrictamente científica y laica, basada en la concepción marxista-leninista sobre la educación comunista de las nuevas generaciones" (III, 40), enseñanza que ha de estar "enteramente libre de concepciones o puntos de vista extraños a la ciencia, tanto en la exposición como en la explicación de los hechos y fenómenos naturales y sociales". (III, 42).

La "tesis" cubana analiza "las responsabilidades de nuestra revolución con el resto del movimiento revolucionario y su especial significación para América latina, que aporta más de la tercera parte de la membresía católica mundial, y donde el catolicismo cuenta con una gran penetración e influye en las capas sociales más humildes". (VI, 67). Sigue más adelante el documento aseverando que "es notoria y frecuente la aparición de grupos cristianos y de clérigos de diversos países de nuestra América que se incorporan a las luchas revolucionarias o que las favorecen desde posiciones que estiman compatibles con su fe religiosa. Grupos como los denominados "cristianos por el socialismo", "sacerdotes tercermundistas", "sacerdotes por el pueblo" y otros constituyen fuerzas que, no obstante las confusiones que pueden expresarse en sus plataformas programáticas y tácticas, no pueden subestimarse en la lucha contra el imperialismo, por la liberación nacional y social. Lo mismo puede decirse de las agrupaciones políticas de izquierda cristiana que se conciertan con los partidos comunista y obreros y movimientos revolucionarios y progresistas de América latina" (VI, 68).

"El Partido de la clase obrera, por principio, no puede dejar de ofrecer su apoyo a la lucha de los sectores cristianos avanzados y renovadores" (VI, 71). Ese apoyo conducirá a la participación de "comunistas y cristianos revolucionarios" en la "edificación socialista", la que a su vez "ayudará a dichos creyentes a librarse de cualquier superstición que les estorbe la realización de los fines verdadera-

mente humanos de la sociedad que construimos" (XI, 96).

La estrategia está cínicamente expresada: "ciencia y religión se oponen inconciliablemente" (III, 28); "es poco menos que ilusorio superar la religión sin arrancar sus raíces sociales" (1, 11); la búsqueda de cooperación con los creyentes revolucionarios, que "no sólo exponen y propagan los éxitos de la edificación socialista en nuestro país, sino que proponen y logran a menudo la adopción de resoluciones en favor de los pueblos que luchan por su liberación, de condena de los regímenes racistas, neofascistas y tiránicos, contra el colonialismo, etc." (VII, 80); a este respecto, el "Partido aprecia como positiva la acción de estos dirigentes eclesiásticos, algunos de ellos con personalidad continental" (VII, 81), y, en fin, el triunfo de la "edificación socialista", gracias al valioso aporte de los cristianos.

UNA RESPUESTA

La estrategia internacional comunista respecto de los cristianos en América latina es algo que Chile había venido sufriendo varios años antes del régimen marxista de Allende. La situación es ahora más clara y el compromiso político de izquierda por parte de sacerdotes, monjes y laicos cristianos empieza a ser un hecho conocido y no objetado oficialmente por las autoridades eclesiásticas, tal vez sobrepasadas por el fenómeno revolucionario y por las condiciones sociales difíciles de que éste se alimenta.

Se diría que, en ausencia de expresiones políticas públicas, sectores democráticos cristianos y ag-

nósticos, así como elementos de la izquierda marxista, encuentran su refugio en las iglesias y están haciendo de la religión un agitado campo de batalla, tan perjudicial para el país y el régimen como para las propias finalidades de las iglesias.

Hace falta, cada vez con más urgencia, que la inmensa mayoría ciudadana, que opta por la libertad dentro del orden y que busca la justicia efectiva por sobre la demagogia inoperante, encuentre también formas de pensamiento y expresión así como de adecuada organización.

Es ya un hecho que el comunismo se moviliza con eficacia y que penetra a profundidades desconocidas en los sectores religiosos. El apoyo ciudadano al régimen de orden y de engrandecimiento económico no puede ser pasivo ni contentarse ideológicamente con un ideario materialista de sociedad de consumo. La libertad económica ha de ser una de las expresiones del valor de la persona humana y no un pretexto para el desenfreno de los egoísmos. La acción para el desarrollo social, iniciada con tanto entusiasmo por algunos sectores de empresarios al empezar el régimen militar, debiera continuarse y ampliarse con el concurso creciente de los organismos gremiales y de la ciudadanía toda. La actividad intelectual universitaria ha de enrique-

cerse en la búsqueda de los valores propios de nuestra nacionalidad acreditando al mismo tiempo el carácter libre y crítico de la vida académica. En fin, son muchos los recursos de que dispone una nación para afirmarse a sí misma y enfrenar a sus enemigos. Lo importante es que tales recursos se empleen y que el régimen militar logre más y más colaboración activa para que el país siga avanzando en la línea de independencia que se ha trazado.

Si se han equivocado los que pensaban que Chile aceptaría un régimen fascista de corte totalitario o una dictadura personalista según el modelo histórico latinoamericano, también se equivocan los que creen que el régimen militar es un sistema de administración destinado a dar tregua a las tendencias que antes del 11 de septiembre de 1973 condujeron el país a la anarquía.

La propaganda internacional obsesionante a propósito de los derechos humanos y las presiones de las minorías políticas internas no pueden hacer perder de vista al país que, pese a sus actuales dificultades, tiene en sus manos la oportunidad quizás única de resolver los problemas básicos de su estructura social y económica, así como de reconstruir una ética nacional que desafíe los morbos de la sociedad contemporánea permaneciendo fiel a la esencia de la historia chilena.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

Carácter fundacional de la intervención (16 de septiembre de 1973).....	387
Comunicación social (21 de octubre de 1973)	392
Supremo Gobierno (28 de octubre de 1973).....	396
Movilización social (10 de febrero de 1974).....	400
Un nacionalismo pragmático (17 de marzo de 1974).....	404
Régimen de partidos (7 de abril de 1974)	408
Asume el Poder Ejecutivo presidente de la Junta (30 de junio de 1974)	412
Desarrollo social (4 de agosto de 1974)	416
Participación indispensable (26 de enero de 1975)	420
Baja moral de la prensa en la era marxista (9 de febrero de 1975)	424
Comunicación necesaria (9 de marzo de 1975)	428
Estado y libertad económica (22 de junio de 1975).....	432
Situación universitaria (24 de agosto de 1975).....	435
Constitución vigente (21 de septiembre de 1975)	439
Nuevas circunstancias favorables (8 de febrero de 1976)	443
Un paso más (27 de junio de 1976).....	447
Autoridad del Estado (8 de agosto de 1976)	451
La inevitable política (10 de octubre de 1976).....	455
Unidad y solidaridad (31 de octubre de 1976)	459
El régimen militar (14 de noviembre de 1976)	463
Otra quimera del oro (23 de enero de 1977)	467
Reforma constitucional (6 de febrero de 1977)	471
Libertad de información (13 de febrero de 1977)	475
Normas éticas y desarrollo económico (20 de febrero de 1977)	479
Contra el extremismo (13 de marzo de 1977)	482
Encogimiento cultural (10 de abril de 1977)	486
Gestión institucional (17 de julio de 1977)	490
Solución propia a problemas universales (6 de noviembre de 1977)	494
Repartición de la carga (13 de noviembre de 1977)	498
Papel de la información pública (12 de febrero de 1978).....	502
El marco de la discusión (7 de mayo de 1978)	506
Comunistas y creyentes (11 de junio de 1978)	510 □